Osakidetza



LETRADO/A CORPORATIVO/A

PREGUNTAS

1. **Son derechos fundamentales tutelables a través del procedimiento preferente y sumario:**

   a) Los derechos incluidos en los artículos 15 a 29, así como los artículos 14 y 30.2.
   b) Los derechos fundamentales de la Sección I del Capítulo II del Título I en exclusiva.
   c) Todos los que están incluidos en el Capítulo II del Título I.
   d) Todos los derechos del Título I.

2. **La designación del Defensor del Pueblo español:**

   a) Compete al Congreso de los Diputados.
   b) Se hace para un período de cuatro años.
   c) Compete al Gobierno de la Nación.
   d) Compete a las Cortes Generales.

3. **Afirma la Constitución Española de 1978 que:**

   a) Todos los españoles tienen el deber de conocer todas las lenguas oficiales.
   b) La capital del Estado es la Villa de Madrid, sin perjuicio de que las Cortes Generales pudieran determinar otra ubicación por Ley orgánica.
   c) La forma política del Estado español es la Monarquía democrática.
   d) El pluralismo político es uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico.

4. **Son susceptibles de ser tutelados a través del Recurso de Amparo:**

   a) Todos los derechos fundamentales del Título I.
   b) Todos los derechos fundamentales que están incluidos en el Capítulo II del Título I.
   c) Los derechos fundamentales señalados en el artículo 53.2 de la Constitución y aquellos otros señalados en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
   d) Los derechos fundamentales incluidos en la sección I del Capítulo II del Título I así como el derecho a la igualdad y la objeción de conciencia.

5. **La Constitución:**

   a) NO señala particularmente la edad en que se alcanza la mayoría de edad puesto que eso lo define el Código Civil.
   b) Admite el derecho de asilo para todos los ciudadanos y las ciudadanas españoles/as.
   c) Reconoce que una persona nacional española puede perder su nacionalidad.
   d) NO admite la extradición pasiva para los/las nacionales españoles/as.



6. **Entre las categorías discriminatorias que aparecen señaladas en el artículo 14 de la Constitución NO se recoge:**

   a) La etnia.
   b) El sexo.
   c) La opinión.
   d) El nacimiento.

7. **La detención preventiva:**

   a) NO podrá durar más de veinticuatro horas.
   b) NO podrá durar más de cuarenta y ocho horas.
   c) Está prohibida por la Constitución.
   d) NO podrá durar más del tiempo estrictamente necesario.

8. **Es susceptible de ser tutelado a través del Recurso de Amparo:**

   a) El derecho a la salud.
   b) Todos los derechos fundamentales que están incluidos en el Capítulo II del Título I.
   c) El derecho de petición.
   d) El derecho a la vivienda.

9. **Conforme determina la Constitución de 1978:**

   a) Cualquier ciudadano/a podrá recabar la tutela del derecho a la salud a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
   b) Solo por ley, que en todo caso deberá respeta su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en su artículo 161.1.a).
   c) Se reconoce el derecho de toda persona detenida a ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención no pudiendo ser obligada a declarar salvo en caso de declaración del estado de alarma y excepción.
   d) Quedan excluidos de la extradición los actos de terrorismo.

10. **Conforme determina la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, la competencia de los órganos jurisdiccionales en el País Vasco se extiende:**

    a) En el orden contencioso-administrativo, a todas las instancias y grados.
    b) En el orden penal y social, a todas las instancias y grados, con excepción del recurso de casación.
    c) En el orden penal y social, a todas las instancias y grados, con excepción del recurso de revisión.
    d) En el orden civil, a todas las instancias y grados, incluidos los recursos de casación y de revisión en las materias del Derecho Civil Foral propio del País Vasco



11. Conforme determina la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, la responsabilidad penal de los miembros del Parlamento Vasco:

a) Será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo cuando los actos delictivos fueran cometidos fuera del ámbito territorial del País Vasco.
b) Siempre será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
c) En todos los casos será exigible ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
d) Corresponde al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, salvo en delitos contra la seguridad del Estado.

12. Conforme determina la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, señale cuál de las siguientes respuestas NO es correcta:

a) El Reglamento interno del Parlamento Vasco debe ser aprobado por mayoría absoluta de sus miembros.
b) Los períodos ordinarios de sesiones durarán como mínimo ocho meses al año.
c) La Cámara podrá reunirse en sesión extraordinaria a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de sus miembros.
d) Las leyes del Parlamento serán promulgadas por el Presidente del Gobierno Vasco.

13. Conforme determina la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, en el caso de la reforma del Estatuto:

a) La iniciativa corresponderá al Parlamento Vasco, a propuesta de una tercera parte de sus miembros, o al Gobierno Vasco.
b) La iniciativa corresponde al Parlamento Vasco, a propuesta de una quinta parte de sus componentes, al Gobierno Vasco o a las Cortes Generales del Estado Español.
c) La iniciativa corresponde al Parlamento Vasco a propuesta de la mayoría absoluta de sus componentes.
d) La iniciativa corresponde al Parlamento Vasco o a las Cortes Generales del Estado Español a propuesta de la mayoría absoluta de sus miembros.

14. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, indíquese la afirmación correcta:

a) El Estatuto de Autonomía del País Vasco reconoce el derecho de Navarra a formar parte de la Comunidad Autónoma del País Vasco de acuerdo con el procedimiento establecido en el mismo.
b) El Estatuto de Autonomía del País Vasco reconoce el derecho a formar parte de la Comunidad Autónoma Vasca a las provincias de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, no así a Navarra.
c) La Disposición Transitoria 4ª de la Constitución Española establece el procedimiento para la incorporación de Navarra a la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el supuesto de que aquella decidiera dicha incorporación.
d) El Estatuto de Autonomía del País Vasco no hace mención del derecho de Navarra a formar parte de la Comunidad Autónoma Vasca.



15. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, en materia de Sanidad interior, corresponde al País Vasco:

a) El desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran su régimen económico.
b) El desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado.
c) La ejecución de la legislación del Estado.
d) La competencia exclusiva.

16. De acuerdo con su Estatuto de Autonomía, la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia exclusiva en materia de:

a) Sanidad interior.
b) Asistencia Social.
c) Legislación laboral.
d) Seguridad Social, salvo las normas que configuran el régimen económico de la misma.

17. En relación con el proceso de reforma del Estatuto de Autonomía del País Vasco, indíquese cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA:

a) La iniciativa de reforma corresponde a las Cortes Generales del Estado español, al Gobierno Vasco y al Parlamento Vasco, a propuesta de la mayoría simple de sus componentes.
b) La propuesta de reforma habrá de ser aprobada por el Parlamento Vasco mediante mayoría cualificada de 2/3 de sus componentes.
c) Tras su aprobación por el Parlamento Vasco, la reforma será aprobada por las Cortes Generales del Estado mediante Ley Orgánica.
d) Con carácter previo a la remisión a las Cortes Generales, se requerirá la aprobación de los electores vascos mediante referéndum.

18. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, ¿cuál de los siguientes requisitos para la agregación a la Comunidad Autónoma del País Vasco de otros territorios o municipios que estuvieran enclavados en su totalidad dentro de la misma, es INCORRECTO?

a) Que lo acuerden los habitantes de dicho municipio o territorio mediante referéndum aprobado por mayoría absoluta.
b) Que lo aprueben las Cortes Generales del Estado mediante Ley Orgánica.
c) Que lo apruebe el Parlamento Vasco.
d) Que solicite la incorporación el Ayuntamiento o la mayoría de los Ayuntamientos interesados.



19. Tal y como contempla el Reglamento del Parlamento Vasco, si alguna parlamentaria o algún parlamentario solicitara la comprobación de quórum para la adopción de acuerdos y no existiese el exigido, se suspenderá la votación durante un tiempo máximo de:

a) Dos horas y transcurrido ese lapso de tiempo, la votación será válida siempre que el número de miembros presentes sea superior a un quinto de los que integran el órgano en cuestión.
b) Tres horas y transcurrido ese lapso de tiempo, la votación será válida siempre que el número de miembros presentes sea superior a un tercio de los que integran el órgano en cuestión.
c) Dos horas y transcurrido ese lapso de tiempo, la votación será válida siempre que el número de miembros presentes sea superior a un tercio de los que integran el órgano en cuestión.
d) Una hora y transcurrido ese lapso de tiempo, la votación será válida siempre que el número de miembros presentes sea superior a un tercio de los que integran el órgano en cuestión.

20. De acuerdo con el Reglamento del Parlamento Vasco, en relación con las percepciones económicas de las parlamentarias y parlamentarios, es correcto que:

a) Percibirán una asignación económica fijada por la Mesa, así como indemnizaciones por cese en caso de renuncia reguladas expresamente en el Reglamento.
b) Percibirán una asignación económica que les permita cumplir eficaz y dignamente su función, así como ayudas, franquicias e indemnizaciones por gastos indispensables para el ejercicio de su función.
c) Percibirán exclusivamente dietas por asistencia, sin asignación fija, salvo acuerdo expreso del Pleno.
d) Percibirán una asignación económica exenta de tributación por su condición de cargo público.

21. Conforme determina el Reglamento del Parlamento Vasco, la iniciativa legislativa ante el parlamento vasco corresponde:

a) A los miembros del Parlamento, a los Grupos Parlamentarios y al Gobierno Vasco.
b) A las parlamentarias y parlamentarios y a los grupos parlamentarios, al Gobierno Vasco y a las Instituciones representativas de los Territorios Históricos.
c) A las parlamentarias y parlamentarios y a los grupos parlamentarios, con arreglo a las previsiones del Reglamento, al Gobierno Vasco, a las Instituciones representativas de los Territorios Históricos y a las ciudadanas y ciudadanos, de acuerdo con los previsto en la normativa reguladora de la iniciativa legislativa popular.
d) Solo al Gobierno Vasco.

22. Conforme determina el Reglamento del Parlamento Vasco, las votaciones para la investidura de la Lehendakari o el Lehendakari:

a) Serán nominales, previo llamamiento de los parlamentarios y parlamentarias.
b) Serán, en todo caso, públicas por votación secreta.
c) Serán, en todo caso, públicas por votación por bolas.
d) Serán, en todo caso, públicas por votación ordinaria.



23. Según el Reglamento del Parlamento Vasco, ¿cuál es una de las funciones de la Mesa del Parlamento?

a) Dirigir los debates del Pleno y fijar el orden del día de las sesiones plenarias.
b) Calificar los escritos y documentos de índole parlamentaria y decidir sobre su admisión a trámite
c) Representar institucionalmente al Parlamento Vasco ante otras cámaras legislativas.
d) Controlar la acción del Gobierno Vasco mediante preguntas e interpelaciones.

24. De acuerdo con el Reglamento del Parlamento Vasco, ¿qué mayoría es necesaria para la válida adopción de acuerdos por el pleno, salvo que el propio Reglamento exija una mayoría cualificada?

a) Mayoría absoluta de los miembros del Parlamento.
b) Mayoría de dos tercios de los parlamentarios y parlamentarias presentes.
c) Mayoría simple de los votos emitidos, siempre que exista quórum reglamentario.
d) Unanimidad de los miembros presentes en la sesión.

25. ¿Quién ostenta la competencia para ordenar los debates, dirigir las sesiones y mantener el orden en el pleno de la cámara autonómica?

a) La Mesa del Parlamento, de forma colegiada.
b) La Junta de Portavoces, a través de acuerdos por consenso.
c) El Presidente o la Presidenta del Parlamento.
d) El Pleno, mediante acuerdo adoptado al inicio de cada sesión.

26. De acuerdo con el Reglamento del Parlamento Vasco, ¿qué mayoría se requiere para aprobar el texto definitivo de una propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía?

a) Mayoría simple del Parlamento Vasco
b) Mayoría absoluta del Parlamento Vasco.
c) La mayoría cualificada prevista en el propio Estatuto de Autonomía.
d) Unanimidad de los miembros del Parlamento Vasco.

27. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente el alcance de la inviolabilidad parlamentaria de los miembros de la cámara autonómica?

a) Impide cualquier tipo de responsabilidad penal por los actos realizados durante el mandato
b) Se extiende a todas las actuaciones del parlamentario, tanto dentro como fuera del ejercicio de sus funciones.
c) Protege exclusivamente por las opiniones, actuaciones y votos emitidos en el ejercicio de su cargo.
d) Supone la imposibilidad de detención del parlamentario o parlamentaria en cualquier circunstancia.



28. Conforme determina la Ley 3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula la institución del "Ararteko", el o la Ararteko es designado/a:

a) Por cuatro años, pudiendo ser reelegido/a una sola vez por igual período.
b) Por cuatro años, pudiendo ser reelegido/a una sola vez por igual período.
c) Por cinco años, no pudiendo ser reelegido/a.
d) Por cinco años, pudiendo ser reelegido/a una sola vez por igual período.

29. Conforme determina la Ley 1/1988, de 5 de Febrero, del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, el Tribunal está compuesto por:

a) Doce miembros.
b) Diez miembros.
c) Siete miembros.
d) Cinco miembros.

30. La Ley 3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula la Institución del Ararteko contempla el cese en el ejercicio de sus funciones acordado por el Parlamento en el caso de actuar con notoria negligencia en el desempeño de su cargo. Para ello se exige acuerdo adoptado por:

a) Mayoría absoluta de los miembros de la Cámara.
b) Mayoría de dos tercios de los miembros de la Cámara
c) Mayoría de tres quintas partes de los miembros de la Cámara.
d) Mayoría de los miembros presentes de la Cámara.

31. Conforme a la Ley 1/1988, de 5 de febrero, del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas señale cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta respecto al funcionamiento del Pleno:

a) El Pleno se reunirá, cuando menos, cuatro veces al año, una dentro de cada trimestre natural, y será convocado por su Presidente.
b) El Pleno se entenderá válidamente constituido cuando concurran a la sesión la mayoría absoluta de sus componentes.
c) Para la válida adopción de los acuerdos será necesario el voto favorable de la mayoría absoluta de los asistentes al Pleno y, en todo caso, de dos de sus componentes.
d) El Pleno se reunirá, cuando menos, dos veces al año, una dentro de cada semestre natural, y será convocado por su Presidente.

32. Señala la Ley reguladora del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas que el examen de la ejecución presupuestaria del propio Tribunal Vasco de Cuentas Públicas será llevada a cabo:

a) Por el propio Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.
b) Por el propio Parlamento de Vitoria-Gazteiz.
c) Por una auditoría externa en todo caso.
d) Por una auditoría externa o por alguno de los órganos de control externo de otra comunidad autónoma.



33. Conforme establece la Ley 3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula la institución del Ararteko, el o la Ararteko deberá cesar en toda situación de incompatibilidad que pudiere afectarle:

a) Dentro de los cinco días siguientes a su nombramiento y antes de tomar posesión.
b) Dentro de los quince días siguientes a su nombramiento y antes de tomar posesión.
c) En un plazo no superior a un mes desde su nombramiento y antes de tomar posesión.
d) Dentro de los diez días siguientes a su nombramiento y antes de tomar posesión.

34. Conforme establece la Ley 3/1985, de 27 de Febrero, por la que se crea y regula la institución del Ararteko, el Adjunto:

a) Será nombrado por el Ararteko, previa conformidad del Parlamento.
b) Será nombrado por el Parlamento, en la forma que determine su Reglamento.
c) Será nombrado por el Ararteko, sin que sea necesaria la previa conformidad del Parlamento.
d) Será nombrado por el Ararteko y separado por el Parlamento.

35. Conforme a la Ley 1/1988, de 5 de febrero, de creación del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas sus miembros serán elegidos entre aquellas personas que estén en posesión de titulación académica superior, que dispongan de reconocida competencia garantizada en relación con el ámbito funcional del tribunal y contar, en todos los casos, con una experiencia profesional de al menos:

a) Doce años.
b) Diez años.
c) Quince años.
d) Ocho años.

36. El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas:

a) Podrá adoptar cuantas medidas precautorias considere oportunas para salvaguardar y proteger los bienes, caudales y efectos públicos.
b) Será examinado de sus propias cuentas por el Gobierno.
c) No podrá instruir procedimientos jurisdiccionales al enjuiciamiento de presuntas responsabilidades contables.
d) Realizará los controles en la sede del propio tribunal.

37. Señala cuál de las siguientes respuestas en relación con la delegación de funciones establecida en la Ley 7/1981, de 30 de junio, sobre Ley de Gobierno, es la CORRECTA:

a) La delegación solo puede realizarse mediante decreto del Lehendakari.
b) La delegación de funciones no puede ser revocada una vez otorgada salvo de forma excepcional.
c) Los actos delegados se considerarán dictados por el Órgano delegante.
d) La función delegada puede ser objeto de subdelegación si tal posibilidad está prevista en el Decreto u Orden de delegación.



38. ¿Cuál de las siguientes respuestas en relación con la responsabilidad del Gobierno Vasco frente al Parlamento Vasco es correcta?:

a) Si el Parlamento Vasco aprueba una moción de censura, el Lehendakari presentará su dimisión y el candidato incluido en aquella se entenderá designado por el Parlamento a los efectos de su nombramiento por el Rey.
b) El Parlamento Vasco podrá exigir la responsabilidad del Gobierno mediante la adopción de una moción de censura, que deberá ser propuesta, al menos, por la quinta parte de los Parlamentarios.
c) Si el Parlamento Vasco niega la cuestión de confianza planteada por el Lehendakari, este tendrá que convocar elecciones para que se proceda a la elección de un nuevo Lehendakari.
d) El Lehendakari, previa deliberación del Gobierno, podrá plantear al Parlamento la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general, confianza que se entenderá otorgada cuando obtuviese la mayoría absoluta de los votos de la Cámara.

39. ¿Cuál de las siguientes respuestas en relación con la potestad del Gobierno Vasco de dictar Decretos-Legislativos es CORRECTA?:

a) El Parlamento Vasco podrá delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de Ley, denominadas Decretos-Legislativos, si bien solo en caso de extraordinaria y urgente necesidad.
b) La delegación legislativa deberá acordarse mediante una Ley ordinaria cuando su objeto sea la elaboración de textos articulados o por una Ley de Bases cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.
c) El Parlamento Vasco podrá delegar en el Gobierno la potestad de dictar Decretos-Legislativos que afecten al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
d) El Parlamento Vasco no podrá delegar en el Gobierno la potestad de dictar Decretos-Legislativos que afecten al ordenamiento básico del Gobierno o al régimen jurídico de la Administración del País Vasco.

40. Conforme a la Ley 7/1981, de 30 de junio, sobre Ley de Gobierno, corresponde al Gobierno Vasco:

a) Definir el Programa de Gobierno.
b) Aprobar las Proposiciones de Ley para su remisión al Parlamento o determinar su retirada, en las condiciones que establezca el Reglamento de la Cámara.
c) Ejercer, mediante Decretos-Legislativos, la delegación legislativa en los términos establecidos en esta Ley.
d) Ejercer, mediante Decretos-Leyes, la delegación legislativa en los términos establecidos en esta Ley.

41. Conforme a la Ley 7/1981, de 30 de junio, sobre Ley de Gobierno, el Lehendakari:

a) Será designado por el Parlamento y nombrado por el Presidente del Gobierno central.
b) Será designado, de entre sus miembros, por el Parlamento y nombrado por el Rey mediante un Real Decreto.
c) Será designado, de entre sus miembros, por el Parlamento y nombrado por el Rey mediante Ley.



d) Será designado y nombrado, de entre sus miembros, por el Parlamento mediante un Real-Decreto.

42. Señala, de acuerdo con la Ley 7/1981, de 30 de junio, sobre Ley de Gobierno, cuál de las siguientes respuestas NO es correcta:

a) Resultará elegido Lehendakari en la primera votación el candidato que hubiere obtenido la mayoría absoluta de los votos de la Cámara.
b) Al comienzo de cada legislatura del Parlamento Vasco, el Presidente del Parlamento convocará a la Cámara para la designación del Lehendakari, de acuerdo con el procedimiento que al efecto establezca el Reglamento del Parlamento.
c) El Lehendakari será designado por el Parlamento, siendo nombrado por el Presidente del mismo.
d) Si ninguno de los candidatos alcanzara la mayoría absoluta en la primera votación, se repetirá ésta y será designado Lehendakari el que, de entre ellos, obtuviere la mayoría simple de los votos emitidos.

43. De acuerdo con lo establecido en la Ley 7/1981, de 30 de junio, sobre Ley de Gobierno, indíquese cuál de las siguientes afirmaciones en relación con la potestad reglamentaria del Gobierno es INCORRECTA:

a) El ejercicio de la potestad reglamentaria de los titulares de los Departamentos adoptará la forma de Decreto y será firmada por el titular del mismo.
b) Las normas reglamentarias no podrán imponer sanciones ni multas, salvo en los casos expresamente autorizados por la Ley.
c) Las disposiciones administrativas de carácter general adoptarán la forma de Decreto, así como las disposiciones del Lehendakari.
d) Las normas reglamentarias se publicarán en el Boletín Oficial del País Vasco y entrarán en vigor a los 20 días de su publicación.

44. Conforme establece la Ley 7/1981, de 30 de junio, sobre Ley de Gobierno:

a) Las ausencias temporales del Lehendakari precisarán en todo caso de la previa autorización del Parlamento.
b) En el Gobierno ambos sexos estarán representados al menos en un 50 %.
c) En el Gobierno ambos sexos estarán representados al menos en un 40 %.
d) Las ausencias temporales del Lehendakari precisarán de la previa autorización del Parlamento cuando sean superiores a dos semanas.

45. Conforme establece la Ley 7/1981, de 30 de junio, sobre Ley de Gobierno:

a) La convocatoria de las reuniones del Gobierno irá acompañada del Orden del Día fijado y firmado por el Lehendakari.
b) La celebración de las reuniones del Gobierno requerirá, para su válida constitución, la asistencia del Lehendakari, o de su sustituto, y de, al menos, la mitad de sus miembros.
c) Los documentos que se presenten al Gobierno tendrán carácter reservado y secreto, sin que puedan hacerse públicos.
d) Las Comisiones delegadas serán en todo caso convocadas por el Lehendakari.



46. Con arreglo a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las habilitaciones para el desarrollo reglamentario de una ley serán conferidas, con carácter general:

a) Al Presidente de Gobierno.
b) Al Gobierno.
c) A los Ministros.
d) A los Secretarios de Estado.

47. Conforme determina la Constitución Española de 1978, son leyes orgánicas:

a) Las relativas al desarrollo de cualquier derecho reconocido en el Título I de la Constitución, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y las leyes de armonización.
b) Las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía, el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución.
c) Las relativas al desarrollo de los principios rectores de la política social y económica, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y las leyes marco.
d) Las relativas a la organización del Gobierno, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y las leyes de bases.

48. Conforme determina la Constitución Española de 1978, la aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá:

a) Mayoría simple del Congreso, en votación final sobre el conjunto del proyecto.
b) Mayoría absoluta de cada Cámara, en votación separada sobre cada artículo del proyecto.
c) Mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
d) Mayoría de tres quintos del Congreso, en votación final sobre el conjunto del proyecto.

49. Conforme determina la Constitución Española de 1978, la delegación legislativa deberá otorgarse al Gobierno:

a) De forma expresa, para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio.
b) De forma expresa o tácita, para una o varias materias, siempre dentro del mismo período de sesiones.
c) De forma expresa, para materia concreta y sin necesidad de fijar plazo si se trata de refundición de textos legales.
d) De forma expresa, para materia determinada, pudiendo subdelegarse en autoridades distintas del Gobierno cuando así lo prevea la ley de delegación.

50. Conforme determina la Constitución Española de 1978, la autorización para refundir textos legales podrá comprender, además de la mera formulación de un texto único:

a) La facultad de innovar libremente el ordenamiento en la materia refundida.
b) La facultad de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos.
c) La facultad de dictar reglamentos ejecutivos sobre la materia refundida.



d) La facultad de derogar cualesquiera normas reglamentarias conexas.

51. Conforme determina la Constitución Española de 1978, las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de:

a) Decretos-leyes.
b) Reales Decretos normativos.
c) Decretos legislativos.
d) Leyes delegadas.

52. Conforme determina la Constitución Española de 1978, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que:

a) Podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado si el Congreso las convalida por mayoría absoluta.
b) No podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.
c) Podrán regular cualquier materia salvo las reservadas a ley orgánica.
d) Perderán vigencia automáticamente a los quince días si no hubieran sido convalidadas.

53. Conforme determina la Constitución Española de 1978, las leyes orgánicas se caracterizan porque:

a) Tienen un rango jerárquico superior al de las leyes ordinarias.
b) Regulan cualquier materia siempre que así lo decidan las Cortes Generales.
c) Están reservadas a determinadas materias y requieren mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
d) Solo pueden ser aprobadas por el Senado mediante mayoría cualificada.

54. En relación con el presupuesto habilitante del decreto-ley, señale la afirmación correcta:

a) La extraordinaria y urgente necesidad debe ser declarada previamente por el Congreso de los Diputados.
b) La concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad es apreciada por el Gobierno, sin perjuicio del control del Congreso.
c) Solo puede apreciarse en situaciones de crisis económica.
d) Debe ser declarada por el Tribunal Constitucional con carácter previo a su aprobación.

55. Con arreglo a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la falta de impugnación directa de una disposición general o la desestimación del recurso que frente a ella se hubiera interpuesto:

a) No impiden la impugnación de los actos de aplicación con fundamento en que tales disposiciones no son conformes a Derecho.
b) Determinan la imposibilidad de impugnar los actos de aplicación con fundamento en

que tales disposiciones no son conformes a Derecho.

c) Determinan la imposibilidad de impugnar los actos de aplicación con fundamento en que tales disposiciones son anulables.

d) Determinan la imposibilidad de impugnar los actos de aplicación con fundamento en que tales actos son firmes porque la disposición de cobertura no ha sido recurrida en el plazo previsto por el ordenamiento jurídico.

56. Conforme a la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general:

a) Determinarán la ineficacia de los actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales y, especialmente en el caso de que la anulación del precepto suponga la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente.

b) Determinarán la ineficacia de las sentencias firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales y, especialmente en el caso de que la anulación del precepto suponga la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente.

c) No afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente.

d) No afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzará efectos generales, pero sí afectará a eficacia de los actos firmes, especialmente en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente.

57. De acuerdo con la Constitución Española de 1978, la potestad reglamentaria del Gobierno se ejerce:

a) Con carácter autónomo y sin sujeción a la ley.
b) De acuerdo con la Constitución y las leyes.
c) Únicamente en desarrollo de leyes orgánicas.
d) Exclusivamente mediante delegación de las Cortes Generales.

58. Según la Constitución Española, la potestad reglamentaria corresponde:

a) A las Cortes Generales, sin perjuicio de su delegación al Gobierno.
b) Al Rey, mediante reales decretos refrendados por el Presidente del Gobierno.
c) Al Presidente del Gobierno, con carácter originario y general.
d) Al Gobierno, de acuerdo con la Constitución y las leyes.

59. En la jerarquía de los reglamentos estatales, se sitúan por encima de las órdenes ministeriales:

a) Únicamente los reales decretos acordados en Consejo de Ministros, pero no los del Presidente del Gobierno.



b) Las disposiciones aprobadas por real decreto del Presidente del Gobierno o acordado en Consejo de Ministros.
c) Los acuerdos de las Comisiones Delegadas del Gobierno, cualquiera que sea su forma.
d) Las resoluciones de los Secretarios de Estado dictadas por delegación ministerial.

60. Conforme determina la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que:

a) Infrinjan cualquier norma del ordenamiento jurídico.
b) Vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, regulen materias reservadas a la ley o establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
c) Sean dictadas por órganos incompetentes jerárquicamente.
d) Contengan errores materiales o aritméticos.

61. La revisión de oficio de una disposición administrativa nula podrá acordarse por la Administración:

a) Solo dentro del plazo de cuatro años desde su aprobación.
b) Únicamente a instancia de parte interesada.
c) En cualquier momento, de oficio, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico equivalente, si lo hubiere.
d) Exclusivamente cuando la nulidad derive de sentencia judicial firme.

62. En el orden contencioso-administrativo, es admisible el recurso contra:

a) Las disposiciones de carácter general y los actos expresos o presuntos que pongan fin a la vía administrativa, en los términos legales.
b) Solo los reglamentos estatales, pero no los autonómicos ni locales.
c) Únicamente los actos definitivos, nunca las disposiciones generales.
d) Solo las disposiciones generales cuando hayan sido previamente recurridas en vía administrativa.

63. Cuando un órgano contencioso-administrativo dicte sentencia firme estimatoria por considerar ilegal el contenido de la disposición general aplicada, deberá:

a) Limitarse a inaplicar la disposición en el caso concreto, sin actuación ulterior posible.
b) Anular directamente la disposición general en todo caso.
c) Suspender de oficio la vigencia de la disposición general.
d) Plantear cuestión de ilegalidad ante el tribunal competente para conocer del recurso directo contra la disposición, salvo los supuestos legalmente exceptuados.

64. Conforme determina la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

a) El defecto de forma determinará la anulabilidad de los actos de la Administración.
b) La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas



implicará la anulabilidad del acto.

c) Son anulables las disposiciones administrativas que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
d) La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

65. Con arreglo a la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, la responsabilidad administrativa que se derive de la comisión de una infracción:

a) No será compatible con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo, salvo que haya concurrido dolo o negligencia grave en la comisión de la infracción.
b) Será compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la indemnización por los daños y perjuicios causados.
c) No será compatible con la indemnización por daños y perjuicios causados, salvo que haya concurrido dolo o negligencia grave en la comisión de la infracción.
d) Serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario, pero no con la indemnización por los daños y perjuicios causados, salvo que haya concurrido dolo o negligencia grave en la comisión de la infracción.

66. Conforme determina la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

a) La ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará, respetando siempre el principio de proporcionalidad, por los siguientes medios: a) Apremio sobre el patrimonio, b) Ejecución subsidiaria y c) Compulsión sobre las personas.
b) Si en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad líquida se seguirá el procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento de multa coercitiva y/o expropiación forzosa.
c) La multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible con ellas.
d) Las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes en cada caso, podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos.

67. Según la Constitución Española de 1978, la Administración Pública actúa:

a) Con sometimiento pleno a la Constitución, a la ley y al Derecho.
b) Con sometimiento exclusivo a la ley formal, pero no al resto del ordenamiento jurídico.
c) Con sometimiento al Gobierno, sin perjuicio de la ley cuando resulte aplicable.
d) Con sometimiento prioritario a criterios de oportunidad administrativa.



68. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son medios de ejecución forzosa:

a) El apremio sobre el patrimonio, la ejecución subsidiaria, la multa coercitiva y la compulsión sobre las personas.
b) El apremio sobre el patrimonio, la ejecución subsidiaria y la revisión de oficio.
c) La multa coercitiva, la compulsión sobre las personas y la declaración de lesividad.
d) La ejecución subsidiaria, la compulsión sobre las personas y el recurso de alzada.

69. La Constitución Española garantiza expresamente, entre otros, el siguiente principio en la actuación de los poderes públicos:

a) La libre apreciación administrativa sin control jurisdiccional posterior.
b) La interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
c) La presunción de discrecionalidad general de toda decisión administrativa.
d) La inmunidad jurisdiccional de los actos administrativos discrecionales.

70. De acuerdo con la Constitución Española, la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa:

a) Con sometimiento pleno a la Constitución, a la ley y al Derecho.
b) Con sometimiento exclusivo a la ley, pero no al resto del ordenamiento jurídico.
c) Con sometimiento pleno al Gobierno, sin perjuicio del control parlamentario.
d) Con sometimiento prioritario a criterios de oportunidad política.

71. Conforme a la Constitución Española, los tribunales controlan:

a) Únicamente la potestad sancionadora de la Administración.
b) La potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de esta a los fines que la justifican.
c) Solo los actos reglados, pero no los discrecionales.
d) Exclusivamente la vía de hecho administrativa, no los actos expresos.

72. Según la Ley 39/2015, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo:

a) Se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
b) Solo producen efectos desde su notificación, en todo caso.
c) Carecen de eficacia mientras no sean confirmados por el órgano superior.
d) Solo producen efectos cuando agotan la vía administrativa.

73. Con arreglo a la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, la creación de un nuevo órgano sólo tendrá lugar:

a) Previa comprobación de que no existe otro en la misma o en otra Administración Pública que desarrolle igual función sobre el mismo ámbito de actuación.
b) Previa comprobación de que no existe otro en la misma Administración Pública que desarrolle igual función sobre el mismo ámbito de actuación.



c) Previa comprobación de que no existe otro en la misma o en otra Administración Pública que desarrolle igual función sobre el mismo territorio y población.
d) Previa comprobación de que no existe otro en la misma Administración Pública que desarrolle igual función sobre el mismo territorio y población.

74. Con arreglo a la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuando un órgano de la Unión Europea hubiera impuesto una sanción por los mismos hechos:

a) El órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo minorarla, siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento.
b) El órgano competente para resolver no tendrá por qué tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer.
c) El órgano competente para resolver no tendrá por qué tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, aunque pudiendo minorarla, siempre que concurra la identidad de sujeto y fundamento.
d) El órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo elevarla, siempre que concurra la identidad de sujeto y fundamento.

75. Conforme determina la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la competencia:

a) Podrá ser ejercida por cualquier órgano de la Administración si resulta más eficaz.
b) Es renunciable cuando existan razones de oportunidad administrativa.
c) Es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación.
e) Solo podrá ser ejercida por órganos superiores, aunque esté atribuida a órganos inferiores.

76. Conforme determina la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con los órganos colegiados:

a) Podrán adoptar acuerdos sobre asuntos no incluidos en el orden del día sin excepción.
b) No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que asistan todos los miembros y sea declarada la urgencia por la mayoría.
c) La asistencia del Secretario no es necesaria para la válida constitución del órgano.
d) Los acuerdos deberán adoptarse por unanimidad en todo caso.

77. Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, entre los principios de actuación de las Administraciones Públicas se encuentra:

a) El principio de jerarquía normativa, que permite inaplicar normas inferiores contrarias a Derecho sin necesidad de control jurisdiccional.

b) El principio de planificación, entendido como la obligación de actuar conforme a programas previamente aprobados.
c) El principio de responsabilidad, con sometimiento pleno a la Constitución, a la ley y al Derecho.
d) El principio de eficacia, con sometimiento pleno a la Constitución, a la ley y al Derecho.

78. Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante:

a) Instrucciones y órdenes de servicio, que deberán publicarse en todo caso en el Boletín Oficial correspondiente.
b) Instrucciones y órdenes de servicio, cuya publicación será necesaria cuando así lo establezca una disposición específica o se estime conveniente por razón de los destinatarios.
c) Circulares internas, que tendrán en todo caso carácter normativo.
d) Reglamentos organizativos, que deberán ser aprobados por el órgano superior.

79. Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la delegación de competencias:

a) Requiere en todo caso su publicación en el diario oficial correspondiente para ser eficaz.
b) Impide que el órgano delegante pueda avocar para sí el conocimiento de un asunto concreto.
c) Supone la transferencia de la titularidad de la competencia al órgano delegado.
d) No podrá realizarse en órganos que no sean jerárquicamente dependientes.

80. Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la avocación:

a) Podrá realizarse en cualquier momento, sin necesidad de motivación.
b) Deberá ser motivada y podrá acordarse únicamente por el órgano superior jerárquico.
c) Podrá ser objeto de recurso independiente.
d) Supone la alteración definitiva de la competencia entre órganos administrativos.

81. Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los órganos colegiados:

a) Quedarán válidamente constituidos en primera convocatoria con la asistencia del Presidente y Secretario y de un tercio de sus miembros.
b) Podrán constituirse en segunda convocatoria sin necesidad de asistencia del Presidente.
c) Requerirán para la válida constitución, en primera convocatoria, la asistencia del Presidente y Secretario o quienes les sustituyan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.
d) Podrán adoptar acuerdos sobre asuntos no incluidos en el orden del día sin limitación alguna.



82. Con arreglo a la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la eficacia de los actos administrativos:

a) Quedará demorada cuando se trate de actos definitivos y así lo disponga discrecionalmente el órgano superior.
b) Quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior.
c) Quedará demorada cuando se trate de actos de trámite y esté supeditada a su publicación por decisión discrecional del órgano superior.
d) Quedará demorada cuando se trate de actos de trámite y así lo disponga discrecionalmente el órgano autor del acto.

83. Con arreglo a la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las medidas provisionales adoptadas antes de la iniciación del procedimiento administrativo deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas:

a) En el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.
b) En el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes a su adopción, el cual no podrá ser objeto de recurso.
c) En el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.
d) En el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de quince días siguientes a su adopción, el cual no podrá ser objeto de recurso.

84. Conforme a la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento:

a) Suspenderán la tramitación del mismo, salvo en el caso de la recusación.
b) Suspenderán la tramitación del mismo, salvo las referidas a nulidad de actuaciones.
c) No suspenderán la tramitación del mismo, salvo las referidas a nulidad de actuaciones.
d) No suspenderán la tramitación del mismo, salvo en el caso de la recusación.

85. Conforme determina la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas:

a) Las personas físicas o jurídicas.
b) Los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.
c) Los menores de edad.
d) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate.



86. Conforme determina la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de no emitirse un informe en el plazo señalado:

a) Se suspenderá necesariamente el procedimiento.
b) No podrá continuarse el procedimiento hasta su emisión.
c) Se podrán proseguir las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad del órgano que no emitió el informe.
d) El informe emitido fuera de plazo será nulo de pleno derecho.

87. Conforme determina la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado:

a) La falta de resolución expresa producirá en todo caso efectos desestimatorios.
b) La falta de resolución expresa producirá efectos estimatorios, salvo que una norma con rango de ley o de Derecho de la Unión Europea establezca lo contrario.
c) La falta de resolución expresa extingue el procedimiento sin producir efectos jurídicos.
d) La falta de resolución expresa impide la interposición de recursos administrativos.

88. Conforme determina la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración:

a) Podrá abstenerse de resolver cuando el asunto no esté claramente regulado.
b) Está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación.
e) Solo está obligada a resolver en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado.
d) Podrá sustituir la resolución expresa por una comunicación informal al interesado.

89. En relación con el régimen de iniciación de los procedimientos administrativos previsto en la Ley 39/2015, señale la afirmación correcta:

a) La iniciación de oficio solo podrá producirse por propia iniciativa del órgano competente.
b) La petición razonada permite a cualquier ciudadano instar la iniciación de un procedimiento administrativo.
c) La denuncia obliga en todo caso al órgano competente a iniciar el procedimiento.
d) La iniciación de oficio podrá producirse como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia.

90. Respecto al contenido y formación del expediente administrativo, indique la opción correcta:

a) El expediente administrativo incluye exclusivamente los documentos aportados por los interesados.
b) El expediente administrativo debe ordenarse siguiendo el criterio de antigüedad de los documentos aportados por las partes.
c) El expediente administrativo se forma mediante la agregación sucesiva de cuantos documentos, pruebas y actuaciones sirvan de antecedente y fundamento a la resolución.



d) El expediente administrativo puede omitirse cuando la resolución sea favorable al interesado.

91. Con arreglo a la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, en toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva:

a) Criterios sociales y medioambientales, guarden o no relación con el objeto del contrato.
b) Criterios sociales y medioambientales siempre que guarden relación con el objeto del contrato.
c) Criterios éticos, sociales y medioambientales, siempre que guarden relación con el objeto del contrato.
d) Criterios éticos, sociales y medioambientales, guarden o no relación con el objeto del contrato.

92. Conforme determina la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en el perfil de contratante del órgano de contratación en un plazo no superior a:

a) Quince días tras el perfeccionamiento del contrato.
b) Treinta días tras el perfeccionamiento del contrato.
c) Un mes tras el perfeccionamiento del contrato.
d) Cinco días tras el perfeccionamiento del contrato.

93. Con arreglo a la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, en los casos en que el órgano de contratación haya acordado la exigencia de garantía provisional, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se determinará el importe de la misma:

a) Que no podrá ser superior a un 3 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
b) Que no podrá ser superior a un 3 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
c) Que no podrá ser superior a un 3 por 100 del valor estimado del contrato, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
d) Que no podrá ser superior a un 3 por 100 del valor estimado del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

94. Con arreglo a la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, la adjudicación se realizará, ordinariamente:

a) Utilizando una pluralidad de criterios basados en la mejor relación calidad-precio, mediante procedimiento abierto o restringido.
b) Mediante procedimiento negociado sin publicidad cuando el contrato tenga carácter urgente.
c) Mediante adjudicación directa en contratos de cuantía inferior a 30.000 euros.
d) Exclusivamente mediante subasta electrónica en contratos de obras.



95. Conforme a la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, tendrán la consideración de fundaciones públicas aquellas que:

a) Tengan participación pública superior al 40 % en su patrimonio.
b) Estén financiadas parcialmente con fondos públicos, cualquiera que sea su cuantía.
c) Se constituyan con aportación mayoritaria, directa o indirecta, del sector público, o reciban dicha aportación con posterioridad.
d) Tengan al menos un tercio de los miembros del patronato designados por el sector público.

96. En relación con el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, identifique la afirmación correcta:

a) La Ley se aplica exclusivamente a las Administraciones Públicas territoriales.
b) Las sociedades mercantiles públicas quedan excluidas de la Ley cuando actúan en el mercado en condiciones de competencia.
c) La Ley se aplica a las entidades que integran el sector público en los términos previstos en la propia ley.
d) Las fundaciones del sector público solo están sujetas a la Ley en materia de ejecución del contrato.

97. En materia de objeto del contrato, señale la afirmación correcta:

a) El objeto del contrato podrá definirse de forma genérica siempre que se justifique la urgencia de la contratación.
b) El objeto del contrato podrá fraccionarse libremente si ello facilita la concurrencia de licitadores.
c) El objeto del contrato deberá ser determinado y no podrá fraccionarse con la finalidad de eludir los requisitos de publicidad o procedimiento.
d) El objeto del contrato podrá ser indeterminado cuando se trate de contratos de servicios.

98. En relación con los criterios de adjudicación, indique la opción correcta:

a) El precio será siempre el único criterio de adjudicación en contratos del sector público.
b) Los criterios de adjudicación deberán estar vinculados al objeto del contrato y permitir obtener la mejor relación calidad-precio.
c) Los criterios sociales solo podrán utilizarse en contratos de servicios.
d) Los criterios de adjudicación podrán fijarse una vez presentadas las ofertas.

99. Respecto a la perfección de los contratos del sector público, señale la afirmación correcta:

a) Los contratos se perfeccionan con su formalización en documento administrativo.
b) Los contratos se perfeccionan con la adjudicación por el órgano de contratación.
c) Los contratos se perfeccionan con la aprobación del expediente de contratación.
d) Los contratos se perfeccionan con la publicación en el perfil del contratante.



100. De conformidad con el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, la negativa sindical a negociar criterios de movilidad:

a) Paraliza la potestad organizativa de la Administración.
b) Impide convocar concursos de traslados.
c) No bloquea el ejercicio de competencias organizativas legalmente atribuidas, sin perjuicio del deber de negociar.
d) Genera la nulidad automática de cualquier convocatoria.

101. Un trabajador estatutario solicita renunciar a su condición con 15 días de antelación. Sin embargo, en ese momento tiene abierto un expediente disciplinario. De conformidad con el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, ¿qué debe hacer la Administración?

a) Aceptar la renuncia obligatoriamente si se ha solicitado con 15 días de antelación.
b) Aceptar la renuncia, pero impedir que vuelva a obtener la condición de personal estatutario.
c) Aceptar la renuncia únicamente si el interesado renuncia también a sus derechos económicos.
d) No aceptar la renuncia mientras el interesado esté sujeto a expediente disciplinario.

102. Respecto a las retribuciones del personal estatutario, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, de conformidad con el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud?

a) Las retribuciones básicas incluyen el sueldo, los trienios y las pagas extraordinarias, mientras que las retribuciones complementarias retribuyen aspectos como el puesto, la dedicación o el rendimiento.
b) Las retribuciones básicas incluyen el sueldo, los trienios y el complemento específico.
c) Las retribuciones complementarias son iguales en todos los servicios de salud y se fijan cada año en los Presupuestos Generales del Estado.
d) Las pagas extraordinarias forman parte de las retribuciones complementarias y se abonan una vez al año.

103. De conformidad con el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, el reingreso al servicio activo desde excedencia voluntaria por interés particular:

a) Es automático con reserva de plaza.
b) Requiere vacante y se efectúa con carácter provisional hasta la obtención del destino definitivo.
c) Se produce en el mismo centro de origen obligatoriamente.
d) No exige solicitud expresa.

104. De conformidad con el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, la excedencia voluntaria por interés particular:

a) Exige un período mínimo previo de servicios efectivos y no conlleva reserva de plaza.

b) Tiene reserva automática del puesto durante tres años.
c) Se concede, aunque exista expediente disciplinario.
d) Genera derecho a retribuciones básicas.

105. De conformidad con el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, el pase a la situación de servicios especiales implica:

a) Pérdida de la condición de personal estatutario.
b) Reserva del puesto y cómputo de tiempo a efectos de antigüedad y carrera profesional.
c) Suspensión de derechos económicos, pero no administrativos.
d) Necesidad de solicitar reingreso como nuevo aspirante.

106. De conformidad con el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, la imposición de sanciones por faltas graves requiere:

a) Comunicación verbal previa.
b) Expediente disciplinario con audiencia del interesado.
c) Informe sindical vinculante.
d) Autorización judicial.

107. A un funcionario se le dicta prisión provisional por un procedimiento judicial, lo que le impide desempeñar sus funciones durante más de cinco días consecutivos. De conformidad con el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, ¿qué situación procede?:

a) Suspensión provisional sin derecho a percibir retribuciones mientras dure la prisión provisional.
b) Suspensión provisional con derecho a percibir únicamente las retribuciones básicas.
c) Suspensión de funciones con derecho a percibir todas las retribuciones.
d) No puede acordarse ninguna medida hasta que exista sentencia firme.

108. De conformidad con el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, si en la mesa sectorial se alcanza un pacto sobre movilidad que afecta a materias presupuestarias:

a) Produce efectos automáticos desde su firma.
b) Es nulo de pleno derecho.
c) Requiere aprobación expresa del órgano competente en materia presupuestaria.
d) Se aplica provisionalmente hasta su fiscalización.

109. De conformidad con el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud, señale la afirmación correcta sobre el contrato de residencia:

a) Podrá celebrarse verbalmente si su duración es inferior a un año.
b) Tendrá una duración inicial de un año renovable según evaluación positiva y no podrá establecerse un periodo de prueba.



c) Se celebrará por la duración completa del programa formativo.
d) Podrá incluir un periodo de prueba si así lo prevé el convenio colectivo.

110. Un médico residente considera que la organización docente de su centro no se ajusta adecuadamente a los objetivos formativos del programa. Desea emitir una valoración sobre el funcionamiento del centro docente, pero le preocupa que su opinión pueda afectar negativamente a su situación dentro de la unidad. De conformidad con el Real Decreto 1146/2006, ¿qué derecho garantiza que pueda realizar dicha evaluación sin que se comprometa su identidad?

a) El derecho a participar en actividades docentes, investigadoras, asistenciales y de gestión clínica dentro de la unidad acreditada.
b) El derecho a evaluar la adecuación de la organización y funcionamiento del centro a la actividad docente con garantía de confidencialidad.
c) El derecho a ser informado de las funciones, tareas y programación funcional de la unidad o centro.
d) El derecho a solicitar la revisión de las evaluaciones anuales y finales conforme al procedimiento regulado.

111. Durante su periodo de residencia, un profesional decide aceptar una actividad laboral externa remunerada compatible con su horario personal, alegando que no afecta a su rendimiento formativo. De conformidad con el Real Decreto 1146/2006, ¿qué disposición se estaría vulnerando?

a) La obligación de prestar personalmente los servicios y realizar las tareas asistenciales establecidas en el programa formativo.
b) La obligación de utilizar racionalmente los recursos en beneficio del paciente.
c) La obligación de realizar todo el programa de formación con dedicación a tiempo completo sin compatibilizarlo con otra actividad.
d) La obligación de seguir las instrucciones del tutor y del personal sanitario responsable del programa formativo.

112. De conformidad con el Real Decreto 1146/2006, respecto a las evaluaciones del residente:

a) Una evaluación anual negativa extingue siempre el contrato.
b) Si el comité considera posible la recuperación, el contrato puede prorrogarse hasta tres meses.
c) Si el comité considera posible la recuperación, el contrato puede prorrogarse hasta seis meses.
d) La evaluación negativa implica suspensión automática del contrato.

113. En relación con la retribución de los residentes contratados por entidades privadas titulares de unidades docentes acreditadas, señale la afirmación correcta de conformidad con el Real Decreto 1146/2006:

a) La retribución se establecerá conforme al convenio colectivo aplicable, pero la remuneración correspondiente a la jornada ordinaria no podrá ser inferior al sueldo

equivalente al sueldo base del personal estatutario según el título universitario exigido para el ingreso en el programa.

b) La remuneración se determinará conforme al convenio colectivo aplicable y podrá excluir determinados conceptos retributivos siempre que la suma total anual sea equivalente a la del sistema público.
c) La remuneración deberá coincidir exactamente con todas las retribuciones establecidas para los/las residentes del sector público, con independencia del convenio colectivo aplicable.
d) La retribución se establecerá conforme al convenio colectivo aplicable, pero la remuneración correspondiente a la jornada ordinaria no podrá ser inferior al complemento de grado de formación que se devenga desde el tercer curso y que retribuye el nivel de conocimientos y la progresiva asunción de responsabilidades.

114. De conformidad con el Real Decreto 1146/2006, señale la afirmación correcta sobre la extinción del contrato del residente:

a) La finalización del programa formativo genera derecho a indemnización.
b) La extinción del contrato no afecta a los derechos derivados de la prueba selectiva.
c) La finalización del programa formativo con evaluación positiva extingue el contrato sin indemnización.
d) La extinción del contrato permite continuar automáticamente en otra especialidad.

115. De conformidad con el Real Decreto 1146/2006, respecto a las retribuciones del/de la residente:

a) Incluyen sueldo, complemento de grado de formación y complemento de atención continuada.
b) Incluyen sueldo y trienios.
c) Incluyen sueldo y complemento de destino.
d) El término “retribuciones” incluye exclusivamente el sueldo base.

116. De conformidad con el Real Decreto 1146/2006, en relación con la reincorporación al programa formativo tras la suspensión del contrato de un/a residente, señale la afirmación correcta según el texto:

a) Si la suspensión del contrato supera los dos años, el/la residente deberá reiniciar obligatoriamente el programa formativo completo desde el primer año.
b) Cuando la suspensión del contrato sea superior a dos años, el/la residente se incorporará al mismo punto del programa en el que se encontraba antes de la suspensión, sin posibilidad de repetir periodos previamente evaluados positivamente.
c) Si el tiempo de suspensión del contrato supera los dos años, la comisión de docencia de la especialidad decidirá en qué parte del programa formativo se reincorpora el/la residente, pudiendo incluso implicar la repetición de algún periodo previamente evaluado de forma positiva.
d) Cuando la suspensión del contrato sea superior a dos años, la reincorporación al programa formativo será determinada por el/la tutor/a del/de la residente, respetándose siempre las evaluaciones positivas previamente obtenidas.

117. De conformidad con el Real Decreto 1146/2006, respecto al régimen disciplinario del residente:

a) Las faltas leves se sancionan únicamente con apercibimiento.
b) Las faltas graves se sancionan con despido.
c) Las faltas muy graves se sancionan con suspensión de empleo y sueldo.
d) Todas las sanciones requieren autorización ministerial.

118. De conformidad con el Estatuto Básico del Empleado Público, Real Decreto Legislativo 5/2015, cuál de los siguientes colectivos se incluye entre el personal con legislación específica propia al que el Estatuto solo se aplicará directamente cuando así lo disponga su legislación específica:

a) El personal funcionario de las entidades locales.
b) El personal funcionario de las Cortes Generales y de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.
c) El personal laboral de las Administraciones Públicas.
d) El personal eventual de confianza política.

119. De conformidad con el Estatuto Básico del Empleado Público, Real Decreto Legislativo 5/2015, el personal funcionario de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos se regirá:

a) Exclusivamente por lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Por la legislación laboral y por las normas convencionalmente aplicables.
c) Por sus normas específicas y supletoriamente por lo dispuesto en el Estatuto.
d) Por la normativa de las entidades públicas empresariales y por el Estatuto con carácter preferente.

120. De conformidad con el Estatuto Básico del Empleado Público, Real Decreto Legislativo 5/2015, en materia de permisos de lactancia, el personal laboral al servicio de las Administraciones públicas se regirá:

a) Por la legislación laboral y por lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores.
b) Por lo previsto en los convenios colectivos aplicables.
c) Por lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público.
d) Por lo dispuesto simultáneamente en el Estatuto de los Trabajadores y en el Estatuto Básico del Empleado Público.



121. Un Ayuntamiento tiene una plaza vacante de administrativo que no puede cubrirse inmediatamente mediante una persona funcionaria de carrera. Debido a la necesidad urgente de cubrir el puesto, la Administración nombra a Laura como funcionaria interina para ocupar dicha plaza. Tras tres años, la Administración aún no ha cubierto la plaza por funcionario de carrera y decide mantener a Laura en el puesto sin adoptar ninguna medida adicional. De conformidad con el Estatuto Básico del Empleado Público, Real Decreto Legislativo 5/2015, cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a esta situación:

a) La plaza vacante ocupada por Laura debe ser objeto de cobertura mediante mecanismos de provisión o movilidad previstos en la normativa de la Administración.
b) El nombramiento de Laura como funcionaria interina puede mantenerse indefinidamente mientras persista la necesidad del servicio.
c) Tras tres años de desempeño del puesto, Laura adquiere automáticamente la condición de funcionaria de carrera.
d) El nombramiento de Laura genera derecho a compensación económica si finaliza su relación de interinidad.

122. De conformidad con el Estatuto Básico del Empleado Público, Real Decreto Legislativo 5/2015, respecto a la determinación de las condiciones de empleo del personal directivo:

a) Tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva cuando el personal directivo sea personal laboral.
b) No tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva y, cuando el personal directivo tenga condición de personal laboral, estará sometido a la relación laboral especial de alta dirección.
c) Tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva, con independencia de la naturaleza jurídica del personal directivo.
d) No tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva, únicamente será materia de la negociación colectiva cuando el personal directivo tenga la condición de funcionario de carrera.

123. De conformidad con el Estatuto Básico del Empleado Público, Real Decreto Legislativo 5/2015, las personas empleadas públicas tienen derecho:

a) A la intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición, frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización, así como a la desconexión digital en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.
b) A la intimidad cuando utilicen dispositivos digitales de carácter personal, así como a la desconexión digital en los términos establecidos en la normativa de la función pública.
c) A la intimidad siempre que utilicen dispositivos digitales de carácter personal, frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización, así como a la desconexión digital en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.
d) A la intimidad en el uso de dispositivos digitales exclusivamente cuando no se utilicen para el desempeño de funciones públicas.



124. De conformidad con el Estatuto Básico del Empleado Público, Real Decreto Legislativo 5/2015, en relación con la carrera horizontal de las personas funcionarias de carrera, las leyes de Función Pública que desarrollen este Estatuto deberán valorar:

a) Exclusivamente la antigüedad, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del desempeño.
b) La trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos realizados, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del desempeño, pudiendo incluir además otros méritos y aptitudes por razón de la especificidad de la función desarrollada y la experiencia adquirida.
c) Únicamente la trayectoria profesional y la experiencia adquirida en el puesto de trabajo.
d) La antigüedad, la titulación académica y los conocimientos adquiridos, sin atender al resultado de la evaluación del desempeño.

125. De conformidad con el Estatuto Básico del Empleado Público, Real Decreto Legislativo 5/2015, para proceder al cese en un puesto obtenido por concurso:

a) Será necesaria la aprobación previa de sistemas objetivos que permitan evaluar el desempeño.
b) Bastará con que la Administración establezca criterios generales de valoración del rendimiento.
c) Será suficiente con valorar la antigüedad y la experiencia adquirida en el puesto.
d) Podrá aplicarse directamente por la Administración siempre que exista informe del superior jerárquico.

126. De conformidad con el Estatuto Básico del Empleado Público, Real Decreto Legislativo 5/2015, en lo relativo a las funciones de las Juntas de Personal y Delegados de Personal, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación al alcance de sus competencias dentro de la Administración Pública?

a) Pueden ser informados sobre la política de personal y la evolución de las retribuciones, emitir informe cuando la Administración lo solicite respecto al traslado de instalaciones o cambios organizativos, conocer las sanciones por faltas muy graves y participar en la determinación de la jornada laboral y el régimen de vacaciones y permisos mediante negociación vinculante.
b) Deben recibir información sobre la política de personal y la evolución de las retribuciones, emitir informe sobre traslados de instalaciones o revisión de métodos de trabajo, ser informados de las sanciones por faltas muy graves y ser oídos en el establecimiento de la jornada laboral, horario, vacaciones y permisos.
c) Tienen derecho a recibir información sobre política de personal, evolución retributiva y previsión de empleo, emitir informe preceptivo sobre modificaciones organizativas, ser informados de todas las sanciones disciplinarias y participar en la fijación de la jornada laboral y permisos.
d) Reciben información sobre la política de personal y la evolución probable del empleo, emiten informe sobre cambios organizativos o traslado de instalaciones, conocen las sanciones disciplinarias graves y muy graves y son consultados previamente para la fijación del horario laboral y régimen de permisos.



127. Según la Ley del Empleo Público Vasco (2022), y a los efectos de la misma, ¿en qué condición se incluye a la Universidad del País Vasco dentro del sector público vasco?

a) En relación con todo su personal, tanto docente e investigador como de administración y servicios.
b) Únicamente en relación con su personal docente e investigador.
c) En relación exclusivamente con su personal de administración y servicios, incluyendo también el de sus entes instrumentales.
d) Únicamente respecto a sus órganos de gobierno y estructuras administrativas centrales.

128. Según la Ley del Empleo Público Vasco (2022), ¿a qué personal se le aplicarán determinados principios y normas de la ley cuando trabajen en entidades del sector público vasco?

a) Al personal que preste servicios en entidades del sector público vasco en las que las administraciones públicas vascas aporten cualquier porcentaje de capital, aplicándosele, entre otros, los deberes y código de conducta, o el régimen del personal laboral de alta dirección.
b) Al personal que preste servicios en entidades del sector público vasco participadas mayoritariamente por las administraciones públicas vascas, aplicándosele, entre otros, los deberes y código de conducta, o el régimen del personal laboral de alta dirección.
c) Al personal funcionario que trabaje en entidades del sector público vasco participadas mayoritariamente por las administraciones públicas vascas, aplicándosele únicamente los principios de acceso y el código de conducta.
d) Al personal de cualquier entidad participada por la Administración vasca cuando esta tenga más del cincuenta por ciento del capital, aplicándosele únicamente el régimen de alta dirección y los instrumentos de planificación del empleo público.

129. De acuerdo con la Ley del Empleo Público Vasco (2022), en relación con las competencias del Gobierno Vasco como órgano común de las administraciones públicas vascas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:

a) Puede ejercer la iniciativa legislativa en materia de empleo público, aprobar directamente las ofertas de empleo público conjuntas de todas las administraciones públicas vascas y establecer los servicios mínimos en caso de huelga previa negociación sindical.
b) Puede ejercer la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria en materia de empleo público, establecer criterios del sistema de carrera profesional, aprobar convenios de movilidad interadministrativa y determinar equivalencias entre cuerpos y escalas con funciones y titulación análogas.
c) Puede ejercer la potestad reglamentaria en materia de empleo público, aprobar ofertas de empleo público conjuntas para todas las administraciones públicas vascas y determinar los puestos reservados a nacionales vascos de la Unión Europea.
d) Puede ejercer la iniciativa legislativa, aprobar reglamentos de movilidad entre administraciones públicas vascas y fijar los sistemas de carrera profesional de cada administración pública vasca.



130. Según la Ley del Empleo Público Vasco (2022), ¿cuál de las siguientes opciones refleja correctamente la composición del Consejo Vasco del Empleo Público?

a) La persona titular del departamento competente en empleo público (presidencia), cuatro representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma designados por dicho departamento, un representante de la Universidad del País Vasco, un representante de cada diputación foral, tres representantes de las corporaciones locales designados por Eudel y
seis personas representantes del personal, designadas por las organizaciones sindicales más representativas a nivel de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b) La persona titular del departamento competente en empleo público, tres representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma, un representante de la Universidad del País Vasco, un representante de cada diputación foral, tres representantes de las corporaciones locales y seis representantes sindicales.

c) La persona titular del departamento competente en empleo público (presidencia), cuatro representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma, un representante de la Universidad del País Vasco, dos representantes de las diputaciones forales, tres representantes de las corporaciones locales designados por Eudel y seis personas representantes del personal, designadas por las organizaciones sindicales más representativas a nivel de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

d) La persona titular del departamento competente en empleo público (presidencia), cuatro representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma designados por el Gobierno Vasco, un representante de la Universidad del País Vasco, un representante de cada diputación foral, tres representantes de las corporaciones locales y cinco personas representantes del personal, designadas por las organizaciones sindicales más representativas a nivel de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

131. Según la Ley del Empleo Público Vasco (2022), ¿cuál de las siguientes opciones identifica correctamente los órganos superiores y otros órganos competentes en materia de empleo público en la Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi?

a) Órganos superiores: el Gobierno Vasco y el departamento competente en materia de empleo público. Órganos competentes adicionales: los departamentos del Gobierno Vasco, la Comisión Intersectorial del Empleo Público, el departamento competente en hacienda en determinadas áreas, el Instituto Vasco de Administración Pública y la Inspección General de Personal y Servicios.

b) Órganos superiores: el Gobierno Vasco, el departamento competente en materia de empleo público y el Instituto Vasco de Administración Pública. Órganos competentes adicionales: los departamentos del Gobierno Vasco, la Comisión Intersectorial del Empleo Público y la Inspección General de Personal.

c) Órganos superiores: el Gobierno Vasco y la Comisión Intersectorial del Empleo Público.
Órganos competentes adicionales: el departamento competente en empleo público, los departamentos del Gobierno Vasco, el Instituto Vasco de Administración Pública y el departamento competente en hacienda.

d) Órganos superiores: el Gobierno Vasco y el Parlamento Vasco. Órganos competentes adicionales: los departamentos del Gobierno Vasco, la Comisión Intersectorial del Empleo Público, el Instituto Vasco de Administración Pública y la Inspección General de Servicios.



132. De acuerdo con la Ley del Empleo Público Vasco (2022), sobre las funciones de los puestos de trabajo de naturaleza directiva, ¿cuál de las siguientes afirmaciones refleja correctamente el criterio de identificación y las características de los puestos que pueden integrar la dirección pública profesional en las administraciones públicas vascas?

a) Son puestos directivos aquellos que desempeñan funciones de planificación, dirección de personas y gestión de recursos, siempre que estén incluidos obligatoriamente en los instrumentos de ordenación de puestos de trabajo y que su desempeño implique autonomía en la ejecución de políticas públicas.
b) Podrán tener carácter directivo los puestos definidos como tales en los instrumentos de ordenación de puestos de trabajo y en los que se desarrollen funciones como el establecimiento de objetivos, participación en políticas públicas, planificación y dirección de recursos, correspondiendo su inclusión definitiva en la dirección pública profesional exclusivamente a los órganos de gobierno de cada administración pública vasca.
c) Serán puestos directivos aquellos en los que se ejerzan funciones de dirección de personas, ejecución presupuestaria y coordinación de servicios, siempre que participen en la formulación de políticas públicas y que su designación sea acordada por los órganos de dirección política.
d) Tendrán carácter directivo los puestos que impliquen planificación, coordinación y ejecución de políticas públicas bajo supervisión política, debiendo su inclusión en la dirección pública profesional realizarse conforme a criterios previamente establecidos por la ley y por los instrumentos de ordenación de puestos de trabajo.

133. De acuerdo con la Ley del Empleo Público Vasco (2022), sobre los instrumentos de ordenación de puestos de trabajo de naturaleza directiva, ¿cuál de las siguientes afirmaciones refleja correctamente el contenido mínimo que debe constar en dichos instrumentos?:

a) Debe incluir, entre otros aspectos, la denominación del puesto, los requisitos generales y específicos para su provisión, el perfil lingüístico y su fecha de preceptividad, las retribuciones —incluyendo el porcentaje máximo de retribuciones variables— y el período de desempeño del puesto, que no podrá ser inferior a cinco años.
b) Debe incluir la denominación del puesto, los requisitos generales y específicos para su provisión, el perfil lingüístico del puesto, las retribuciones básicas y complementarias, así como el período de desempeño del puesto, que no podrá ser superior a cinco años.
c) Debe incluir la denominación del puesto, los requisitos específicos de competencias profesionales, el perfil lingüístico, las retribuciones del puesto y el período de desempeño, pudiendo este ser inferior a cinco años cuando así lo determinen los órganos de gobierno.
d) Debe incluir la denominación del puesto, los requisitos generales para su provisión, el perfil lingüístico, las retribuciones del puesto y el porcentaje máximo de retribuciones variables, y el período de desempeño del puesto, que no podrá ser inferior a tres años.

134. En relación con el régimen jurídico aplicable al personal funcionario de carrera que obtiene destino definitivo en otra administración pública vasca mediante procedimientos de provisión de puestos de trabajo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones refleja correctamente lo dispuesto en la Ley del Empleo Público Vasco (2022)?

a) El personal funcionario que obtenga destino definitivo en otra administración pública vasca quedará automáticamente integrado en el cuerpo o escala equivalente de la administración de destino, perdiendo toda vinculación administrativa con la administración de origen y adquiriendo de forma plena y permanente la condición de personal funcionario de dicha administración.
b) El personal funcionario que obtenga destino definitivo en otra administración pública vasca permanecerá en situación de comisión de servicios en la administración de destino, manteniendo simultáneamente su puesto de trabajo en la administración de origen y debiendo retornar obligatoriamente a esta última una vez finalice el periodo máximo de movilidad previsto reglamentariamente.
c) El personal funcionario que obtenga destino definitivo en otra administración pública vasca conservará necesariamente la reserva de su puesto en la administración de origen y, en caso de supresión o remoción del puesto en la administración de destino, deberá reincorporarse de manera inmediata y automática a su puesto originario sin necesidad de procedimiento de provisión.
d) El personal funcionario quedará en la situación administrativa de servicio en otras administraciones públicas respecto de su administración de origen, se integrará en la administración de destino pudiendo desarrollar su carrera profesional en igualdad de condiciones que su personal, y en caso de cese de un puesto obtenido por libre designación deberá solicitar el reingreso a su administración de origen si no se le asigna otro puesto en la administración de destino dentro del plazo previsto.

135. De acuerdo con la Ley del Empleo Público Vasco (2022), ¿qué régimen jurídico debe aplicarse para revisar los actos administrativos que generen reintegros DISTINTOS de los derivados de los "pagos indebidos" definidos como aquellos que se realizan por error material, aritmético o de hecho, a favor de persona en quien no concurra derecho de cobro frente a la Administración con respecto a dicho pago o en cuantía que excede de la consignada en el acto o documento que reconoció el derecho de la persona acreedora?:

a) La Administración deberá proceder automáticamente a la revocación del acto y exigir la devolución mediante el procedimiento general de reintegro por pagos indebidos, con independencia de la causa que origine la invalidez del acto administrativo.
b) La revisión deberá tramitarse conforme a los procedimientos de revisión de oficio de actos nulos o anulables previstos en la legislación del procedimiento administrativo común, o bien mediante los procedimientos específicos de reintegro, en función de la causa que determine la invalidez del acto del que derive el reintegro.
c) La Administración se ceñirá a exigir el reintegro cuando previamente se haya declarado judicialmente la nulidad del acto administrativo del que derive el pago, sin que sea posible acudir a procedimientos administrativos de revisión de oficio.



d) La revisión correcta se realizará mediante el procedimiento de declaración de lesividad de los actos favorables previsto en la legislación de procedimiento administrativo común, con independencia de que el acto sea nulo de pleno derecho o meramente anulable.

136. De conformidad con la Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, Ley General de la Seguridad Social, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a) La situación legal de desempleo total durante la que la persona trabajadora perciba la prestación correspondiente se considera situación asimilada a la de alta en la Seguridad Social.
b) El período correspondiente a vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas antes de finalizar el contrato se considera situación asimilada a la de alta, pero sin obligación de cotización en ningún caso.
c) En los supuestos de huelga o cierre patronal la persona trabajadora queda en situación de baja en la Seguridad Social hasta que se reanude la actividad laboral.
d) Los casos de excedencia forzosa, traslado fuera del territorio nacional o convenio especial con la Seguridad Social se consideran automáticamente situación asimilada al alta para todas las contingencias.

137. De conformidad con la Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, Ley General de la Seguridad Social, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a) Cuando se cause derecho a una prestación por cumplirse las condiciones establecidas legalmente, la responsabilidad del pago se imputará, según sus competencias, a las entidades gestoras, mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, empresarios/as que colaboren en la gestión o, en su caso, a los servicios comunes.
b) El incumplimiento de las obligaciones en materia de afiliación, altas, bajas o cotización exime a la persona empresaria de cualquier responsabilidad respecto al pago de las prestaciones al trabajador.
c) Las entidades gestoras y mutuas solo podrán abonar prestaciones cuando la persona empresario haya cumplido correctamente todas sus obligaciones de afiliación y cotización.
d) La responsabilidad en el pago de prestaciones se reserva a la declaración por resolución judicial, no pudiendo establecerse en vía administrativa.

138. De conformidad con la Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, Ley General de la Seguridad Social, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a) Se considera situación especial de incapacidad temporal por contingencias comunes la menstruación incapacitante secundaria, la incapacidad derivada de la interrupción del embarazo —voluntaria o no— mientras la trabajadora reciba asistencia sanitaria del Servicio Público de Salud y esté impedida para el trabajo, así como la gestación desde el primer día de la semana trigésima novena.
b) La incapacidad temporal derivada de la interrupción del embarazo tiene la consideración de contingencia profesional, con independencia de la causa que la haya originado.



c) La situación de incapacidad temporal del donante de órganos o tejidos únicamente comprende los días correspondientes a la intervención quirúrgica y al ingreso hospitalario, excluyendo los días previos de preparación médica.
d) La gestación de la mujer trabajadora se considera situación especial de incapacidad temporal por contingencias comunes desde la semana trigésima sexta de embarazo.

139. De conformidad con la Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, Ley General de la Seguridad Social, en relación con la incapacidad temporal y tras agotar los 365 días de duración, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a) Una vez agotado el plazo de 365 días de incapacidad temporal, la inspección médica del Instituto Nacional de la Seguridad Social es la única competente para emitir el alta médica por curación, mejoría que permita el trabajo, propuesta de incapacidad permanente o por incomparecencia injustificada a los reconocimientos médicos.
b) Tras agotarse los 365 días de incapacidad temporal, el alta médica puede ser emitida indistintamente por el médico de atención primaria o por la inspección médica del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
c) Una vez transcurridos los 365 días de incapacidad temporal, la persona trabajadora pasa automáticamente a situación de incapacidad permanente sin necesidad de resolución administrativa.
d) Después de los 365 días de incapacidad temporal, la persona trabajadora debe reincorporarse obligatoriamente a su puesto de trabajo salvo que solicite una nueva baja médica ante su médico de atención primaria.

140. De conformidad con la Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, Ley General de la Seguridad Social, y en cuanto al subsidio por nacimiento y cuidado de menor, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a) Cuando la persona trabajadora tiene menos de veintiún años en la fecha del nacimiento, adopción o acogimiento, no se exige ningún período mínimo de cotización para acceder al subsidio.
b) Cuando la persona trabajadora tiene menos de veintiún años en la fecha del nacimiento, adopción o acogimiento, se exige un período mínimo de cotización de 180 días para acceder al subsidio.
c) Cuando la persona trabajadora tiene veintiséis años o más, el período mínimo exigido es de noventa días cotizados dentro de los siete años anteriores al inicio del descanso.
d) Para tener derecho al subsidio por nacimiento y cuidado de menor, es obligatorio acreditar al menos noventa días cotizados dentro de los siete años inmediatamente anteriores al inicio del descanso.

141. De conformidad con la Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, Ley General de la Seguridad Social, en relación con la normativa sobre la prestación económica por ejercicio corresponsable del cuidado del/de la lactante, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a) La situación protegida consiste en la reducción de la jornada de trabajo en media hora realizada por ambos progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción o acogedores permanentes, con la misma duración y régimen, para el

cuidado del/de la lactante desde que cumpla nueve meses hasta los doce meses de edad, siempre que ambos trabajen.

b) La prestación se reconoce cuando uno solo de los progenitores reduce su jornada laboral para el cuidado del/de la lactante entre los seis y los doce meses de edad.

c) La reducción de jornada para acceder a esta prestación debe ser de al menos una hora diaria y puede ser ejercida por cualquiera de los progenitores de forma individual.

d) La acreditación del ejercicio corresponsable del cuidado del/de la lactante se realiza mediante declaración de la persona trabajadora ante la Seguridad Social.

142. De conformidad con la Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, Ley General de la Seguridad Social, en relación con la normativa sobre la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a) La prestación económica puede mantenerse hasta que el/la causante cumpla 23 años cuando, alcanzada la mayoría de edad, persista el cáncer o la enfermedad grave diagnosticada anteriormente y continúe la necesidad de hospitalización, tratamiento y cuidado.

b) La prestación económica se extingue automáticamente cuando el/la menor cumple 18 años, sin posibilidad de prórroga en ningún caso.

c) La prestación económica solo puede mantenerse hasta los 21 años, aunque persista la enfermedad grave.

d) La prestación económica puede mantenerse hasta los 26 años, independientemente de la existencia de discapacidad.

143. De conformidad con la Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, Ley General de la Seguridad Social, y según la normativa sobre incapacidad permanente derivada de contingencias comunes, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a) Las pensiones de incapacidad permanente absoluta o gran incapacidad derivadas de contingencias comunes pueden reconocerse, aunque el/la interesado/a no se encuentre en alta o situación asimilada al alta en el momento del hecho causante, siempre que acredite un período mínimo de cotización de quince años.

b) Las pensiones de incapacidad permanente absoluta o gran incapacidad solo pueden reconocerse cuando el/la trabajador/a se encuentre en situación de alta o asimilada al alta en el momento del hecho causante.

c) Cuando el/la trabajador/a no se encuentra en situación de alta, el período mínimo de cotización exigido para incapacidad permanente absoluta es de diez años.

d) La incapacidad permanente absoluta o gran incapacidad derivada de contingencias comunes solo puede reconocerse si el/la trabajador/a está en situación de desempleo con prestación contributiva.



144. De conformidad con la Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, Ley General de la Seguridad Social, en lo relativo a la reducción de la edad de jubilación en personas con discapacidad, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a) Los coeficientes reductores de la edad de jubilación por discapacidad pueden utilizarse para cumplir el requisito de edad exigido para acceder a la jubilación parcial.
b) Las personas con discapacidad igual o superior al 45 % pueden acceder siempre a la jubilación anticipada sin necesidad de que la discapacidad esté incluida en una lista reglamentaria.
c) La aplicación de coeficientes reductores por discapacidad puede permitir acceder a la jubilación antes de los 50 años si el grado de discapacidad es superior al 65 %.
d) La edad mínima de acceso a la pensión de jubilación puede reducirse para personas con discapacidad igual o superior al 65 %, o también con discapacidad igual o superior al 45 % cuando se trate de discapacidades reglamentariamente determinadas que conlleven una reducción significativa de la esperanza de vida.

145. Conforme dispone la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad las Áreas de Salud constituidas en el territorio de las Comunidades Autónomas serán dirigidas por un órgano propio donde deberán participar las corporaciones locales en ellas situadas con una representación NO inferior:

a) Al 40 por 100.
b) Al 50 por 100.
c) Al 60 por 100.
d) Al 30 por 100.

146. Conforme determina la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, son titulares del derecho a la protección de la salud:

a) Exclusivamente los ciudadanos españoles.
b) Todos los españoles y los ciudadanos extranjeros con residencia en el territorio nacional.
c) Solo los ciudadanos españoles y los extranjeros con autorización administrativa especial.
d) Únicamente los ciudadanos españoles empadronados.

147. Según la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, el Sistema Nacional de Salud está constituido por:

a) Los servicios sanitarios del Estado exclusivamente.
b) Los servicios de salud de las Comunidades Autónomas exclusivamente.
c) El conjunto de los Servicios de Salud de la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas.
d) Los servicios sanitarios públicos y privados integrados.



148. Conforme determina la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, corresponde a la Administración del Estado:

a) La gestión directa de todos los servicios sanitarios.
b) La reglamentación, autorización y registro de medicamentos y productos sanitarios.
c) La organización exclusiva de los servicios de salud autonómicos.
d) La prestación directa de asistencia sanitaria en todo el territorio nacional.

149. Conforme determina la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas:

a) Se organizarán de forma independiente sin mecanismos de coordinación.
b) Se organizarán de forma integrada en el Sistema Nacional de Salud.
c) Se organizarán exclusivamente a través de estructuras hospitalarias.
d) Se organizarán al margen de la planificación sanitaria estatal.

150. En relación con las Áreas de Salud, señale la afirmación correcta:

a) Son unidades exclusivamente administrativas sin funciones asistenciales.
b) Son las estructuras fundamentales del sistema sanitario, responsables de la gestión unitaria de los servicios sanitarios.
c) Se crean únicamente por el Estado.
d) Carecen de funciones de planificación sanitaria.

151. Según la Ley General de Sanidad, en el órgano de dirección de las Áreas de Salud deberán participar las corporaciones locales:

a) Con carácter potestativo.
b) Con una representación inferior al 30%.
c) Con una representación no inferior al 40%.
d) Exclusivamente en funciones consultivas sin representación.

152. Según la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, los Consejos de Salud de Área son:

a) Órganos exclusivamente técnicos de la Administración sanitaria.
b) Órganos de participación comunitaria para la consulta y el seguimiento de la gestión.
c) Órganos de dirección del sistema sanitario.
d) Órganos de gestión de los servicios sanitarios.

153. En materia de productos farmacéuticos, corresponde a la Administración Sanitaria del Estado:

a) La fijación exclusiva de precios sin intervención en calidad.
b) La valoración de la idoneidad sanitaria de los medicamentos y su autorización.
c) La gestión directa de farmacias privadas.
d) La distribución comercial de medicamentos.



154. Conforme determina la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, las profesiones sanitarias tituladas:

a) Se determinan exclusivamente por decisión de las Comunidades Autónomas.
b) Son aquellas cuya formación está dirigida a la atención de la salud y están organizadas en colegios profesionales reconocidos por los poderes públicos.
c) Comprenden cualquier actividad relacionada con la salud, con independencia de su regulación.
d) Se definen por la experiencia profesional, aunque no exista titulación oficial.

155. Conforme determina la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, para obtener el primer grado de desarrollo profesional será necesario:

a) Acreditar tres años de ejercicio profesional.
b) Acreditar cinco años de ejercicio profesional.
c) Acreditar diez años de ejercicio profesional.
d) Superar exclusivamente una prueba teórica.

156. Conforme señala la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, el médico puede ejercer el derecho de renuncia a prestar atención sanitaria al paciente:

a) Solo si desarrolla el ejercicio profesional en el ámbito privado.
b) En cualquier caso tanto si desarrolla el ejercicio profesional en el sistema público como en el ámbito privado por cuenta ajena.
c) Tanto si desarrolla el ejercicio profesional en un sistema público como en el ámbito privado por cuenta ajena pero solo en el caso de que dicha renuncia no conlleve desatención.
d) La Ley no contempla el derecho a renunciar a prestar atención sanitaria al paciente.

157. En relación con el objeto y ámbito de aplicación de la Ley 44/2003, señale la afirmación correcta:

a) La ley regula exclusivamente el ejercicio de las profesiones sanitarias en los servicios sanitarios públicos.
b) La ley regula los aspectos básicos de las profesiones sanitarias tituladas solo en lo relativo a su ejercicio por cuenta ajena.
c) La ley regula, entre otros extremos, el ejercicio profesional, la estructura general de la formación, el desarrollo profesional y la participación de los profesionales sanitarios en la planificación y ordenación de las profesiones sanitarias.
d) La ley regula únicamente la formación especializada y el desarrollo profesional de los profesionales sanitarios.

158. Sobre las profesiones sanitarias tituladas, identifique la opción correcta:

a) El carácter de profesión sanitaria, titulada y regulada, de una actividad no prevista expresamente en la ley puede declararse mediante orden ministerial.
b) Las profesiones sanitarias se estructuran únicamente en profesiones de nivel licenciado.

c) El carácter de profesión sanitaria, titulada y regulada, de una actividad no prevista expresamente en la ley puede declararse formalmente mediante norma con rango de ley.
d) Toda actividad vinculada a la salud tiene automáticamente la consideración de profesión sanitaria titulada y regulada.

159. En el ejercicio de una profesión sanitaria, señale la afirmación correcta:

a) El ejercicio por cuenta propia exige título oficial, pero el ejercicio por cuenta ajena puede realizarse sin él.
b) El ejercicio de una profesión sanitaria, por cuenta propia o ajena, requiere la posesión del correspondiente título oficial que habilite expresamente para ello o, en su caso, de la certificación legalmente prevista.
c) Basta con la colegiación profesional para ejercer una profesión sanitaria.
d) El ejercicio de una profesión sanitaria requiere únicamente acreditar experiencia profesional suficiente.

160. En la relación entre profesionales sanitarios y personas atendidas por ellos, constituye un principio general legalmente establecido:

a) El deber del profesional de hacer un uso racional de los recursos diagnósticos y terapéuticos a su cargo, evitando su sobreutilización, infrautilización e inadecuada utilización.
b) La libertad del profesional para utilizar los recursos diagnósticos y terapéuticos sin condicionamiento alguno, siempre que exista consentimiento del paciente.
c) La facultad del profesional de limitar la información clínica por razones organizativas del centro.
d) La posibilidad de renunciar a toda atención sanitaria cuando el paciente rechace una recomendación médica.

161. Entre los principios rectores de la actuación formativa y docente en el ámbito de las profesiones sanitarias figura:

a) La separación funcional entre centros sanitarios y formación pregraduada, para evitar interferencias asistenciales.
b) La disposición de toda la estructura del sistema sanitario para ser utilizada en la docencia pregraduada, especializada y continuada de los profesionales.
c) La exclusión de los centros sanitarios como centros de investigación científica.
d) El carácter voluntario de la formación continuada para las instituciones y centros sanitarios.

162. Respecto de la formación especializada en Ciencias de la Salud, señale la opción correcta:

a) Tiene carácter voluntario y no oficial, y puede desarrollarse fuera de centros acreditados.
b) Tendrá lugar por el sistema de residencia en centros acreditados.
c) Es compatible con cualquier otra actividad profesional, siempre que sea sanitaria.
d) No exige participación progresiva del especialista en formación en la actividad y responsabilidades propias de la especialidad.



163. Conforme determina la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, la cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud:

a) Incluye exclusivamente prestaciones farmacéuticas y ortoprotésicas.
b) Comprende actividades asistenciales cubiertas íntegramente por financiación pública, incluyendo prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y transporte sanitario urgente.
c) Incluye prestaciones sujetas a aportación del usuario.
d) Comprende únicamente servicios de carácter complementario.

164. Conforme a la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, la cartera común de servicios accesorios del Sistema Nacional de Salud incluye:

a) Todas aquellas actividades, servicios o técnicas, con carácter de prestación, que no se consideran esenciales y/o que son coadyuvantes o de apoyo para la mejora de una patología de carácter crónico, cubiertas de forma completa por financiación pública.
b) Todas aquellas actividades, servicios o técnicas, sin carácter de prestación, que no se consideran esenciales y/o que son coadyuvantes o de apoyo para la mejora de una patología de carácter crónico, estando sujetas a aportación y/o reembolso por parte del usuario.
c) Todas aquellas actividades, servicios o técnicas, sin carácter de prestación, que se consideran esenciales y/o que son coadyuvantes o de apoyo para la mejora de una patología de carácter crónico, cubiertas de forma completa por financiación pública.
d) Todas aquellas actividades, servicios o técnicas, con carácter de prestación, que no se consideran esenciales y/o que son coadyuvantes o de apoyo para la mejora de una patología de carácter crónico, estando sujetas a aportación y/o reembolso por parte del usuario.

165. En relación con la finalidad de la Ley 16/2003, señale la afirmación correcta:

a) Tiene por objeto exclusivo la regulación de las prestaciones sanitarias.
b) Tiene por objeto garantizar la cohesión territorial del sistema sanitario exclusivamente mediante financiación estatal.
c) Tiene por objeto establecer acciones de coordinación y cooperación de las Administraciones públicas sanitarias para garantizar la equidad, calidad y participación social en el Sistema Nacional de Salud.
d) Tiene por objeto regular únicamente la organización interna de los servicios de salud autonómicos.



166. Conforme determina la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud:

a) Es el conjunto de prestaciones sanitarias definidas exclusivamente por las Comunidades Autónomas.
b) Es el conjunto de técnicas, tecnologías o procedimientos mediante los que se hacen efectivas las prestaciones sanitarias.
c) Se limita a las prestaciones asistenciales hospitalarias.
d) Comprende únicamente servicios de carácter preventivo.

167. En relación con la cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud, señale la opción correcta:

a) Incluye exclusivamente prestaciones asistenciales cubiertas íntegramente por financiación pública.
b) Incluye prestaciones sujetas a aportación del usuario, como la farmacéutica ambulatoria.
c) Incluye únicamente servicios no sanitarios.
d) Incluye exclusivamente transporte sanitario urgente.

168. En relación con los profesionales sanitarios en el Sistema Nacional de Salud, señale la afirmación correcta:

a) La Ley 16/2003 no contiene previsiones sobre profesionales sanitarios.
b) La planificación de recursos humanos sanitarios se realiza exclusivamente a nivel autonómico sin coordinación estatal.
c) La Ley establece mecanismos de coordinación para la planificación de los profesionales sanitarios en el conjunto del sistema.
d) La gestión de profesionales sanitarios corresponde exclusivamente al Estado.

169. En materia de investigación en el Sistema Nacional de Salud, señale la afirmación correcta:

a) La investigación sanitaria queda excluida del ámbito del Sistema Nacional de Salud.
b) La investigación sanitaria debe orientarse a la mejora de la salud de la población.
c) La investigación sanitaria corresponde exclusivamente a entidades privadas.
d) La investigación sanitaria no forma parte de las políticas públicas de salud.

170. En relación con el sistema de información sanitaria, indique la opción correcta:

a) Es un sistema de carácter autonómico sin integración estatal.
b) Tiene como finalidad exclusivamente la gestión administrativa interna.
c) Tiene como finalidad garantizar la disponibilidad de información sanitaria para la planificación, evaluación y mejora del sistema.
d) Es un sistema reservado exclusivamente a la Administración General del Estado.



171. En materia de calidad del Sistema Nacional de Salud, señale la afirmación correcta:

a) La calidad es un principio exclusivamente organizativo sin desarrollo normativo.
b) La calidad se limita a la evaluación de los centros hospitalarios.
c) La Ley establece mecanismos para garantizar la mejora continua de la calidad del sistema sanitario.
d) La calidad es una competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas sin coordinación estatal.

172. En relación con la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, señale la afirmación correcta:

a) Es el conjunto de prestaciones sanitarias definidas por cada Comunidad Autónoma en su ámbito territorial.
b) Es el conjunto de técnicas, tecnologías o procedimientos mediante los que se hacen efectivas las prestaciones sanitarias.
c) Comprende exclusivamente prestaciones asistenciales hospitalarias.
d) Se limita a prestaciones de salud pública.

173. En relación con la cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud, señale la afirmación correcta:

a) Incluye prestaciones sujetas a aportación del usuario.
b) Comprende exclusivamente transporte sanitario urgente.
c) Comprende actividades asistenciales de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación cubiertas íntegramente por financiación pública.
d) Tiene carácter accesorio dentro del sistema sanitario.

174. En relación con la cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud, señale la afirmación correcta:

a) Está cubierta íntegramente por financiación pública.
b) Incluye prestaciones cuya provisión se realiza mediante dispensación ambulatoria y están sujetas a aportación del usuario.
c) Comprende únicamente prestaciones hospitalarias de alta complejidad.
d) Tiene carácter exclusivamente preventivo.

175. En relación con la cartera común de servicios accesorios del Sistema Nacional de Salud, señale la afirmación correcta:

a) Incluye prestaciones esenciales cubiertas íntegramente por financiación pública.
b) Comprende únicamente prestaciones farmacéuticas.
c) Incluye actividades, servicios o técnicas sin carácter de prestación, sujetas a aportación o reembolso.
d) Tiene carácter obligatorio en todas las Comunidades Autónomas.

176. En relación con la cartera de servicios complementaria de las Comunidades Autónomas, señale la afirmación correcta:

a) No pueden incorporar prestaciones distintas de la cartera común del SNS.
b) Pueden incorporar técnicas o procedimientos adicionales, siempre que asuman su financiación.
c) Deben financiarse con cargo a fondos estatales.
d) Requieren autorización previa del Gobierno de la Nación.

177. La incorporación de nuevas técnicas, tecnologías o procedimientos a la cartera común del Sistema Nacional de Salud exige:

a) Exclusivamente la decisión política del Ministerio de Sanidad.
b) Evaluación previa sobre eficacia, seguridad, efectividad y utilidad.
c) Únicamente informe de las Comunidades Autónomas.
d) Aprobación mediante ley formal.

178. En relación con las garantías de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud, señale la afirmación correcta:

a) Se limitan a la calidad de la asistencia hospitalaria.
b) Comprenden garantías de accesibilidad, movilidad, calidad, seguridad, información y tiempo.
c) Son competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas sin coordinación estatal.
d) Se aplican únicamente a centros públicos.

179. En relación con el uso tutelado de técnicas, tecnologías o procedimientos en el Sistema Nacional de Salud, señale la afirmación correcta:

a) Permite la incorporación definitiva automática a la cartera común.
b) Se realiza sin limitación temporal.
c) Tiene como finalidad evaluar su seguridad, eficacia o eficiencia antes de su incorporación.
d) Puede realizarse sin consentimiento del paciente.

180. En relación con el reintegro de gastos médicos en el Sistema Nacional de Salud, señale la afirmación correcta:

a) Procede siempre que el paciente opte por acudir a la sanidad privada.
b) Procede únicamente cuando exista autorización administrativa previa.
c) Procede cuando se utilicen medios ajenos en casos de urgencia vital o imposibilidad de acceso a los medios del sistema público.
d) Tiene carácter automático en cualquier prestación sanitaria.



181. Conforme a la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, el derecho a la información sanitaria de los y las pacientes:

a) No puede limitarse en ningún caso.
b) Puede limitarse por la existencia acreditada de un estado de necesidad terapéutica.
c) Puede limitarse por la existencia acreditada de incapacidad, cualquiera que sea el grado de la incapacidad.
d) Puede limitarse por la existencia acreditada de un estado de necesidad epidemiológica.

182. Según dispone la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, en relación con menores de edad, el consentimiento informado para actuaciones sanitarias:

a) Corresponde siempre al o a la representante legal, con independencia de la edad o madurez del menor.
b) Corresponde al o a la menor cuando tenga suficiente madurez y, en todo caso, a partir de los 16 años, salvo excepciones legalmente previstas.
c) No puede ser prestado nunca por el o la menor, aunque tenga 16 años.
d) Puede omitirse si existe cualquier grado de incapacidad del o de la menor.

183. Según dispone la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, las infracciones de lo dispuesto en esta ley:

a) Se regulan de forma detallada en la propia ley, con un catálogo específico de actuaciones y sanciones.
b) Se sancionan conforme a lo previsto en el régimen sancionador de la Ley 14/1986, General de Sanidad.
c) No tienen régimen sancionador.
d) Solo se sancionan en caso de dolo o mala fe.

184. Según dispone la ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, cuando el o la paciente, según el criterio del personal médico que le asiste, carezca de capacidad para entender la información a causa de su estado físico o psíquico:

a) La información se pondrá en conocimiento de las personas vinculadas al paciente o a la paciente por razones familiares o de hecho, si así lo dispone la autoridad judicial.
b) La información se pondrá en conocimiento de las personas vinculadas al paciente o a la paciente por razones familiares o de hecho, después de haber consultado al Comité de Ética Asistencial de Centro.
c) La información se pondrá en conocimiento de las personas vinculadas al paciente o a la paciente por razones familiares o de hecho, después de haber consultado con la dirección del centro.
d) La información se pondrá en conocimiento de las personas vinculadas al paciente o a la paciente por razones familiares o de hecho.

185. ¿De qué manera debe proporcionarse, como regla general, la información asistencial al paciente o a la paciente según la Ley 41/2002?

a) A través del representante legal de forma obligatoria.
b) Mediante la entrega de folletos informativos estandarizados.
c) De forma verbal, dejando constancia en la historia clínica.
d) Exclusivamente por escrito para garantizar la seguridad jurídica.

186. ¿Cuál es el plazo máximo para comunicar a la autoridad judicial el internamiento obligatorio de una persona por riesgo para la salud pública?

a) 12 horas.
b) 72 horas.
c) 24 horas.
d) 48 horas.

187. ¿Qué sucede si una persona paciente no firma la alta voluntaria tras rechazar el tratamiento prescrito?

a) La dirección del centro puede disponer el alta forzosa en las condiciones reguladas por la ley.
b) Se le mantiene ingresado o ingresada bajo observación sin aplicar ningún cuidado.
c) El o la paciente queda obligado/a a someterse al tratamiento mediante auxilio judicial.
d) El o la médico responsable debe solicitar la incapacitación civil inmediata.

188. En cuanto a la gratuidad de los certificados médicos:

a) Solo son gratuitos si la persona paciente tiene menos de 18 años.
b) Serán gratuitos cuando así lo establezca una disposición legal o reglamentaria.
c) Son siempre gratuitos para todos los españoles y las españolas.
d) El personal médico puede cobrar lo que considere oportuno según su prestigio.

189. De acuerdo con la Ley 41/2002, ¿cuál es un límite explícito al derecho de acceso del o de la paciente a su propia historia clínica?

a) La antigüedad de los datos si estos superan los tres años de registro.
b) El derecho de los profesionales a la reserva de sus anotaciones subjetivas.
c) La negativa expresa del médico responsable por considerar que la información es confusa.
d) El acceso a los datos administrativos y de facturación del centro.

190. ¿A qué tipo de asistencia sanitaria se aplica el Decreto 38/2012 en la Comunidad Autónoma del País Vasco?

a) Solo a los servicios sanitarios integrados en una organización no sanitaria.
b) Solo a los centros hospitalarios de agudos, excluyendo consultorios locales y gabinetes de psicología.
c) Únicamente a la asistencia sanitaria pública prestada en hospitales del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza.



d) A todo tipo de asistencia sanitaria, pública y privada, que se preste en los centros sanitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, tanto a nivel de atención primaria como especializada, incluida la actividad sanitaria que se lleve a cabo de forma individual.

191. Según el Decreto 38/2012, el plazo máximo de entrega de la documentación solicitada por la propia persona paciente sobre su historial clínico es:

a) Sesenta días si la historia clínica está en un archivo externo o en soporte papel.
b) Un plazo inferior a treinta días desde la solicitud.
c) Quince días naturales desde la solicitud.
d) No existe plazo máximo al respecto.

192. Con respecto a la conservación de la documentación clínica, ¿cuál es el periodo mínimo general obligatorio?

a) Un periodo mínimo de cinco años a contar desde la fecha del alta de cada episodio asistencial.
b) Diez años para toda la documentación clínica sin excepciones.
c) Dos años tras el fallecimiento del paciente.
d) Veinte años para asegurar la investigación epidemiológica futura.

193. Según el artículo 12.1 del Decreto 38/2012, ¿qué información puede excluirse del acceso del o de la paciente a su historia clínica?

a) Los informes de interconsulta entre especialistas.
b) Las anotaciones subjetivas del personal profesional sanitarios.
c) Los resultados de pruebas diagnósticas.
d) El diagnóstico principal.

194. Respecto al derecho de cancelación de datos en la historia clínica, ¿cuál es la consecuencia principal de su ejercicio?

a) La sustitución del nombre del o de la paciente por un código anónimo.
b) El borrado físico inmediato de todos los registros del sistema.
c) El bloqueo de datos.
d) La transferencia obligatoria de los datos a otro centro sanitario.

195. Según el Decreto 38/2012, ¿cuál de estos documentos NO puede ser destruido nunca, incluso tras expirar los plazos generales de conservación?:

a) La anamnesia y la exploración física inicial.
b) El informe de alta, el consentimiento informado y el informe quirúrgico.
c) Las órdenes médicas diarias y la hoja de administración farmacéutica.
d) El registro de constantes gráficas y la planificación de cuidados de enfermería.



196. La función principal de la Comisión de Valoración, Selección y Purga de Documentos Clínicos es:

a) Sancionar al personal profesional que incumpla el deber de secreto profesional.
b) Gestionar el acceso de los y las pacientes a sus propias historias clínicas electrónicas.
c) Dictar las normas de conservación y autorizar los procesos de eliminación selectiva de documentación clínica.
d) Revisar los informes de alta de los y las pacientes.

197. Para los servicios de medicina nuclear y radioterapia, el plazo de conservación de la documentación es:

a) 50 años, debido al riesgo de exposición a radiaciones ionizantes.
b) 15 años o hasta el fallecimiento del o de la paciente.
c) 30 años, según lo dispuesto en la normativa específica sobre criterios de calidad.
d) Igual al plazo general de 5 años.

198. Es obligación de las organizaciones sanitarias, según el Decreto 38/2012:

a) Adoptar las medidas que consideren oportunas para gestionar la documentación clínica.
b) Realizar procesos de limpieza documental para aligerar la carga del archivo.
c) Garantizar que la historia clínica esté disponible en el lugar donde se presta la asistencia sanitaria.
d) Decidir libremente los criterios de organización del archivo clínico sin limitaciones.

199. Conforme a la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi el Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud está integrado por:

a) El Presidente y por un número no superior a tres miembros en representación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
b) El Presidente y por un número no superior a cinco miembros en representación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
c) El Presidente y por un número no superior a seis miembros en representación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
d) El Presidente, cinco miembros en representación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Consejero del Departamento competente en materia de sanidad.

200. Conforme determina la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi:

a) El ente público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud se sujetará al Derecho privado, agotando, en su caso, sus actos la vía administrativa.
b) Las organizaciones dependientes del ente no tendrán la consideración de órganos administrativos.
c) El ente público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud se sujetará al Derecho público, agotando, en su caso, sus actos la vía administrativa, cuando ejerza potestades



administrativas por atribución directa o delegación, así como en cuanto a su régimen de patrimonio y en materia de responsabilidad patrimonial ante terceros por el funcionamiento de sus servicios.

d) El ente público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud se sujetará al Derecho público, agotando, en su caso, sus actos la vía administrativa.

201. Conforme determina la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, la planificación sanitaria tendrá como base principal de ordenación territorial la división de todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi en las demarcaciones geográficas denominadas:

a) Comarcas sanitarias.
b) Áreas de Salud.
c) Territorios Históricos.
d) Áreas sanitarias.

202. En relación con el objeto de la Ley 8/1997, señale la afirmación correcta:

a) Tiene por objeto exclusivo la regulación de los centros sanitarios públicos.
b) Tiene por objeto la ordenación del sistema sanitario de Euskadi y la regulación de las actuaciones públicas en materia de salud.
c) Tiene por objeto exclusivamente la organización de Osakidetza.
d) Tiene por objeto regular únicamente la prestación farmacéutica.

203. Conforme determina la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, el sistema sanitario de Euskadi:

a) Está configurado exclusivamente por recursos sanitarios privados.
b) Está configurado por todos los recursos sanitarios públicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
c) Está configurado por recursos sanitarios públicos y privados en igualdad de condiciones jurídicas.
d) Se limita a los servicios de atención primaria.

204. En relación con los principios programáticos del Sistema Sanitario de Euskadi, señale la afirmación correcta:

a) La orientación prioritaria a la curación de enfermedades.
b) La limitación de la participación ciudadana a funciones consultivas.
c) La priorización exclusiva de la asistencia hospitalaria.
d) La orientación prioritaria de los medios y actuaciones a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades.

205. Conforme determina la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, la dirección, planificación y programación del sistema sanitario de Euskadi corresponde:

a) Exclusivamente a las Corporaciones Locales.
b) Al Gobierno Vasco, a través de los órganos competentes de la Administración General de la Comunidad Autónoma.



c) A Osakidetza-Servicio Vasco de Salud de forma exclusiva.
d) Al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

206. Respecto a Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, señale la afirmación correcta:

a) Se rige exclusivamente por el Derecho privado en todas sus actuaciones.
b) Carece de personalidad jurídica propia.
c) Es un ente público de derecho privado que actúa con sometimiento al Derecho público cuando ejerce potestades administrativas.
d) Es un órgano administrativo sin autonomía de gestión.

207. En relación con la provisión de servicios sanitarios, señale la afirmación correcta:

a) Solo pueden prestarse servicios sanitarios mediante gestión directa pública.
b) La provisión de servicios sanitarios puede realizarse mediante relaciones jurídicas con entidades privadas.
c) Está prohibida la colaboración con entidades privadas en la prestación sanitaria.
d) La participación privada queda limitada exclusivamente a la financiación.

208. Conforme determina el Decreto 255/1997, de 11 de noviembre, por el que se establecen los Estatutos Sociales del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, corresponde al Consejo de Administración del Ente Público:

a) La resolución de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de sus servicios.
b) La autorización de todos los contratos del Ente Público sin posibilidad de delegación.
c) La gestión directa de todas las organizaciones de servicios sanitarios.
d) La aprobación de las plantillas estructurales sin intervención de otros órganos.

209. Conforme al Decreto 255/1997, de 11 de noviembre, por el que se establecen los Estatutos Sociales del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, a efectos del conocimiento de recursos administrativos ordinarios:

a) El Director Gerente de cada organización de servicios sanitarios actuará como superior jerárquico de los cargos directivos de las organizaciones de servicios sanitarios del Ente Público y, cuando corresponda directamente a la organización central del Ente Público el conocimiento de los asuntos, se constituirá en superior jerárquico el Consejero de Sanidad.
b) El Consejo de Administración actuará como superior jerárquico de los cargos directivos de las organizaciones de servicios sanitarios del Ente Público y, cuando corresponda directamente a la organización central del Ente Público el conocimiento de los asuntos, se constituirá en superior jerárquico el Consejero de Sanidad.
c) El Director General del Ente Público actuará como superior jerárquico de los cargos directivos de las organizaciones de servicios sanitarios del Ente Público y, cuando corresponda directamente a la organización central del Ente Público el conocimiento de los asuntos, se constituirá en superior jerárquico el Consejo de Administración del mismo.



d) El Director Gerente de cada organización de servicios sanitarios actuará como superior jerárquico de los cargos directivos de las organizaciones de servicios sanitarios del Ente Público y, cuando corresponda directamente a la organización central del Ente Público el conocimiento de los asuntos, se constituirá en superior jerárquico el Director General del Ente público.

210. Conforme al Decreto 255/1997, de 11 de noviembre, por el que se establecen los Estatutos Sociales del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, la aprobación de las Plantillas Estructurales de las distintas organizaciones del Ente público y las Ofertas Públicas de Empleo, que darán lugar a los correspondientes procesos de selección de personal en el Ente Público corresponde:

a) Al Consejero de Sanidad, a propuesta del Consejo de Administración del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Al Director General del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, a propuesta del Consejo de Administración del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
c) Al Consejo de Administración del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
d) A los Directores Gerentes de cada organización de servicios sanitarios.

211. Conforme determinan los estatutos sociales de Osakidetza, el consejo de administración, además del presidente del ente público, constará, en representación de la administración de la comunidad autónoma de:

a) Cinco miembros.
b) Seis miembros.
c) Siete miembros.
d) Diez miembros.

212. En relación con la definición del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, señale la afirmación correcta:

a) Es un organismo autónomo administrativo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, cuyo objeto es la planificación sanitaria.
b) Es un ente institucional de la Comunidad Autónoma, de naturaleza pública y bajo la calificación de Ente Público de Derecho Privado, cuyo objeto es la provisión de servicios sanitarios a través de sus organizaciones públicas dependientes.
c) Es una sociedad pública adscrita al Departamento de Salud, cuyo objeto exclusivo es la gestión hospitalaria.
d) Es un ente instrumental de carácter privado cuyo objeto principal es la contratación de servicios sanitarios con terceros.

213. Entre los fines del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud figura expresamente:

a) La aprobación del mapa sanitario de Euskadi.
b) La potestad reglamentaria en materia de organización sanitaria.



c) La promoción de la docencia en ciencias de la salud y de las actividades de investigación, estudio y divulgación relacionadas con las mismas.
d) La autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios privados.

214. De acuerdo con los Estatutos Sociales del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, la organización central de administración y gestión corporativa:

a) Se crea como estructura directiva de apoyo al Consejo de Administración y ejerce, respecto de las organizaciones de servicios sanitarios, funciones de control, coordinación estratégica, apoyo y ejecución de facultades de gestión.
b) Se limita a funciones de asesoramiento jurídico y representación procesal.
c) Carece de competencias respecto de las organizaciones de servicios sanitarios, que actúan con plena independencia.
d) Se configura exclusivamente como órgano consultivo del Presidente del Ente Público.

215. La Dirección General de la organización central contará, para el desarrollo de sus funciones, con el apoyo de:

a) Dos Directores de División.
b) Cuatro Directores de División.
c) Un equipo directivo formado por tres Directores de División.
d) Un número indeterminado de Directores de División fijado libremente por el Consejo de Administración.

216. De acuerdo con los Estatutos Sociales del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, las organizaciones de servicios sanitarios del ente público podrán contar, además del Director-Gerente, con un equipo directivo integrado por:

a) Un máximo de cuatro cargos directivos.
b) Un máximo de cinco cargos directivos.
c) Un máximo de seis cargos directivos.
d) Un número indeterminado de cargos directivos fijado libremente por cada organización.

217. Conforme al Decreto de estructura orgánica y funcional del Departamento de Salud, corresponde al Consejero o Consejera:

a) Las autorizaciones de gasto del Departamento de cuantía superior a 300.000 euros, sin perjuicio de las competencias del Consejo de Gobierno.
b) Las autorizaciones de gasto del Departamento de cuantía superior a 500.000 euros, sin perjuicio de las competencias del Consejo de Gobierno.
c) Las autorizaciones de gasto del Departamento de cuantía superior a 350.000 euros, sin perjuicio de las competencias del Consejo de Gobierno.
d) Las autorizaciones de gasto del Departamento de cuantía superior a 400.000 euros, sin perjuicio de las competencias del Consejo de Gobierno.



218. En relación con las funciones del Departamento de Salud, señale la afirmación correcta:

a) Incluyen exclusivamente la asistencia sanitaria hospitalaria.
b) Comprenden la planificación y ordenación sanitaria, así como la salud pública y la ordenación farmacéutica.
c) Se limitan a la gestión de Osakidetza.
d) Comprenden únicamente la coordinación sociosanitaria.

219. El Departamento de Salud, para el ejercicio de sus competencias, se estructura en:

a) Órganos centrales únicamente.
b) Órganos centrales y organismos autónomos exclusivamente.
c) Órganos centrales y órganos periféricos.
d) Órganos centrales, órganos periféricos y entidades privadas.

220. El Consejo de Dirección del Departamento de Salud tiene como función principal:

a) Resolver recursos administrativos.
b) Asistir al Consejero o Consejera en la supervisión y seguimiento de la política del Departamento.
c) Aprobar el presupuesto del Departamento.
d) Ejercer la potestad sancionadora.

221. En relación con la composición del Consejo de Dirección, señale la afirmación correcta:

a) Está integrado exclusivamente por el Consejero o Consejera.
b) Está integrado únicamente por las Viceconsejerías.
c) Está integrado por el Consejero o Consejera, las Viceconsejerías y, entre otros, la Dirección General de Osakidetza.
d) Está integrado únicamente por órganos periféricos.

222. En relación con las competencias del Consejero o Consejera de Salud, señale la opción correcta:

a) No ejerce funciones de dirección sobre los entes públicos adscritos.
b) Ejerce funciones exclusivamente normativas.
c) Ejerce la dirección, coordinación y control de los entes públicos y organismos adscritos al Departamento.
d) Carece de competencias en materia de responsabilidad patrimonial.

223. Conforme al Decreto 319/2024, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Salud, corresponde a la persona titular de la Viceconsejería de Administración y Financiación Sanitarias:

a) Autorizar los gastos del Departamento en cualquier cuantía.
b) Autorizar los gastos del Departamento en los expedientes cuya cuantía alcance hasta 500.000 euros.
c) Autorizar únicamente los gastos de personal del Departamento.

d) Autorizar exclusivamente los gastos correspondientes a contratación sanitaria de ámbito autonómico.

224. En relación con las Viceconsejerías del Departamento de Salud, señale la afirmación correcta:

a) No tienen funciones propias definidas.
b) Ejercen funciones de coordinación, impulso y supervisión de las direcciones dependientes.
c) Se limitan a funciones consultivas.
d) No pueden suscribir acuerdos con entidades externas.

225. Las Direcciones del Departamento de Salud:

a) Carecen de competencias propias y actúan por delegación exclusiva.
b) Desarrollan políticas públicas mediante la implementación de planes y programas en su ámbito de actuación.
c) Solo ejercen funciones administrativas internas.
d) No tienen capacidad para resolver recursos.

226. Según el Decreto 147/2015, de 21 de julio, por el que se aprueba la Declaración sobre Derechos y Deberes de las personas en el sistema sanitario de Euskadi, la persona paciente o usuaria:

a) Debe dejar por escrito las decisiones cuando sea legalmente exigible o recomendable.
b) Debe dejar por escrito las decisiones cuando se lo soliciten los profesionales que le atiendan.
c) Debe dejar por escrito las decisiones cuando la política del centro sanitario así lo establezca.
d) Debe dejar por escrito las decisiones cuando puedan tener relevancia a efectos de responsabilidad legal.

227. Según el Decreto 147/2015, de 21 de julio, por el que se aprueba la Declaración sobre Derechos y Deberes de las personas en el sistema sanitario de Euskadi, la persona paciente o usuaria deberá de cumplir los siguientes deberes:

a) Facilitar, de forma veraz sus datos de identificación y los referentes a su estado físico o su salud, así como colaborar en su obtención, especialmente cuando sean necesarios para el episodio asistencial o por razones de interés público debidamente motivadas, siempre que quede avalado por una orden judicial.
b) Facilitar, de forma veraz sus datos de identificación y los referentes a su estado físico o su salud, así como colaborar en su obtención, especialmente cuando sean necesarios para el episodio asistencial o por razones de interés público debidamente motivadas, siempre se solicite por escrito.
c) Facilitar, de forma veraz sus datos de identificación y los referentes a su estado físico o su salud, así como colaborar en su obtención, especialmente cuando sean necesarios para el episodio asistencial o por razones de interés público debidamente motivadas, siempre que se informe por escrito de las garantías implementadas en relación con la protección de la información.



d) Facilitar, de forma veraz sus datos de identificación y los referentes a su estado físico o su salud, así como colaborar en su obtención, especialmente cuando sean necesarios para el episodio asistencial o por razones de interés público debidamente motivadas.

228. Según el Decreto 147/2015, de 21 de julio, por el que se aprueba la Declaración sobre Derechos y Deberes de las personas en el sistema sanitario de Euskadi, las reclamaciones contra actuaciones del personal:

a) Se resolverán atendiendo a las normas disciplinarias específicas previa apertura, en su caso, del expediente informativo correspondiente, sin perjuicio de las responsabilidades que de los hechos pudieran derivarse.
b) Se resolverán atendiendo a las normas disciplinarias generales previa apertura, en su caso, del expediente informativo correspondiente, sin perjuicio de las responsabilidades que de los hechos pudieran derivarse.
c) Se resolverán atendiendo a las normas disciplinarias específicas previa apertura, en su caso, del expediente informativo y de expediente de mediación, sin perjuicio de las responsabilidades que de los hechos pudieran derivarse.
d) Se resolverán atendiendo a las normas disciplinarias generales previa apertura, en su caso, del expediente informativo y de expediente de mediación, sin perjuicio de las responsabilidades que de los hechos pudieran derivarse.

229. A los efectos de la Declaración sobre Derechos y Deberes de las personas en el sistema sanitario de Euskadi, se configuran una serie de fases de la vida en la que se concreten necesidades específicas, entre las que NO aparece:

a) Las necesidades específicas de la infancia.
b) Las necesidades específicas de las minorías.
c) Las necesidades específicas del final de la vida.
d) Las necesidades específicas de la adolescencia.

230. Conforme determina el Decreto 147/2015, de 21 de julio, por el que se aprueba la declaración de Derechos y Deberes de las personas en el ámbito sanitario de Euskadi, es un derecho de la persona paciente o usuaria del sistema sanitario de Euskadi relacionado con la participación responsable en la gestión de la propia salud:

a) El derecho a que toda intervención terapéutica se realice con su consentimiento libre y voluntario, una vez recibida información veraz, comprensible y adecuada sobre su finalidad, naturaleza, consecuencias, riesgos y tratamientos existentes.
b) El derecho a negarse al tratamiento, aunque esto pudiera perjudicar su salud o conducirle a la muerte.
c) El derecho a la expresión anticipada de sus deseos sobre los cuidados y el tratamiento de su salud en un documento de voluntades anticipadas, para su cumplimiento en las situaciones en las que no sea capaz de expresarlos personalmente.
d) El derecho a conocer en todo momento a la persona profesional de la salud responsable de su diagnóstico, cuidado y tratamiento, así como su nombre, la titulación y la especialidad de las y los profesionales sanitarios que le atienden, y a distinguir fácilmente su estatus profesional.



231. Conforme determina el Decreto 147/2015, de 21 de julio, por el que se aprueba la declaración de Derechos y Deberes de las personas en el sistema sanitario de Euskadi, es un deber de la persona paciente o usuaria del sistema sanitario de Euskadi relacionado con la participación responsable en la gestión de la propia salud:

a) El deber de asumir las propias decisiones sobre su salud, responsabilizándose de las mismas, debiendo dejar por escrito las decisiones cuando sea legalmente exigible o recomendable (consentimiento informado, alta voluntaria, rechazo de tratamiento, etc.).
b) El deber de participar activa y responsablemente en la propia asistencia sanitaria específica de las distintas etapas de la vida.
c) El deber de facilitar, de forma veraz, sus datos de identificación y los referentes a su estado físico o salud, así como de colaborar en su obtención, especialmente cuando sean necesarios para el episodio asistencial.
d) El deber de utilizar adecuadamente, de acuerdo con sus necesidades, los recursos y prestaciones ofrecidas por el sistema sanitario de Euskadi.

232. Conforme determina el Decreto 147/2015, de 21 de julio, por el que se aprueba la Declaración de Derechos y Deberes de las personas en el sistema sanitario de Euskadi, en relación con los Servicios de Atención a las Personas Pacientes y Usuarias:

a) No es obligatorio que existan en los centros sanitarios concertados, sino que tal labor la realizarán los Servicios de que dispone el departamento competente en materia de sanidad.
b) Una de sus funciones es la de implantar y velar por el cumplimiento de las medidas establecidas por la dirección del centro para la prevención y atención de las agresiones a profesionales sanitarios y al resto de personal que trabaja en las estructuras sanitarias, y ello sin perjuicio de las competencias de los servicios de prevención en materia de prevención de riesgos laborales.
c) Únicamente registrarán las reclamaciones y solicitudes que se presenten ante ellos cuando el destinatario de las mismas sea el centro, servicio o establecimiento sanitario del que dependen.
d) Son los responsables de que se proceda a subsanar las irregularidades detectadas, dentro de las limitaciones legales y presupuestarias que regulen sus actuaciones.

233. El Decreto 147/2015, de 21 de julio, por el que se aprueba la Declaración de Derechos y Deberes de las personas en el sistema sanitario de Euskadi, establece que la hospitalización de adolescentes se realizará preferentemente en la planta de hospitalización pediátrica:

a) Hasta que cumplan 14 años.
b) Hasta que cumplan 12 años.
c) Según decida cada dirección de centro hospitalario.
d) Cuando tengan entre 14 y 16 años.

234. Entre los derechos específicamente reconocidos en el Decreto 147/2015, de 21 de julio, por el que se aprueba la Declaración de Derechos y Deberes de las personas en el sistema sanitario de Euskadi, en relación con la asistencia específica referida a la salud sexual y reproductiva NO consta:

a) El derecho a presentar en el centro sanitario sus preferencias sobre el parto.
b) El derecho a recibir formación en materia de lactancia materna con objeto de fomentar su utilización en la alimentación infantil.
c) El derecho a decidir la posición para la fase de dilatación.
d) El derecho a disponer de una atención sanitaria al recién nacido que tenga en cuenta el credo o religión de los progenitores.

235. De acuerdo con la Ley 7/2002, de 12 de diciembre, de las voluntades anticipadas en el ámbito de la sanidad, el documento de voluntades anticipadas NO podrá formalizarse ante:

a) Un secretario judicial.
b) Notario.
c) Tres testigos.
d) El funcionario o empleado público encargado del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas.

236. De acuerdo con el Decreto 270/2003, de 4 de noviembre, por el que se crea y regula el Registro Vasco de Voluntades Anticipadas, la revocación de un documento de voluntades anticipadas consiste en:

a) Alterar parcialmente el contenido de éste sin privarle de efectos.
b) Privar a éste de efectos otorgando uno nuevo en su lugar.
c) Privar a éste de efectos sin otorgar uno nuevo en su lugar.
d) Alterar completamente el contenido de éste sin privarle de efectos.

237. Con arreglo al Decreto 270/2003, de 4 de noviembre, por el que se crea y regula el Registro Vasco de Voluntades Anticipadas, si al encargado del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas le suscita dudas la capacidad de la persona otorgante:

a) Suspenderá el otorgamiento del documento hasta obtener una certificación del Registro Civil sobre la misma.
b) Suspenderá el otorgamiento del documento hasta obtener una certificación de la autoridad judicial sobre la misma.
b) Seguirá con el procedimiento y solicitará una certificación del Registro Civil sobre la misma.
d) Seguirá con el procedimiento y solicitará una certificación de la autoridad judicial sobre la misma.

238. De acuerdo con el Decreto 270/2003, de 4 de noviembre, por el que se crea y regula el Registro Vasco de Voluntades Anticipadas, éste deberá custodiar los documentos inscritos y solo podrá destruirlos:

a) Cuando hayan transcurrido 5 años desde el fallecimiento de la persona otorgante.
b) Cuando se trate de documentos sustituidos por otros nuevos, podrá destruirlos a partir de los seis meses posteriores a la inscripción de la sustitución.



c) Cuando se trate de documentos revocados, podrá destruirlos a partir de los cuatro meses posteriores a la inscripción de la revocación.
d) Cuando hayan transcurrido 6 años desde el fallecimiento de la persona otorgante.

239. Conforme determina la Ley 7/2002, de 12 de diciembre, de las voluntades anticipadas en el ámbito de la sanidad (indíquese la afirmación INCORRECTA):

a) Las instrucciones sobre el tratamiento pueden referirse tanto a una enfermedad o lesión que la persona otorgante ya padece como a las que eventualmente podría padecer en un futuro.
b) Se tendrán por no puestas las instrucciones que en el momento de ser aplicadas resulten contrarias al ordenamiento jurídico.
c) Mientras la persona otorgante conserve su capacidad, según lo dispuesto en el artículo 2.1 de esta ley, su libertad de actuación y la posibilidad de expresarse, su voluntad prevalece sobre las instrucciones contenidas en el documento de voluntades anticipadas ante cualquier intervención clínica.
d) Se tendrán en cuenta las instrucciones relativas a las intervenciones médicas que la persona otorgante desea recibir aun cuando resulten contraindicadas para su patología.

240. De acuerdo con la Ley 11/2016, de 8 de julio, de garantía de los derechos y de la dignidad de las personas en el proceso final de su vida, indíquese la respuesta CORRECTA:

a) Toda persona que se encuentre en el proceso del final de su vida tiene derecho a rechazar la intervención o tratamiento propuestos, siempre que ello no suponga un riesgo cierto e inminente para su vida.
b) El rechazo a la intervención o tratamiento propuestos podrá expresarse verbalmente o por escrito.
c) La negativa a recibir una intervención o tratamiento, o la decisión de interrumpirlos, no supondrá menoscabo alguno en la atención sanitaria de otro tipo que se le dispense.
d) El rechazo a la intervención o tratamiento propuestos se incorporará a la historia clínica. Si la persona enferma no puede firmarlo, lo suscribirán dos testigos en su lugar, a petición suya, debiendo recogerse en el historial clínico tanto la identificación de los testigos como el motivo por el que la persona autora no puede firmar.

241. De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 270/2003, de 4 de noviembre, en relación con el procedimiento de inscripción del otorgamiento de un documento de voluntades anticipadas, indíquese la respuesta INCORRECTA:

a) La resolución del encargado del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas sobre la inscripción del documento de voluntades anticipadas presentado ha de adoptarse y notificarse a la persona solicitante en el plazo de un mes.
b) Contra las resoluciones del encargado del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas se puede interponer recurso de alzada ante el Director de Estudios y Desarrollo Sanitario.
c) La falta de notificación dentro del plazo previsto de la resolución del encargado del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas a la persona solicitante de la inscripción tiene efectos desestimatorios.

d) La inscripción de un documento de voluntades anticipadas en el Registro Vasco de Voluntades Anticipadas se practica dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en el que se dicta la resolución estimatoria.

242. De acuerdo con la Ley 7/2002, de 12 de diciembre, de las voluntades anticipadas en el ámbito de la sanidad, indíquese cuál de las siguientes personas puede ser nombrada por el otorgante del documento de voluntades anticipadas como su representante para que sea interlocutor válido del médico o del equipo sanitario y pueda interpretar sus valores e instrucciones:

a) Los testigos ante los que se formalizó el documento.
b) El notario.
c) Cualquier persona mayor de edad no incapacitada legalmente para ello.
d) El funcionario o empleado público encargado del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas.

243. De acuerdo con la Ley 7/2002, de 12 de diciembre, de las voluntades anticipadas en el ámbito de la sanidad, indíquese cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA en relación con los testigos ante los que se puede formalizar el documento de voluntades anticipadas:

a) Deberán ser mayores de edad y con plena capacidad de obrar.
b) No tendrán ninguna relación patrimonial con el otorgante.
c) No estarán vinculados con el otorgante por matrimonio, unión libre o pareja de hecho.
d) No tendrán ninguna relación de parentesco con el otorgante, ni consanguínea ni por afinidad.

244. En relación con las retribuciones de los puestos funcionales, diga cuál de estas afirmaciones es falsa:

a) La estructura retributiva de los puestos funcionales está compuesta por retribuciones básicas y retribuciones complementarias.
b) Los importes de las retribuciones de los puestos funcionales se establecen por cada centro, previa negociación con la representación del personal.
c) El acceso a cada puesto funcional lleva aparejada la percepción de las retribuciones asignadas al mismo.
d) Los puestos funcionales vendrán identificados, entre otros aspectos, por los efectos retributivos asignados.

245. Conforme al Decreto 186/2005, el instrumento de clasificación de personal que se orienta específicamente a la organización, promoción y desarrollo integral del personal es:

a) El Grupo profesional.
b) La Categoría.
c) El Puesto funcional.
d) El Grupo de titulación.



246. De acuerdo con el artículo 4, ¿qué elemento no forma parte de los criterios de diferenciación de la "responsabilidad funcional" ?:

a) Responsabilidad jerárquica de organización de equipos.
b) Conocimientos especializados técnicos o prácticos.
c) Responsabilidad de gestión de recursos materiales.
d) Nivel de euskera asignado al puesto.

247. En base al Decreto 186/2025, el órgano competente para aprobar la plantilla funcional de cada organización de servicios es:

a) El Director o la Directora Gerente de la propia Organización de Servicios.
b) El Consejero o la Consejera de Sanidad.
c) El Consejo de Administración de Osakidetza.
d) El Consejo de Gobierno.

248. Si una modificación de la plantilla funcional implica una variación en la plantilla estructural de la organización:

a) Es necesaria la aprobación directa del Parlamento Vasco.
b) Puede ser aprobada únicamente por el Director o la Directora Gerente.
c) Requiere la aprobación del Consejo de Administración de Osakidetza.
d) Se aplica automáticamente tras la negociación colectiva.

249. En relación con el perfil lingüístico, la normativa que rige los criterios para su determinación inicial en los puestos funcionales es:

a) El Decreto 67/2003.
b) El Decreto 255/1997.
c) La Ley de la Función Pública Vasca.
d) La Ley 8/1997 de Ordenación Sanitaria.

250. ¿Cuál es la consecuencia retributiva para un titular cuyo puesto es adecuado de oficio y sufre una minoración en sus retribuciones fijas?

a) Un pago único compensatorio equivalente a una anualidad.
b) La asignación de un complemento personal y transitorio.
c) La pérdida definitiva de la diferencia retributiva.
d) La obligación de concursar en la siguiente convocatoria.

251. De acuerdo con la Disposición Adicional 6ª, puede incluir nuevas titulaciones habilitantes para un puesto funcional sin crear una nueva categoría:

a) El Parlamento Vasco por vía legislativa.
b) El Ministerio de Educación.
c) El Consejo de Administración de Osakidetza.
d) La Dirección de Recursos Humanos.



252. Conforme al Decreto 186/2005, el "grupo profesional" se define como:

a) Clasificación basada exclusivamente en el nivel de estudios.
b) División basada en los años de experiencia en el sector.
c) Conjunto de personas trabajadoras con el mismo destino geográfico.
d) Agrupamiento unitario de aptitudes profesionales y contenido específico de las tareas propias de la prestación.

253. De conformidad con el Decreto 235/2007, de 18 de diciembre (Acuerdo regulador de condiciones de trabajo en Osakidetza-Servicio Vasco de Salud 2007, 2008 y 2009), en materia de euskaldunización y alfabetización será de aplicación:

a) Lo dispuesto en el Decreto 67/2003 y en el III Plan de Euskera de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público de Euskadi.
c) Lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público de Euskadi y, subsidiariamente, en las instrucciones internas de cada Organización de Servicios.
d) Lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público de Euskadi y, subsidiariamente, y en el III Plan de Euskera de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

254. De conformidad con el Decreto 235/2007, de 18 de diciembre (Acuerdo regulador de condiciones de trabajo en Osakidetza-Servicio Vasco de Salud 2007, 2008 y 2009), el personal liberado para el estudio del euskera percibirá:

a) El 75% de las retribuciones fijas que por cartelera tenga asignadas.
b) El 100% de las retribuciones fijas y variables que por cartelera tenga asignadas.
c) El sueldo base y el complemento de destino.
d) El 100% de las retribuciones fijas, pero no de las variables.

255. De conformidad con el Decreto 235/2007, de 18 de diciembre (Acuerdo regulador de condiciones de trabajo en Osakidetza-Servicio Vasco de Salud 2007, 2008 y 2009), el personal en activo tendrá derecho a anticipos ordinarios sin interés:

a) Hasta el 50% del salario bruto mensual, más la parte proporcional devengada de paga extraordinaria.
b) Hasta dos mensualidades completas, incluido el prorrateo de las pagas extraordinarias.
c) Hasta el 100% del salario líquido mensual, más la parte proporcional devengada de paga extraordinaria.
d) Hasta tres mensualidades completas, incluido el prorrateo de las pagas extraordinarias.

256. De conformidad con el Decreto 235/2007, de 18 de diciembre (Acuerdo regulador de condiciones de trabajo en Osakidetza-Servicio Vasco de Salud 2007, 2008 y 2009), el importe máximo general de los adelantos de nómina a conceder será de:

a) 3.000 euros.
b) 4.500 euros.
c) 5.800 euros.
d) 9.700 euros.



257. De conformidad con el Decreto 235/2007, de 18 de diciembre (Acuerdo regulador de condiciones de trabajo en Osakidetza-Servicio Vasco de Salud 2007, 2008 y 2009), la indemnización por razón de servicio del personal incluido en su ámbito:

a) Se rige únicamente por un acuerdo interno de cada hospital.
b) Se regula por la normativa estatal de función pública exclusivamente.
c) Se ajusta a la regulación establecida por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
d) Carece de actualización automática.

258. De conformidad con el Decreto 235/2007, de 18 de diciembre (Acuerdo regulador de condiciones de trabajo en Osakidetza-Servicio Vasco de Salud 2007, 2008 y 2009),la solicitud de ayuda por estudios de perfeccionamiento profesional deberá presentarse con una antelación mínima de:

a) 5 días.
b) 10 días.
c) 30 días.
d) 15 días.

259. De conformidad con el Decreto 235/2007, de 18 de diciembre (Acuerdo regulador de condiciones de trabajo en Osakidetza-Servicio Vasco de Salud 2007, 2008 y 2009), al personal de la plantilla de cocina se le reconoce:

a) El derecho a dos comidas diarias, si permanecen de servicio, como mínimo, 12 horas diarias, con recuperación del tiempo dedicado a ellas.
b) El derecho a efectuar una comida, al mediodía o a la noche, con una interrupción máxima de media hora, que se recuperará.
c) El derecho a una ayuda económica sustitutoria cuando permanezcan de servicio a la hora de la comida.
d) El derecho a una pausa de una hora computable como trabajo efectivo.

260. De conformidad con el Decreto 235/2007, de 18 de diciembre (Acuerdo regulador de condiciones de trabajo en Osakidetza-Servicio Vasco de Salud 2007, 2008 y 2009), en materia de transporte:

a) Se garantiza el mantenimiento del transporte colectivo donde ya estuviera establecido.
b) Se suprime progresivamente el transporte colectivo.
c) Se crea transporte colectivo en todos los centros, sin excepción.
d) Su regulación queda diferida a cada comarca sanitaria sin criterio general.



261. De conformidad con el Decreto 235/2007, de 18 de diciembre (Acuerdo regulador de condiciones de trabajo en Osakidetza-Servicio Vasco de Salud 2007, 2008 y 2009), el fondo para otras atenciones sociales excluye:

a) Las causas de naturaleza excepcional.
b) Los tratamientos e intervenciones integrados en la asistencia médico-farmacéutica prestada por la Seguridad Social, por cualquier otro sistema público de previsión, o por las entidades privadas.
c) Los tratamientos e intervenciones integrados en la asistencia médico-farmacéutica prestada por la Seguridad Social o por otro sistema público de previsión.
d) La financiación anual del propio fondo

262. Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, ¿qué responsabilidad tienen las Administraciones públicas competentes en materia sanitaria respecto a los servicios de prevención?:

a) Supervisar la ejecución de las políticas de salud laboral, sin intervención en la evaluación y control de riesgos laborales.
b) Establecer medios adecuados para la evaluación y control de las actuaciones de carácter sanitario que se realicen en las empresas por los servicios de prevención, mediante pautas y protocolos de actuación.
c) Asegurar que las empresas cumplan con la normativa sanitaria general sin necesidad de evaluar ni controlar las medidas de salud laboral en detalle.
d) Realizar controles periódicos sobre los sistemas de gestión de riesgos laborales, pero sin involucrar a las empresas en la toma de decisiones.

263. Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, ¿qué puede hacer la Inspección de Trabajo y Seguridad Social si detecta un riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los/las trabajadores/as?

a) Ordenar la paralización inmediata de los trabajos.
b) Solicitar un informe a la empresa, e interponer una demanda ante la jurisdicción social.
c) Imponer inmediatamente una sanción económica que posteriormente deberá ser sancionada por la jurisdicción social.
d) Delegar la decisión en los Juzgados de lo Social.

264. De conformidad con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, ¿qué obligación tiene el/la empresario/a respecto a los equipos de trabajo y medios de protección?

a) El/la empresario/a debe proporcionar equipos de trabajo solo a los/las trabajadores/as encargados de tareas peligrosas.
b) El/la empresario/a debe garantizar que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo y garantizar la seguridad de los/las trabajadores/as al utilizarlos.
c) El/la empresario/a no tiene obligación de proporcionar equipos de trabajo, ya que eso depende de los/las trabajadores/as.
d) El/la empresario/a debe proporcionar equipos de trabajo adecuados pero no tiene obligación de adaptarlos a la seguridad de los/las trabajadores/as.



265. De conformidad con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, ¿cuál es la obligación del/la empresario/a en cuanto a la información, consulta y participación de los/las trabajadores/as?

a) El/la empresario/a debe permitir la participación de los/las trabajadores/as en cuestiones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, solo si existen accidentes laborales previos.
b) El/la empresario/a debe consultar a los/las trabajadores/as en cuestiones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, si estos están afiliados a los sindicatos más representativos o simplemente representativos.
c) El/la empresario/a debe consultar a los/las trabajadores/as y permitir su participación en cuestiones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo.
d) El/la empresario/a debe consultar a los/las trabajadores/as en cuestiones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, si estos están afiliados a los sindicatos más representativos.

266. De conformidad con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, ¿qué debe garantizar el/la empresario/a respecto a la formación de los/las trabajadores/as?

a) El/la empresario/a debe garantizar la formación teórica y práctica en el momento de la contratación; en el transcurso de la relación laboral deberá proporcionarla si lo pide el/la trabajador/a.
b) El/la empresario/a debe formar a los/las trabajadores/as si lo requieren los representantes de los trabajadores, órganos encargados de la vigilancia del cumplimiento de la normativa en salud laboral.
c) El/la empresario/a debe garantizar que cada trabajador reciba formación adecuada, tanto al inicio de su contratación como cuando se produzcan cambios en sus funciones o en los equipos de trabajo.
d) El/la empresario/a debe garantizar formación a los/las trabajadores/as en cargos de gestión, si lo requieren los representantes de los trabajadores, órganos encargados de la vigilancia del cumplimiento de la normativa en salud laboral.

267. Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, ¿qué obligación tiene el/la empresario/a en relación con la documentación sobre seguridad y salud laboral?

a) El/La empresario/a debe elaborar la documentación y mantenerla disponible para los órganos judiciales y las autoridades sanitarias.
b) El/La empresario/a debe elaborar la documentación y mantenerla disponible para la autoridad laboral y las autoridades sanitarias.
c) El/La empresario/a debe elaborar una evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, incluyendo controles periódicos.
d) El/La empresario/a debe notificar por escrito a la autoridad laboral los daños para la salud de los trabajadores causados por el trabajo.



268. De conformidad con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, sobre la protección de la maternidad, ¿qué debe hacer el/la empresario/a si la evaluación de riesgos revela un riesgo para la seguridad o la salud de una trabajadora embarazada o lactante?

a) Permitir que la trabajadora continúe con sus tareas, otorgándole más medidas de protección.
b) Trasladar a la trabajadora a un puesto de trabajo con menos responsabilidades, si así lo decide la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
c) Adaptar las condiciones o el tiempo de trabajo de la trabajadora y, si es necesario, prohibir el trabajo nocturno o a turnos.
d) Atender los requerimientos de la trabajadora embarazada o lactante, quien podrá ser asesorada por los representantes de los trabajadores encargados de la salud.

269. De conformidad con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, ¿qué debe hacer el Inspector de Trabajo y Seguridad Social cuando observa una infracción en la normativa sobre prevención de riesgos laborales?

a) El/La Inspector/a de Trabajo puede requerir al empresario para subsanar las deficiencias observadas, indicando un plazo para la subsanación y poniendo el requerimiento en conocimiento de los Delegados de Prevención.
b) El/La Inspector/a de Trabajo puede requerir al empresario para subsanar las deficiencias observadas, indicando un plazo para la subsanación y poniendo el requerimiento en conocimiento de la Delegación de Industria.
c) El/La Inspector/a de Trabajo puede solamente imponer una sanción económica, y le requerirá al/a la empresario/a para la subsanación de las deficiencias a través de la oficina judicial.
d) El/La Inspector/a de Trabajo debe solo realizar un informe de los hechos sin requerir ninguna acción del/la empresario/a, que, en su caso, será indicada por la oficina judicial.

270. Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, ¿qué puede hacer el Gobierno o los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas en caso de infracciones graves en materia de seguridad y salud laboral?

a) Acordar la suspensión de las actividades laborales o el cierre del centro de trabajo, garantizando el pago de salarios o indemnizaciones.
b) Imponer una sanción económica.
c) Delegar la decisión en los Juzgados de lo Social para determinar el cierre del centro.
d) Suspender las actividades laborales o el cierre del centro de trabajo, asumiendo la obligación de garantizar el pago de salarios o indemnizaciones.



271. De conformidad con el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, el Plan de prevención de riesgos laborales en la empresa:

a) Es un documento informativo elaborado únicamente por el servicio de prevención.
b) Es la herramienta mediante la cual se integra la actividad preventiva en el sistema general de gestión de la empresa y se establece su política preventiva.
c) Es un informe técnico destinado a la autoridad laboral.
d) Es un registro estadístico de accidentes laborales.

272. De conformidad con el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, el Plan de prevención de riesgos laborales debe:

a) Ser aprobado por la dirección de la empresa, asumido por toda su estructura organizativa y conocido por todas las personas trabajadoras.
b) Ser aprobado únicamente por los representantes de los trabajadores.
c) Ser elaborado por la autoridad laboral y comunicado a la empresa.
d) Ser conocido exclusivamente por los mandos intermedios.

273. De conformidad con el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del Plan de prevención de riesgos laborales son:

a) La auditoría preventiva y la formación de los trabajadores.
b) La investigación de accidentes y la vigilancia de la salud.
c) La evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva.
d) La inspección laboral y la negociación colectiva.

274. De conformidad con el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, la evaluación de los riesgos laborales es:

a) El procedimiento destinado a identificar todos los riesgos existentes en la empresa y eliminar aquellos que puedan afectar a las personas trabajadoras.
b) El proceso dirigido a estimar la magnitud de los riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que la parte empresarial decida sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas.
c) El método destinado a identificar y controlar los riesgos presentes en los centros de trabajo mediante medidas de protección colectiva.
d) El procedimiento técnico dirigido a detectar los riesgos laborales y establecer medidas correctoras obligatorias.



275. De conformidad con el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, la persona empresaria deberá consultar con los siguientes sujetos sobre el procedimiento de evaluación de riesgos a utilizar:

a) Los delegados de prevención.
b) Los representantes de los trabajadores o, en su ausencia, a las propias personas trabajadoras.
c) La autoridad laboral competente y las propias personas trabajadoras.
d) Los servicios de prevención externos contratados.

276. De conformidad con el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, los puestos de trabajo deberán volver a evaluarse, tras la evaluación inicial, cuando puedan verse afectados por:

a) Cambios en las condiciones de trabajo o incorporación de personas trabajadoras especialmente sensibles a las condiciones del puesto.
b) Cambios en el convenio colectivo o en la organización de la empresa.
c) Cambios en el horario laboral o en la jornada de trabajo.
d) Cambios en el salario o en las condiciones contractuales de las personas trabajadoras.

277. De conformidad con el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, la planificación de la actividad preventiva:

a) Incluirá los medios humanos necesarios y la asignación de los recursos económicos precisos para alcanzar los objetivos preventivos previstos en el convenio colectivo aplicable.
b) Incluirá los medios humanos y materiales necesarios, así como la asignación de los recursos económicos precisos para la consecución de los objetivos propuestos.
c) Incluirá los medios humanos y materiales necesarios y los recursos técnicos disponibles para la prevención.
d) Incluirá los medios materiales necesarios y los recursos económicos previstos por el Gobierno.

278. De conformidad con el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en el ámbito de las Administraciones públicas la organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas:

a) Se realizará conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento sin excepción.
b) Se realizará en los términos que se regulen en la normativa específica que se dicte al efecto.
c) Será determinada exclusivamente por cada Administración pública.
d) Se establecerá mediante acuerdo con los representantes de los trabajadores.

279. De conformidad con el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en las Administraciones públicas:

a) Serán de aplicación las auditorías previstas en el capítulo V del Reglamento.
b) Las auditorías serán obligatorias únicamente cuando lo determine la normativa específica.



c) No serán de aplicación las obligaciones en materia de auditorías contenidas en el capítulo V del Reglamento.
d) Las auditorías se realizarán cada cuatro años.

280. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo conoce:

a) Exclusivamente de los actos administrativos expresos.
b) De la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo.
c) Únicamente de los reglamentos administrativos.
d) Solo de los actos del Gobierno.

281. La jurisdicción contencioso-administrativa conocerá de:

a) Los conflictos de jurisdicción entre órganos administrativos.
b) El recurso contencioso-disciplinario militar.
c) La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas.
d) Las cuestiones penales derivadas de la actividad administrativa.

282. No corresponde al orden contencioso-administrativo:

a) El control de la potestad reglamentaria.
b) El control de la legalidad de la actuación administrativa.
c) Las cuestiones atribuidas a los órdenes civil, penal y social.
d) La responsabilidad patrimonial de la Administración.

283. Tienen legitimación activa en el orden contencioso-administrativo:

a) Solo las Administraciones públicas.
b) Las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo.
c) Únicamente quienes sean titulares de derechos subjetivos.
d) Exclusivamente el Ministerio Fiscal.

284. El recurso contencioso-administrativo es inadmisible:

a) Contra actos presuntos.
b) Contra disposiciones generales.
c) Contra actos firmes y consentidos no recurridos en plazo.
d) Contra la inactividad administrativa.

285. El plazo general para interponer recurso contencioso-administrativo contra un acto expreso es:

a) Un mes.
b) Tres meses.
c) Dos meses desde la notificación.
d) Seis meses desde la notificación.

286. En el procedimiento contencioso-administrativo, la demanda:

a) Debe limitarse a reproducir el recurso administrativo previo.
b) Puede fundarse en motivos no alegados en vía administrativa.
c) Solo puede basarse en infracciones formales.
d) Debe acompañarse siempre de informe pericial.



287. La sentencia contencioso-administrativa:

a) Solo puede declarar la nulidad del acto.
b) Puede reconocer una situación jurídica individualizada y restablecerla.
c) No puede condenar a la Administración a realizar actuaciones.
d) No puede fijar indemnizaciones.

288. Las medidas cautelares:

a) Solo pueden consistir en la suspensión del acto.
b) Solo pueden adoptarse al inicio del procedimiento.
c) Pueden adoptarse en cualquier estado del proceso para asegurar la efectividad de la sentencia.
d) No pueden afectar a intereses públicos.

289. La Ley de Enjuiciamiento Civil será aplicable:

a) En defecto de disposiciones en las leyes que regulan los procesos penales, contencioso-administrativos, laborales y militares
b) Sólo cuando expresamente así se establezca
c) Sólo cuando se traten de asuntos entre particulares sometidos a los tribunales de justicia
d) En los casos en que el objeto del litigio verse sobre una materia contemplada en dicha norma

290. Conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil podrán ser parte en los procesos ante los tribunales civiles:

a) Las personas jurídicas sólo cuando revistan la forma de sociedades mercantiles
b) Las entidades sin personalidad jurídica a las que la ley reconozca capacidad para ser parte.
c) Las personas físicas siempre que sean mayores de edad.
d) Solamente las personas jurídicas.

291. Conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil la comparecencia del procurador en juicio en representación de los litigantes no será necesaria y estos podrán comparecer por sí mismos:

a) Cuando así lo decida el juez atendiendo a las circunstancias especiales del caso.
b) Cuando así lo manifieste su abogado en la propia comparecencia.
c) En los juicios verbales cuya determinación se haya efectuado por razón de la cuantía y ésta no exceda de 2000 €.
d) Cuando se trate de un proceso en el que no sea necesario comparecer con abogado.

292. Según la Ley de Enjuiciamiento Civil mediante la declinatoria el demandado y los que puedan ser parte legítima en el juicio podrán denunciar la falta de jurisdicción del tribunal:

a) Debiéndose ejercitar dentro de los diez primeros días del plazo para contestar a la demanda.

b) Ante el mismo tribunal que esté conociendo del pleito, así como ante el tribunal que se considere el competente para resolver la controversia, lo que suspenderá de forma indefinida el plazo para contestar a la demanda hasta que responda el tribunal que sea supuestamente competente para resolver la cuestión.
c) Sin que el tribunal ante el que penda el asunto pueda practicar las actuaciones de aseguramiento de prueba ni las medidas cautelares solicitadas de cuya dilación pudieran seguirse perjuicios irreparables para el actor.
d) Teniendo siempre que otorgar caución por el ejercicio de dicha declinatoria.

293. De conformidad con la Ley de Enjuiciamiento Civil en todas las actuaciones judiciales, los jueces, magistrados, fiscales, letrados de la administración de justicia y demás funcionarios de juzgados y tribunales:

a) Usarán exclusivamente el castellano, lengua oficial del Estado
b) Podrán también usar la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma si ninguna de las partes se opusiera alegando desconocimiento de ello.
c) Podrán utilizar una lengua no oficial del Estado si todas las partes intervinientes en el proceso tuvieran un origen extranjero y no conocieran ninguno de los idiomas oficiales del Estado
d) Podrán interrogar a personas que no conocieran el castellano ni, en su caso, la lengua oficial, mediante intérpretes, actuación que deberá quedar reflejada en el acta, si bien solo tendrá validez jurídica cuando las partes en el procedimiento manifestaran de forma expresa su conformidad a dicha interpretación.

294. Según la Ley de Enjuiciamiento Civil cuando la ley no exprese la clase de resolución judicial que haya de emplearse, se dictará sentencia:

a) Para poner fin al proceso, en primera o segunda instancia una vez que haya concluido su tramitación ordinaria prevista en la ley.
b) Cuando la resolución se refiera a cuestiones procesales que requieran una decisión judicial por así establecerlo la ley.
c) Cuando se decidan recursos contra providencias o se resuelva sobre admisión de demanda, reconvención, acumulación de acciones, admisión de prueba, o aprobación judicial de transacciones.
d) Cuando la resolución verse sobre presupuestos procesales, inscripciones registrales y cuestiones incidentales.

295. De conformidad con la Ley de Enjuiciamiento Civil el pago de las costas y gastos del proceso:

a) Deberán abonarse siempre por la parte demandada en el caso de que haya sido estimada la pretensión del demandante.
b) Deberán sustanciarse siempre en un procedimiento específico al margen del proceso principal de reclamación.
c) Corresponderá abonarlo a la parte demandante si no hubiera visto reconocida su pretensión.
d) Deberán abonarlos cada parte a medida que se vayan produciendo salvo lo dispuesto en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y salvo cuando hubiera condena en costas.



296. De conformidad con la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, ¿qué prevé respecto de los daños derivados de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales?

a) Que solo puede demandarse a la persona empresaria.
b) Que solo cabe reclamar ante el orden civil.
c) Que puede ejercitarse acción contra la persona empresaria y también acción directa contra la aseguradora.
d) Que la acción corresponde a la Inspección de Trabajo.

297. De conformidad con la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, y en relación con las cuestiones prejudiciales penales ¿cuándo suspenden el plazo para adoptar la debida decisión?

a) Siempre que exista un procedimiento penal abierto cuyo litigio pueda afectar al caso social.
b) Solo cuando se basen en falsedad documental y su solución sea indispensable para dictar la resolución.
c) Únicamente cuando lo solicite la persona demandante.
d) En cualquier caso de denuncia penal relacionada con el litigio laboral.

298. De conformidad con la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, ¿cuándo conocen en única instancia las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia de los procesos de conflictos colectivos?

a) Cuando sus efectos se extiendan a toda España.
b) Cuando sus efectos no superen el ámbito de un municipio.
c) Cuando sus efectos superen el de un Juzgado de lo Social y no sean superiores al de la Comunidad Autónoma.
d) Nunca, porque en única instancia conoce la Audiencia Nacional.

299. De conformidad con la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, ¿qué pueden hacer los sindicatos en un litigio laboral?

a) Actuar en nombre e interés de las personas trabajadoras afiliadas que así se lo autoricen para defender derechos individuales.
b) Sustituir al Ministerio Fiscal, si así se lo autoriza el letrado/a.
c) Intervenir en nombre de las personas trabajadoras en los procesos de conflictos colectivos, y en el resto cuando así lo autoricen las personas trabajadoras.
d) Actuar en nombre de cualquier persona trabajadora, esté o no afiliada, que así se lo autorice para defender derechos individuales.

300. De conformidad con la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, ¿qué se establece sobre "el abogado, graduado social colegiado o procurador"?

a) En la instancia la defensa es facultativa; en suplicación basta con procurador, sin abogado ni graduado social; y en casación es preceptiva la defensa de abogado.

b) En la instancia la defensa es facultativa; en suplicación basta con procurador, sin abogado ni graduado social; y en casación es preceptiva la defensa de abogado.
c) En la instancia la defensa es facultativa; en suplicación se exige abogado o graduado social colegiado; y en casación es preceptiva la defensa de abogado.
d) En cualquier instancia, la persona puede decidir si actúa con profesional o no, siendo obligatoria la actuación del procurador.

301. De conformidad con la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, ¿qué procesos están exceptuados del intento de conciliación o mediación previas?

a) Los procesos sobre Seguridad Social, entre otros.
b) Solo los procesos de despido disciplinario.
c) Ninguno, porque siempre es obligatorio.
d) Solo los procesos con cuantía inferior a 2.000 euros.

302. De conformidad con la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, una vez agotada la vía administrativa previa, ¿de qué plazo dispone la persona interesada para formalizar la demanda?

a) Diez días.
b) Un mes.
c) Dos meses.
d) Seis meses.

303. Según la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, ¿quién ostenta la legitimación pasiva en el proceso de impugnación de actos administrativos en materia laboral y de Seguridad Social, excluidos los prestacionales?

a) Las personas destinatarias del acto impugnado.
b) Cualquier persona con interés legítimo en la anulación.
c) La Administración o Entidad pública autora del acto.
d) La persona letrada de la Administración de Justicia que admite la demanda.

304. De acuerdo con la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, ¿en qué circunstancias pueden los interesados solicitar la adopción de medidas cautelares en el proceso de impugnación de un acto administrativo?

a) Habrá que esperar a que la sentencia ya haya sido dictada.
b) En cualquier estado del proceso, si la ejecución del acto impugnado podría hacer perder su finalidad legítima a la demanda.
c) Solo si se trata de un procedimiento de impugnación de una sanción administrativa.
d) En cualquier estado del proceso, si la ejecución del acto impugnado pudiera vulnerar algún derecho fundamental.



305. Conforme a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial:

a) En el orden civil, no corresponde a la jurisdiccional militar la prevención de los juicios de testamentaría de los miembros de las Fuerzas Armadas que en situación de conflicto armado fallecieren.
b) Las juezas y los jueces, así como los tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán además de las materias que le son propias, de todas aquellas que no estén atribuidas a otro orden jurisdiccional.
c) Las juezas y los jueces, así como los tribunales del orden civil conocerán además de las materias que le son propias, de todas aquellas que no estén atribuidas a otro orden jurisdiccional.
d) Las juezas y los jueces del orden jurisdiccional penal tendrán atribuido el conocimiento de todas las causas y juicios criminales.

306. Conforme a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial:

a) Toda persona podrá ejercer la acción popular, en los casos y formas establecidos en la ley.
b) Todo ciudadano y toda ciudadana podrá ejercer la acción popular, en los casos y formas establecidos en la ley.
c) Los ciudadanos y las ciudadanas de nacionalidad española podrán ejercer la acción popular, en los casos y formas establecidos en la ley.
d) La acción popular la ejercen en exclusiva las personas jurídicas.

307. Conforme a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial:

a) Cuando se suscite un conflicto de competencia, la o el juez o el tribunal, oídas las partes y el Ministerio Fiscal por plazo común de 5 días, decidirá por medio de auto si procede declinar el conocimiento del asunto o requerir al órgano jurisdiccional que esté conociendo.
b) Cuando se suscite un conflicto de competencia, la o el juez o el tribunal, oídas las partes y el Ministerio Fiscal por plazo común de 7 días, decidirá por medio de auto si procede declinar el conocimiento del asunto o requerir al órgano jurisdiccional que esté conociendo.
c) Cuando se suscite un conflicto de competencia, la o el juez o el tribunal, oídas las partes y el Ministerio Fiscal por plazo común de 3 días, decidirá por medio de auto si procede declinar el conocimiento del asunto o requerir al órgano jurisdiccional que esté conociendo.
d) Cuando se suscite un conflicto de competencia, la o el juez o el tribunal, oídas las partes y el Ministerio Fiscal por plazo común de 10 días, decidirá por medio de auto si procede declinar el conocimiento del asunto o requerir al órgano jurisdiccional que esté conociendo.

308. Conforme a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial, las Letradas y los Letrados que fueran seleccionados para prestar servicio en el Gabinete Técnico en el Tribunal Supremo, serán nombrados y nombradas:

a) Por un año.
b) Por dos años.
c) Por tres años.

d) Por cuatro años.

309. Conforme a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial, las Secciones del Tribunal de Instancia contarán con una Presidencia de Sección, si entre los requisitos que han de darse, se da el de que en la Sección de que se trate:

a) Existan 8 o más plazas judiciales.
b) Existan 6 o más plazas judiciales.
c) Existan 10 o más plazas judiciales.
d) Existan 5 o más plazas judiciales.

310. Conforme a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial, las Juezas y los Jueces de Paz y sus sustitutos:

a) Serán nombrados por un período de 2 años por parte de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente.
b) Serán nombrados por un período de 5 años por parte de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente.
c) Serán nombrados por un período de 4 años por parte de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente.
d) Serán nombrados por un período de 3 años por parte de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente.

311. Conforme a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial:

a) Los plazos procesales se computarán con arreglo a lo dispuesto en el Código Civil.
b) En todas las causas serán inhábiles los días del mes de Agosto.
c) Son horas hábiles desde las 9 de la mañana a las 8 de la tarde, salvo que la ley disponga lo contrario.
d) El Ministerio de Justicia, mediante Reglamento, podrá habilitar días inhábiles a efectos de actuaciones judiciales en aquellos casos no previstos por las leyes.

312. Conforme a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial, el plazo para plantear un incidente de nulidad de actuaciones fundado en la vulneración de un determinado derecho fundamental:

a) Será de 20 días desde la notificación de la resolución.
b) Será de 10 días desde la notificación de la resolución.
c) Será de 5 días desde la notificación de la resolución.
d) Será de 1 mes desde la notificación de la resolución.

313. Conforme a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial:

a) Agosto es inhábil para todas las actuaciones judiciales sin excepción, por lo que no puede acordarse ninguna actuación civil.
b) Agosto es inhábil con carácter general, salvo para las actuaciones que las leyes procesales declaren urgentes.
c) Agosto es siempre hábil cuando se trata de conservar pruebas clínicas, porque toda actuación sanitaria tiene la consideración de penal.



d) Cada cinco años el Consejo General del Poder Judicial determinar cuándo Agosto es hábil o inhábil.

314. Conforme determina la Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación biomédica, el Comité de Bioética de España:

a) Está adscrito al Ministerio de Sanidad.
b) Está adscrito al Consejo Interterritorial de Sanidad.
c) Está adscrito al Ministerio de Justicia.
d) Está adscrito a Presidencia del Gobierno.

315. Conforme determina la Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación biomédica, la titularidad de los Biobancos que se constituyan con fines de investigación:

a) Corresponderá siempre a una persona jurídica
b) Siempre tendrá naturaleza pública.
c) Será comunicada a la autoridad competente, en caso de cambio, para que otorgue, en su caso, una nueva autorización.
d) Será comunicada a la autoridad competente, en caso de cambio, a efectos informativos.

316. Conforme determina la Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación biomédica, el Comité de Bioética de España estará constituido por un número máximo de:

a) Doce miembros.
b) Dos miembros.
c) Veinte miembros.
d) Treinta miembros.

317. Conforme determina la Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación biomédica un Biobanco:

a) Contará con un director científico, un responsable del fichero y estará adscrito a sendos comités externos, uno científico y otro de ética.
b) Contará con un director científico, un responsable del fichero y estará adscrito a un comité externo ético-científico.
c) Contará con un director científico, un director general, un responsable del fichero y estará adscrito a sendos comités externos, uno científico y otro de ética.
d) Contará con un director científico, un responsable del fichero y estará adscrito al Comité de Ética de Investigación del centro.

318. Conforme determina la Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación Biomédica, la donación de muestras biológicas con finalidad de investigación:

a) Será gratuita, no cabe ninguna compensación al donante e implica la renuncia a derechos de naturaleza económica sobre los resultados que pudieran derivarse de las investigaciones que se lleven a cabo con las muestras biológicas.
b) Será gratuita, y no caben compensaciones al donante, pero no implica la renuncia a derechos de naturaleza económica sobre los resultados que pudieran derivarse de las investigaciones que se lleven a cabo con las muestras biológicas.



c) Será gratuita, sin perjuicio de las compensaciones que puedan corresponder al donante, e implica la renuncia a derechos de naturaleza económica sobre los resultados que pudieran derivarse de las investigaciones que se lleven a cabo con las muestras biológicas.
d) Será gratuita, sin perjuicio de las compensaciones que puedan corresponder al donante, pero no implica la renuncia a derechos de naturaleza económica sobre los resultados que pudieran derivarse de las investigaciones que se lleven a cabo con las muestras biológicas.

319. Conforme determina la Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación biomédica, los Comités de Ética de la Investigación:

a) No requieren acreditación específica, si bien su creación debe ser notificada a efectos administrativos al órgano competente de la Comunidad Autónoma o de la Administración General del Estado, según los casos.
b) Deberán ser acreditados por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, pero en el caso de centros dependientes de la Administración General del Estado, por el órgano competente de la misma.
c) Deberán ser acreditados por el órgano competente de la Administración General del Estado.
d) Deberán ser acreditados por el Ministerio de Sanidad en todo caso.

320. Conforme determina la Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación biomédica, la constitución de preembriones exclusivamente con fines de investigación:

a) Está permitida solo si se emite autorización por la Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos.
b) Está permitida solo si se emite autorización por la Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos y por la autoridad autonómica competente.
c) Está permitida solo si se emite autorización por la Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos, por la autoridad autonómica competente y por el Comité de Ética de la Investigación del centro.
d) Está prohibida.

321. Conforme determina la ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación biomédica, es una infracción muy grave:

a) El incumplimiento de la gratuidad de la donación de preembriones, embriones y fetos, en los términos establecidos en la Ley.
b) El incumplimiento de las normas y garantías establecidas para el traslado de células y tejidos de origen embrionario humano entre países.
c) Mantener el desarrollo in vitro de los preembriones más allá del límite de 14 días siguientes a la fecundación del ovocito, descontando de ese tiempo el que pudieran haber estado crioconservados.
d) La Ley no recoge infracciones muy graves porque se consideran ilícitos penales.

322. Conforme determina la ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación biomédica, las investigaciones que implican procedimientos invasivos en seres humanos:

a) Solo se podrán llevar a cabo si existe consentimiento expreso, específico y escrito de la persona sujeto de la investigación, o de su representante legal.
b) Solo se podrán llevar a cabo si existe consentimiento expreso, específico y escrito de la persona sujeto de la investigación, o de su representante legal, salvo que un Comité de Ética de la Investigación aprecie una excepción en un caso concreto.
c) Solo se podrán llevar a cabo si existe consentimiento expreso, específico y escrito de la persona sujeto de la investigación, o de su representante legal, salvo que vaya a reportar un beneficio directo sobre su salud.
d) Solo se podrán llevar a cabo si existe consentimiento expreso, específico y escrito de la persona sujeto de la investigación.

323. Conforme a la Ley 16/2023, de 21 de Diciembre, de la Autoridad Vasca de Protección de Datos, NO será de aplicación a los tratamientos de datos personales de los que sean responsables:

a) La Mondragon Unibertsitatea.
b) La Universidad del País Vasco.
c) El Ararteko.
d) La Universidad Nacional de Educación a Distancia-UNED.

324. Conforme a la Ley 16/2023, de 21 de Diciembre, de la Autoridad Vasca de Protección de datos:

a) La representación de la Autoridad Vasca de Protección de Datos estará a cargo de sus propios servicios jurídicos.
b) La Autoridad Vasca de Protección de Datos se relaciona con el Gobierno Vasco a través del Departamento que determina la Ley de creación de la propia autoridad.
c) La Autoridad Vasca de Protección de Datos aprobará con carácter anual el correspondiente anteproyecto de presupuesto.
d) La Autoridad Vasca de Protección de Datos depende de Lehendakaritza.

325. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales, en su artículo 9 NO considera categorías especiales de datos aquellos que permitan respecto al afectado identificar:

a) Su ideología y afiliación sindical.
b) Su religión y orientación sexual.
c) Sus creencias u origen racial o étnico.
d) Su formación académica.

326. Con relación al tratamiento de datos con fines de videovigilancia señale la respuesta correcta:

a) Solo las personas físicas podrán llevar a cabo el tratamiento de imágenes a través de sistemas de cámaras o videocámaras con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes, así como sus instalaciones.
b) Los datos serán suprimidos, en todo caso, en el plazo máximo de un mes desde su captación.

c) Los datos serán suprimidos en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones.
d) En el caso de que los datos hubieran de ser conservados más allá del plazo de un mes desde su captación para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones, deberán ser puestas a disposición de la autoridad competente en un placo máximo de cuarenta y ocho horas desde que se tuviera conocimiento de la existencia de la grabación.

327. Respecto al procedimiento de nombramiento de la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos, señale la respuesta correcta:

a) Será nombrada por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, y estará auxiliada por dos Adjuntos.
b) Su nombramiento debe ser ratificado por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados por mayoría absoluta de sus miembros en primera votación.
c) Su nombramiento debe ser ratificado por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados por mayoría de tres quintos de sus miembros en primera votación.
d) Será nombrada por el Parlamento mediante Ley.

328. Conforme determina la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, cuando los datos personales sean obtenidos del afectado, el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitándole al afectado, al menos, la siguiente información básica:

a) La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso; la finalidad del tratamiento; y la posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679.
b) La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso; la finalidad del tratamiento; y las categorías de datos objeto de tratamiento.
c) La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso; la finalidad del tratamiento; la posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679; y las fuentes de las que procedieran los datos.
d) La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso; la finalidad del tratamiento; y las fuentes de las que procedieran los datos.

329. Conforme determina la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales:

a) La Agencia Española de Protección de Datos es una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal con personalidad jurídica y plena capacidad pública, que actúa con plena independencia en el ejercicio de sus funciones.
b) La Agencia Española de Protección de Datos se rige por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y sus disposiciones de desarrollo.
c) El Gobierno aprobará el Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos.
d) La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos y su Adjunto serán nombrados por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, entre personas de reconocida competencia, en particular, en materia de protección de datos.



330. Conforme determina la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales señale cuál de las siguientes infracciones NO son consideradas muy graves:

a) El tratamiento de los datos personales vulnerando los principios y garantías establecidos en el artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/679.
b) El tratamiento de datos personales de un menor de edad sin recabar su consentimiento, cuando tenga capacidad para ello, o el del titular de su patria potestad o tutela, conforme al artículo 8 del Reglamento (UE) 2016/679.
c) El tratamiento de datos personales relacionados con infracciones y sanciones administrativas fuera de los supuestos permitidos por el artículo 27 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
d) La vulneración del deber de confidencialidad establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

331. Conforme determina la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento:

a) Cuando sea mayor de 16 años.
b) Cuando sea mayor de 14 años.
c) Cuando su madurez así lo permita.
d) Cuando sea mayor de 12 años.

332. Conforme a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, si la información solicitada a la Administración por cualquier persona incluyese datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o contuviera datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor:

a) El acceso solo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una norma con rango reglamentario.
b) El acceso solo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso de la Administración, o si aquel estuviera amparado por una norma con rango de Ley.
c) El acceso solo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento tácito del afectado o si aquel estuviera amparado por una norma con rango reglamentario.
d) El acceso solo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una norma con rango de ley.

333. Conforme a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno:

a) La ausencia de motivación del solicitante de información será por sí sola causa de rechazo de la solicitud.
b) El solicitante está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información.



c) El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información.
d) Los motivos esgrimidos por el solicitante de información no podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución.

334. La Ley 19/2013 tiene por objeto:

a) Regular exclusivamente el derecho de acceso a la información pública.
b) Regular la organización administrativa de las Administraciones Públicas.
c) Ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular el derecho de acceso y establecer obligaciones de buen gobierno.
d) Establecer únicamente el régimen sancionador de los altos cargos.

335. El derecho de acceso a la información pública:

a) Solo puede ejercerse por ciudadanos españoles.
b) Debe justificarse en todo caso.
c) Corresponde a todas las personas.
d) Solo puede ejercerse en procedimientos administrativos concluidos.

336. Se entiende por información pública:

a) Exclusivamente la contenida en expedientes administrativos finalizados.
b) Los documentos elaborados por los órganos judiciales.
c) Los contenidos o documentos que obren en poder de sujetos obligados y hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
d) Solo la información publicada en el Portal de Transparencia.

337. El derecho de acceso podrá ser limitado cuando suponga un perjuicio para:

a) Cualquier interés privado.
b) La seguridad nacional, entre otros supuestos.
c) La organización interna de la Administración sin más justificación.
d) El funcionamiento ordinario de los servicios públicos.

338. El plazo máximo para resolver una solicitud de acceso a la información pública es:

a) Quince días.
b) Dos meses improrrogables.
c) Un mes, ampliable por otro mes en determinados supuestos.
d) Tres meses en todo caso.

339. De conformidad con la normativa del Código Civil las medidas de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su actividad jurídica:

a) Tendrán por finalidad permitir el desarrollo pleno de su personalidad y su desenvolvimiento jurídico en condiciones de igualdad.
b) Solo se prestarán a las personas mayores de edad que no lo hayan requerido.
c) Tienen por objeto atribuir solo de forma ocasional capacidad jurídica a las personas con discapacidad
d) No deberán ajustarse a los principios de necesidad y proporcionalidad.



340. Las medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica previstas en el Código Civil consistirán en:

a) Proporcionar protección que se deriven de una relación contractual suscrita entre el representante y el representado en la que se define el ámbito jurídico-obligacional de relación entre ambos sujetos.
b) Asistir a la persona con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica en los ámbitos en los que sea preciso.
c) Apoyar a la persona con discapacidad, a la que deberán acompañarse necesariamente las salvaguardas necesarias para garantizar en todo momento el respeto a la voluntad de la persona en cuestión.
d) Podrán permitir que quien desempeñe la medida de apoyo pueda adquirir por título oneroso de bienes de la persona que precisa el apoyo.

341. Conforme al Código Civil cuando se prevea razonablemente en los dos años anteriores a la mayoría de edad que un menor sujeto a patria potestad o tutela, una vez alcanzada, pueda precisar de apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica:

a) La autoridad administrativa competente podrá acordar, a petición del menor, o de los progenitores la procedencia de la adopción de medida de apoyo que corresponda.
b) La autoridad judicial podrá acordar, a petición del menor, de los progenitores, del tutor o del Ministerio Fiscal, la procedencia de la adopción de la medida de apoyo que corresponda para cuando concluya la minoría de edad.
c) Los propios progenitores serán los únicos que podrán requerir a la administración que sea competente a que proceda a la adopción de la medida de apoyo que corresponda.
d) La autoridad judicial deberá proceder de oficio a adoptar la medida de apoyo que corresponda.

342. Según el Código Civil, la guarda de hecho se extingue:

a) Cuando la persona a quien se preste apoyo solicite que éste se organice de otro modo
b) Cuando la autoridad administrativa, a solicitud del Ministerio Fiscal, así lo considere conveniente.
c) Cuando el guardador haya sido inhabilitado en un procedimiento concursal.
d) Cuando la persona a quien se preste apoyo haya sido inhabilitada en un procedimiento concursal.

343. De conformidad con el Código Civil la curatela:

a) La constituye la autoridad judicial mediante resolución motivada cuando no exista otra medida de apoyo suficiente para la persona con discapacidad.
b) Es una medida informal de apoyo que puede existir cuando no haya medidas voluntarias o judiciales que se estén aplicando eficazmente.
c) Es una medida formal de apoyo que procederá cuando la necesidad de apoyo se precise de forma ocasional, aunque sea recurrente.
d) Es una medida que adopta la administración cuando se pretende proteger a una persona con discapacidad.



344. De conformidad con el Código Civil la autocuratela:

a) Se produce cuando una persona mayor de edad o menor emancipada, en previsión de la concurrencia de circunstancias que puedan dificultarle el ejercicio de su capacidad propone a la administración competente que designe con antelación una persona para el ejercicio de la función de curador.
b) Puede tener lugar cuando una persona mayor de edad o menor emancipada, en previsión de la concurrencia de circunstancias que puedan dificultarle el ejercicio de su capacidad propone en escritura pública el nombramiento de una persona para el ejercicio de la función de curador.
c) Se produce cuando una persona mayor de edad o menor emancipada, en previsión de la concurrencia de circunstancias que puedan dificultarle el ejercicio de su capacidad propone a la autoridad judicial competente que designe con antelación una persona para el ejercicio de la función de curador
d) Tiene lugar cuando la persona mayor de edad o menor emancipada se nombra a sí mismo curador.

345. Según el Código Civil no podrán ser curadores:

a) Las fundaciones y demás personas jurídicas sin ánimo de lucro.
b) Quienes lo hayan sido ya con anterioridad.
c) Quienes por resolución judicial estuvieran privados o suspendidos en el ejercicio de la patria potestad o, total o parcialmente, de los derechos de guarda y protección
d) Las personas mayores de edad que no reúnan el requisito de la honorabilidad.

346. De conformidad con la normativa del Código Civil la curatela se extingue:

a) Por la muerte o declaración de fallecimiento de la persona con medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad
b) Por resolución administrativa cuando ya no sea precisa esta medida de apoyo.
c) Por voluntad de la propia persona con medidas de apoyo.
d) Por la muerte o declaración de fallecimiento de la persona que presta la medida de apoyo.

347. El nombramiento del defensor judicial de las personas con discapacidad tiene lugar, de conformidad con el Código Civil:

a) Cuando la autoridad administrativa lo considere necesario.
b) Cuando, por cualquier causa, quien haya de prestar apoyo no pueda hacerlo, hasta que cese la causa determinante o se designe a otra persona.
c) Cuando exista conflicto de intereses entre la persona con discapacidad y la persona que tiene que designar al curador.
d) Cuando el apoyo se haya encomendado a más de una persona.



348. De conformidad con la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, las resoluciones definitivas extranjeras de jurisdicción voluntaria emanadas de un órgano judicial podrán ser inscritas en los registros públicos españoles:

a) Previa superación del trámite de exequatur o de reconocimiento incidental en España
b) Cuando el Ministerio Fiscal así lo decida
c) Cuando se haya incoado el expediente con dos años de antelación al momento de la inscripción.
d) Cuando así lo decida la autoridad administrativa española competente.

349. De conformidad con la Ley de la Jurisdicción Voluntaria los actos de jurisdicción voluntaria acordados por las autoridades extranjeras que sean firmes:

a) Surtirán efectos una vez transcurridos seis meses desde su inscripción en el registro público español correspondiente.
b) Surtirán efectos y accederán a los registros públicos españoles previa superación de su reconocimiento conforme a lo dispuesto en la legislación vigente
c) Surtirán efectos solo cuando hayan sido reconocidos por el órgano judicial español competente.
d) Surtirán efectos solo cuando hayan sido reconocidos por la autoridad administrativa competente.

350. Según la Ley de Jurisdicción Voluntaria, el reconocimiento en España de los actos de jurisdicción voluntaria acordados por las autoridades extranjeras se denegará:

a) Cuando el acto produjera efectos no previstos en el ordenamiento español.
b) Cuando el acto hubiera sido acordado por un país no perteneciente a la Unión Europea.
c) Cuando el acto hubiera sido acordado por una autoridad extranjera manifiestamente incompetente
d) Cuando el acto acordado por la autoridad extranjera no se hubiera firmado ante notario o fedatario público.

351. Los expedientes de jurisdicción voluntaria se iniciarán, de conformidad con la Ley de Jurisdicción Voluntaria:

a) De oficio, a instancia del Ministerio Fiscal o por solicitud formulada por persona legitimada en la que se indicarán los datos y circunstancias de identificación del solicitante
b) Solamente cuando lo solicite la persona legitimada.
c) Solamente cuando lo solicite el Ministerio Fiscal
d) Solamente cuando lo solicite el Ministerio Fiscal y la persona legitimada.

352. Admitida la solicitud, el Letrado de la Administración de Justicia en el expediente de jurisdicción voluntaria:

a) Citará a una comparecencia solo cuando el juez o el letrado de la administración de justicia la consideren necesaria para la mejor resolución del expediente.



b) Citará a una comparecencia solo cuando hubieran de practicarse pruebas ante el juez o el Letrado de la Administración de Justicia.
c) Citará a una comparecencia a quienes hayan de intervenir en el expediente siempre que debieran ser oídos en el expediente interesados distintos del solicitante
d) Citará a una comparecencia a los interesados que no podrán formular oposición a la misma.

353. De conformidad con la Ley de Jurisdicción Voluntaria, el expediente de jurisdicción voluntaria se resolverá cuando afecte a los intereses de un menor o persona con discapacidad con medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica:

a) Mediante sentencia en el plazo de cinco días a contar desde la terminación de la comparecencia.
b) Con base en cualesquiera hechos de los que se hubiere tenido conocimiento como consecuencia de las alegaciones de los interesados, las pruebas o la celebración de la comparecencia, aunque no hubieran sido invocados por el solicitante ni por otros interesados.
c) Con base en los hechos de los que se hubiere tenido conocimiento en la comparecencia siempre que hubieran sido invocados por el propio solicitante.
d) Por el Ministerio Fiscal.

354. De conformidad con la Ley de Jurisdicción Voluntaria, cuando sea pertinente la provisión de alguna medida judicial de apoyo de carácter estable a una persona con discapacidad:

a) La podrá promover a través del correspondiente expediente el Ministerio Fiscal, la propia persona con discapacidad, su cónyuge o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, y sus descendientes, ascendientes o hermanos
b) La podrá promover el Ministerio Fiscal pero nunca la propia persona con discapacidad que no podrá actuar tampoco en su propia defensa y representación.
c) La podrá promover el Letrado de la Administración de Justicia cuando advierta que la propia persona con discapacidad no es capaz de promoverla y el Ministerio Fiscal no lo considera necesario.
d) La podrá promover cualquier persona que conozca los hechos que puedan ser determinantes de una situación que requiera la adopción judicial de medidas de apoyo.

355. Para conocer de los expedientes de tutela, curatela y guarda de derecho, según la Ley de Jurisdicción Voluntaria:

a) Será competente la autoridad administrativa del domicilio o residencia del menor o, en su caso, de la persona con discapacidad.
b) Será competente el juzgado de primera instancia del domicilio o, en su defecto, de la residencia del menor o, en su caso, de la persona con discapacidad
c) Será competente el juzgado de lo contencioso administrativo del menor o, en su caso, de la persona con discapacidad.
d) La persona con discapacidad no podrá actuar con su propia defensa y representación.



356. La excusa del ejercicio del cargo de tutelar o de la curatela, de conformidad con la Ley de Jurisdicción Voluntaria:

a) Podrá alegarse si concurriera alguna de las causas del Código Civil para este tipo de circunstancias
b) Podrá acordarse de oficio, a solicitud del Ministerio Fiscal, del tutelado, del sujeto a curatela o de otra persona interesada.
c) Una vez ejercida conllevará automáticamente el nombramiento de un defensor que le sustituya.
d) Solamente puede alegarse en el momento inicial en el que se le otorgue dicho cargo.

357. Conforme a la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales del País Vasco señale cuál de las siguientes prestaciones no se consideran prestaciones técnicas propias del Sistema Vasco de Servicios Sociales:

a) Atención sociojurídica.
b) Prestaciones individuales para la adquisición de prestaciones tecnológicas para facilitar el acceso a ayudas técnicas no recuperables o la realización de adaptaciones en el medio habitual de convivencia.
c) Atención personal.
d) Diagnóstico.

358. Conforme a la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales del País Vasco, la provisión y prestación de los servicios sociales de atención primaria corresponde:

a) En todos los casos a los servicios sociales municipales.
b) A los servicios sociales forales.
c) A los servicios sociales de ámbito autonómico.
d) A los servicios sociales municipales, con la salvedad del servicio de teleasistencia, que recaerá en el Gobierno Vasco.

359. Conforme determina la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales del País Vasco, la participación de la iniciativa privada en la prestación de servicios del Catálogo de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales se podrá organizar a través de las siguientes fórmulas:

a) Gestión directa.
b) Gestión indirecta en el marco de la normativa de contratación de las administraciones públicas.
c) Convenios con entidades sin ánimo de lucro.
d) Todas las respuestas con correctas.



360. Conforme determina la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de servicios sociales, son también titulares del derecho a los servicios y prestaciones del sistema vasco de servicios sociales, además de las personas con residencia legal y efectiva en cualquiera de los municipios de la comunidad autónoma del país vasco, las personas que acrediten haber estado empadronadas y haber tenido la residencia efectiva en cualquier municipio de la comunidad autónoma del país vasco:

a) Durante 3 meses continuados inmediatamente anteriores a su solicitud de acceso a dicho sistema.
b) Durante 6 meses continuados inmediatamente anteriores a su solicitud de acceso a dicho sistema.
c) Durante 12 meses continuados inmediatamente anteriores a su solicitud de acceso a dicho sistema.
d) Durante 9 meses continuados inmediatamente anteriores a su solicitud de acceso a dicho sistema.

361. Conforme determina la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, el Sistema Vasco de Servicios Sociales comprenderá, como mínimo, los siguientes tipos de prestaciones:

a) Prestaciones técnicas y prestaciones económicas.
b) Prestaciones económicas y prestaciones tecnológicas.
c) Prestaciones económicas.
d) Prestaciones técnicas, prestaciones económicas y prestaciones tecnológicas.

362. Según la Ley 12/2008, el mapa de servicios sociales:

a) Tiene por objeto establecer el régimen sancionador del sistema, tipificando infracciones y determinando las sanciones aplicables.
b) Es el instrumento de planificación que ordena territorialmente los servicios sociales y define la estructura territorial del sistema.
c) Regula exclusivamente la financiación de los servicios sociales en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
d) Determina únicamente las competencias de las diputaciones forales en materia de servicios sociales.

363. En el marco del procedimiento básico de intervención del artículo 19 de la Ley 12/2008, ¿quién asume inicialmente la responsabilidad de la coordinación del caso?

a) Un educador o educadora social de atención secundaria.
b) El personal técnico de la Diputación Foral correspondiente.
c) Un trabajador o trabajadora social del Servicio Social de Base.
d) El Director o Directora del centro residencial asignado.

364. Conforme a la Ley 12/2008, la participación económica de las personas usuarias en la financiación de los servicios (copago):

a) Se determinará en función exclusivamente de los ingresos de la persona usuaria en los últimos dos años.

b) Se establecerá atendiendo a la capacidad económica de la persona usuaria, en base a criterios de progresividad.
c) Excluirá en todo caso la vivienda habitual del cómputo de recursos económicos.
d) Se fijará de manera uniforme sin tener en cuenta la situación económica individual.

365. En materia de infracciones, ¿qué conducta se tipifica específicamente como 'muy grave' en la Ley 12/2008?

a) No disponer de un registro de personas usuarias actualizado.
b) Someter a personas usuarias a inmovilización física o farmacológica sin prescripción médica.
c) No notificar cambios en la plantilla de personal.
d) El cierre de un centro sin obtener autorización previa.

366. Con arreglo a la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia solo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas o jurídicas que resulten responsables de los mismos, teniendo la condición de autores:

a) Quienes hayan realizado personalmente la infracción.
b) Quienes cooperen en su ejecución mediante una acción u omisión sin la cual la infracción no hubiese podido llevarse a cabo
c) Quienes hayan realizado la infracción de forma premeditada
d) Quienes hayan ideado realizar la infracción, aunque no la hayan efectuado personalmente ni hayan cooperado en su ejecución.

367. La Ley 39/2006 de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia:

a) Tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia
b) Regula la relación entre las familias y las personas en situación de dependencia.
c) Presta su atención a la relación entre las personas en situación de dependencia y las entidades en las que van a ser atendidas de sus necesidades vitales.
d) Regula la relación entre las personas en situación de dependencia y las compañías aseguradoras que van a cubrir sus necesidades mediante la cobertura aseguradora correspondiente.

368. Según la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se entiende por dependencia:

a) Aquella situación en la que se encuentran las personas que no tienen recursos económicos suficientes para vivir de forma autónoma e independiente.
b) El estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida.



c) La situación que sufren las personas que precisan de atención de otras personas en un determinado momento por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad.
d) Aquella en la que se encuentran las personas que tienen discapacidad intelectual o mental para hacer efectivo un grado satisfactorio de autonomía personal en el seno de la comunidad.

369. Son titulares de los derechos establecidos en la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas:

a) Quienes se encuentren en una situación de dependencia y residan en territorio español durante cinco años.
b) Quienes se encuentren en una situación de dependencia siempre que dicha situación resulte permanente y se haya extendido a lo largo de los últimos cinco años.
c) Quienes se encuentren en una situación de dependencia temporal y residan en territorio español durante cinco años.
d) Quienes se encuentren en una situación de dependencia y tengan la nacionalidad española, aunque no tengan residencia en territorio español.

370. En el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia corresponden, entre otras, a las Comunidades Autónomas de conformidad con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas:

a) Planificar, coordinar y dirigir, en el ámbito de su territorio, los servicios de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia
b) Establecer los criterios para determinar la intensidad de protección de los servicios prestados en el marco de la norma.
c) Acordar las condiciones y cuantía de las prestaciones económicas de ayuda.
d) Acordar el baremo de determinación de los grados de dependencia, con los criterios básicos del procedimiento de valoración y de las características de los órganos de valoración.

371. Las prestaciones de atención a la dependencia, de conformidad con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas:

a) No podrán consistir en prestaciones de naturaleza económica.
b) Deberán facilitar una existencia autónoma a las personas en situación de dependencia todo el tiempo que desee y sea posible y proporcionar un trato digno en todos los ámbitos de su vida personal, familiar y social facilitando su incorporación activa en la vida de la comunidad.
c) Solo podrán concederse por la autoridad judicial competente, una vez acreditado en el correspondiente proceso judicial que la persona reúne los requisitos necesarios para recibir dichas prestaciones.
d) Solo podrán proporcionarse mediante centros y servicios públicos, no pudiéndolos llevar cabo los centros privados concertados incluso aunque estén debidamente acreditados.



372. De conformidad con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas, los servicios sociales de promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia:

a) Incluyen, entre otros, los servicios de prevención de las situaciones de dependencia, el servicio de teleasistencia, el servicio de ayuda a domicilio, el servicio de Centro de Día y de Noche, etc
b) No incluyen los servicios de cuidados personales ni de atención residencial.
c) Solo se deberán prestar cuando la persona en situación de dependencia carezca de recursos económicos suficientes para sufragarlos personalmente.
d) Deberán prestarse siempre en el domicilio del dependiente.

373. La situación de dependencia, de conformidad con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas:

a) Se clasifica en los siguientes grados: dependencia moderada, dependencia severa, y gran dependencia
b) Solo se da cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.
c) No se produce si la persona tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.
d) Se determinará por los correspondientes órganos de valoración de la Administración General del Estado que emitirán un dictamen sobre el grado de dependencia.

374. En la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas, el reconocimiento de la situación de dependencia:

a) Se efectuará mediante resolución expedida por la Administración Autonómica y solo tendrá validez en dicho territorio.
b) Se efectuará mediante resolución expedida por la Administración Autonómica correspondiente a la residencia del solicitante y tendrá validez en todo el territorio del Estado
c) Se efectuará mediante resolución expedida por la Administración del Estado y tendrá validez en todo el territorio del Estado.
d) Se emitirá mediane resolución expedida por la Administración del Estado y tendrá validez solo en la Comunidad Autónoma donde tenga su residencia el dependiente.

375. Según la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas, el grado de dependencia:

a) Será revisable a instancia del interesado, de sus representantes o de oficio por las Administraciones Públicas competentes
b) No será revisable, al entender que solo se reconoce cuando se tratan de situaciones irreversibles.
c) Solo será revisable cuando el Ministerio Fiscal así lo reclame a causa de un empeoramiento de la situación de dependencia.



d) Solo será revisable cuando quien esté en situación de dependencia advierta un cambio de su situación y acuda para proceder a dicha revisión a la instancia judicial competente.

376. Según el Código Civil, la patria potestad:

a) Se debe ejercer siempre por ambos progenitores.
b) Comprende velar por los hijos e hijas no emancipados, tenerlos en su compañía, alimentarlos y procurarles una formación integral, representarlos y administrar sus bienes y decidir el lugar de residencia de la persona menor de edad.
c) Se deberá ejercer por uno de los progenitores cuando el otro careciera de recursos económicos suficientes para hacerlo.
d) Se podrá ejercer por uno solo de los progenitores salvo que el otro se oponga expresamente.

377. De conformidad con el Código Civil, los hijos menores no emancipados:

a) Tienen derecho a relacionarse con sus progenitores, aunque éstos no ejerzan la patria potestad, salvo que se disponga otra cosa por resolución judicial.
b) No tienen derecho a relacionarse con sus progenitores si estos no ejercen la patria potestad.
c) Solo tienen derecho a relacionarse con sus progenitores en el caso de que así lo disponga la resolución judicial correspondiente.
d) No tienen derecho a relacionarse con sus progenitores si estos están privados de libertad en un centro penitenciario.

378. Según el Código Civil, los padres:

a) Administrarán los bienes de los hijos con la misma diligencia que los suyos propios, cumpliendo las obligaciones generales de todo administrador y las especiales establecidas en la Ley Hipotecaria.
b) Serán los propietarios de los bienes de los hijos hasta que estos cumplan la mayoría de edad o se hubieren emancipado.
c) Podrán renunciar a los derechos de los que los hijos sean titulares y enajenar o gravar sus bienes inmuebles o establecimientos mercantiles.
d) Podrán administrar los bienes adquiridos por título gratuito cuando el disponente lo hubiere ordenado de manera expresa.

379. De conformidad con el Código Civil, cuando un menor se encuentre en situación de desamparo:

a) El Ministerio Fiscal deberá requerir a la Entidad Pública competente a que adopte las medidas de protección necesarias para su guarda.
b) La Entidad Pública competente deberá adoptar las medidas de protección necesarias para su guarda, salvo que el menor se oponga.



c) Los progenitores mantendrán siempre la patria potestad sobre el menor, aunque la Entidad Pública competente adopte las medidas de protección necesarias para su guarda.
d) Los progenitores verán suspendida la patria potestad sobre el menor cuando la Entidad Pública adopte las medidas de protección necesarias para su guarda.

380. Cuando los progenitores por circunstancias graves y transitorias debidamente acreditadas no puedan cuidar al menor, según el Código Civil:

a) Podrán solicitar de la Entidad Pública competente que esta asuma su guarda durante un tiempo que no podrá ser superior a dos años, salvo que el interés superior del menor aconseje la prórroga de las medidas.
b) Deberán solicitar a la Entidad Pública competente que inicie el proceso de adopción del menor.
c) Deberán proceder a la entrega del menor a un centro de acogimiento familiar, y perderán automáticamente la patria potestad sobre él.
d) Perderán definitivamente la patria potestad si solicitan a la Entidad Pública competente que ésta asuma su guarda temporal.

381. Según el Código Civil, el acogimiento familiar podrá adoptar las siguientes modalidades:

a) Acogimiento familiar de urgencia, acogimiento familiar temporal o acogimiento familiar permanente
b) Acogimiento familiar por resolución judicial y por resolución administrativa, dependiendo de si el menor es extranjero o nacional.
c) Acogimiento familiar consentido o no consentido por el menor.
d) Acogimiento familiar judicial o administrativo, dependiendo de si la decisión es adoptada en una instancia judicial o por una autoridad administrativa, respectivamente.

382. La adopción, según el Código Civil:

a) Requiere que el adoptante sea mayor de 25 años, si bien en el caso de que los adoptantes sean dos bastará con que uno de ellos haya alcanzado dicha edad.
b) Requiere que entre el adoptante y el adoptado la diferencia de edad sea de, al menos 5 años.
c) Se constituye por resolución administrativa firme.
d) Podrá llevarse a cabo sobre cualquier menor en situación de desamparo, con independencia del grado de consanguinidad que tuviera con el adoptante.

383. Para iniciar el expediente de adopción, de conformidad con el Código Civil:

a) Será necesaria la resolución judicial en la que se les designe como adoptantes.
b) Será necesaria la propuesta previa de la Entidad Pública a su favor del adoptante o adoptantes y que hayan sido declarado idóneos para el ejercicio de la patria potestad
c) No será necesaria la declaración de idoneidad para el ejercicio de la patria potestad cuando los adoptantes tuvieran hijos biológicos.

d) Será necesaria la declaración de idoneidad a favor del adoptante o adoptantes tanto se haya concedido de forma previa a la propuesta de la Entidad Pública, como se haya adquirido de forma posterior a la misma.

384. La adopción produce, según el Código Civil:

a) La extinción de los vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia de origen
b) La pérdida total y definitiva de relación del adoptado con los miembros de su familia de origen, aunque existan circunstancias que lo aconsejen.
c) Efectos jurídicos irrevocables, ya que no podrá acordarse nunca su extinción.
d) Efectos jurídicos provisionales, ya que podrá revocarse por la autoridad administrativa en cualquier momento si el adoptado así se lo hace saber.

385. De conformidad con el Código Civil, quedan sujetos a tutela:

a) Los menores no emancipados en situación de desamparo y los menores en situación de abandono
b) Los menores no emancipados en situación de desamparo y los menores no emancipados no sujetos a patria potestad
c) Los menores no emancipados en situación de abandono.
d) Los menores no emancipados en situación de desamparo.

386. Según la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor:

a) Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan tanto en el ámbito público como en el privado.
b) Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea considerado como primordial en el ámbito público, pero no en el privado.
c) Están bajo su ámbito de aplicación los menores de dieciocho años que se encuentren en territorio español y tengan la nacionalidad española.
d) Todo menor de dieciocho años tiene derecho a ser debidamente protegido salvo que haya realizado alguna actividad delictiva previa que le haya supuesto una pena de privación de libertad.

387. Toda resolución de cualquier orden jurisdiccional deberá ser adoptada, según la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor:

a) De conformidad con la opinión que manifieste sobre el particular el menor.
b) De conformidad con la opinión que manifieste el Ministerio Fiscal.
c) Respetando las debidas garantías del proceso, en particular, el derecho del menor a ser informado, oído y escuchado y a participar en el proceso de acuerdo con la normativa vigente
d) Sin necesidad de la intervención en el proceso de profesionales cualificados o expertos.



388. Los menores, según la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor:

a) Podrán solicitar al Ministerio Fiscal las correspondientes medidas cautelares cuando se utilicen sus imágenes con ánimo comercial.
b) Tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar ya la propia imagen
c) No podrán ejercitar las acciones pertinentes contra quienes hubieran llevado a cabo una intromisión ilegítima en su intimidad personal si hubieran actuado con su consentimiento.
d) No tienen derecho a la inviolabilidad del domicilio familiar y de la correspondencia cuando se haya producido una intromisión ilegítima en su derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

389. Los menores, según la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor:

a) Deben participar y corresponsabilizarse en el cuidado del hogar y en la realización de las tareas domésticas de acuerdo con su edad, con su nivel de autonomía personal y capacidad, con independencia de su sexo.
b) Deben respetar las normas de convivencia en los centros educativos, siempre que se les haya informado debidamente de su alcance y contenido.
c) Deben respetar a las personas con las que se relacionan y al entorno en el que se desenvuelven, salvo que los recursos e instalaciones se encuentren deterioradas.
d) Deben respetar a los profesores y otros empleados de los centros escolares, salvo que sean objeto de acoso, en cuyo caso tendrán derecho a defenderse física y verbalmente de tales agresiones.

390. Para la defensa y garantía de sus derechos, el menor, de conformidad con la Ley Orgánica de Protección jurídica del Menor:

a) Podrá poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las situaciones que considere que atentan contra sus derechos con el fin de que éste promueva las acciones oportunas.
b) Solo podrá plantear sus quejas ante el Defensor del Pueblo.
c) Podrá ejercitar individualmente sus reclamaciones ante los tribunales competentes, y asumirá las costas del procedimiento en el caso de que no se estime la reclamación.
d) Deberá necesariamente acudir a la entidad pública competente para que resuelva la situación, sin que se le reconozca capacidad para emprender acciones judiciales.

391. Cuando un ciudadano, por su profesión o actividad, detecte una situación de riesgo o posible desamparo de una persona menor, de conformidad con la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor:

a) Lo comunicará a la autoridad más próxima, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise.
b) Deberá prestarle el auxilio inmediato que precise y, solo cuando se trata de un caso grave, deberá comunicarlo a los agentes más próximos.
c) Deberá cerciorarse de la realidad de los hechos antes de comunicarlo a la autoridad más próxima, protegiéndose así la presunción de inocencia del supuesto autor.



d) Deberá actuar de forma individual evitando toda interferencia innecesaria en la vida del menor.

392. Cuando no sea posible la permanencia en el entorno familiar de origen, de conformidad con la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor:

a) Podrá tener lugar el acogimiento familiar de acuerdo con su finalidad y con independencia del procedimiento en que se acuerde.
b) Deberá incoarse un expediente expres de adopción, si las circunstancias lo aconsejaran.
c) El Ministerio Fiscal, oído el menor, podrá proceder a designar una institución pública en la que el menor sea domiciliado, sin la intervención de la autoridad administrativa competente.
d) Se tomarán las medidas policiales y judiciales necesarias sobre el entorno familiar para que el menor pueda continuar allí.

393. Los acogedores familiares, según la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor:

a) Tendrán derecho a recibir información acerca de la naturaleza y efectos del acogimiento, así como preparación previa, seguimiento y apoyo técnico especializado durante y al término del mismo.
b) No tendrán derecho a percibir una compensación económica, a menos que acredite la concurrencia de los gastos incurridos objeto de compensación.
c) No podrán realizar ningún viaje con el menor, aunque informen sobre el particular a la entidad pública competente.
d) No deberán oír al menor antes de tomar decisiones que le afecten salvo que fuera mayor de 12 años.

394. Los acogedores familiares, según la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor:

a) Deberán velar por el bienestar y el interés superior del menor, alimentarlo, educarle y procurarle una formación integral en un entorno afectivo.
b) No deberán facilitar las relaciones con la familia de origen del menor, en la medida en que ellos hayan sido los causantes de la situación de desamparo del menor.
c) Deberán garantizar el secreto de la identidad de la familia de origen del menor.
d) Informarán a la entidad pública competente de cualquier cambio que se produzca en la familia que pueda poner en peligro la convivencia de la familia, como por ejemplo, el divorcio de los cónyuges, que llevará automáticamente a la extinción del acogimiento del menor.



395. Las medidas para garantizar la convivencia y seguridad en los centros de protección a la infancia, de conformidad con la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor:

a) Consistirán en medidas de carácter preventivo y de desescalada, pudiéndose también adoptar excepcionalmente, en casos extremos, medidas de contención física del menor
b) Se basan en la condición de autoridad de las personas que ejercen la labor de guarda de los menores, legitimados para tomar cualquier tipo de medida represiva como si fueran agentes de la ley.
c) Tendrá que adoptarlas la autoridad administrativa competente, porque el Director del Centro carece de competencia para adoptarlas.
d) Podrán consistir, en última instancia, en medidas de contención mecánica, en las que el menor podrá estar sujeto a una cama articulada o a un objeto fijo o anclado a las instalaciones o a objetos mueble.

396. Las administraciones públicas vascas, las entidades privadas y las personas privadas que intervengan en el ámbito de la prevención de la violencia contra la infancia y la adolescencia, de conformidad con la Ley 2/2024 de Infancia y Adolescencia:

a) Actuarán con la obligada reserva en el ámbito de la atención y protección a la infancia y adolescencia adoptando las medidas necesarias para garantizar el tratamiento confidencial de la información con la que cuenten.
b) No tienen la obligación de colaborar y coordinar sus actuaciones entre sí, pese a tener que regirse por el principio de colaboración interinstitucional
c) No podrán llevar a cabo su actuación sin que las instancias judiciales apoyen todas y cada una de sus decisiones
d) Podrán difundir datos personales de las personas menores víctimas de violencia para que la opinión pública se conciencie y no vuelvan a suceder episodios similares.

397. De conformidad con la Ley 2/2024 de Infancia y Adolescencia, toda persona menor de edad:

a) No tiene derecho a ser oída en los procedimientos administrativos o judiciales por carecer de suficiente juicio para poder participar en ellos.

b) Tiene derecho a ser oída, con todas las garantías y sin discriminación y límite alguno, incluido la edad, en todos los procedimientos y decisiones que le afecten.

c) Deberá ser oída tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo o judicial en que se encuentre directamente implicada, de suerte que, si no lo es, se declarará ineficaz el expediente o nulo el procedimiento judicial, respectivamente.
d) Tiene derecho a prestar testimonio en los procedimientos en los que sea víctima de cualquier tipo de violencia, pero sin contar para ello con apoyo de personas profesionales especializadas, ya que se entiende que tienen siempre madurez suficiente para hacerlo.



398. De conformidad con la Ley 2/2024 de Infancia y Adolescencia, toda persona menor de edad:

a) Tiene derecho a ser inmunizada contra las enfermedades infectocontagiosas contempladas en el calendario de vacunas propuesto por la autoridad sanitaria.
b) Deberá ser inmunizada contra las enfermedades infectocontagiosas contempladas en el calendario de vacunas propuesto por la autoridad sanitaria
c) Deberá ser inmunizada contra las enfermedades infectocontagiosas contempladas en el calendario de vacunas propuesto por la autoridad sanitaria siempre que así lo decidan sus progenitores.
d) Solo tiene derecho a ser inmunizada contra las enfermedades infectocontagiosas cuando se declare una epidemia en la zona o territorio en el que resida.

399. De conformidad con la Ley 2/2024 de Infancia y Adolescencia, todo menor de edad:

a) Tiene derecho a recibir, en el marco de una educación inclusiva, la enseñanza básica que comprende la educación primera, la secundaria y la universitaria.
b) Tiene derecho a la escolarización inmediata en los supuestos de incorporación tardía al sistema educativo derivada de un cambio de residencia o de una modificación de sus circunstancias familiares, personales o sociales.
c) Tiene derecho a recibir la enseñanza básica solamente a partir de los cinco años de edad.
d) Que tenga necesidades específicas de apoyo educativo solo tiene derecho a acceder en las mismas condiciones que el resto del alumnado a la educación obligatoria pero no a la no obligatoria.

400. De conformidad con la Ley 2/2024 de Infancia y Adolescencia, la publicidad dirigida a los menores de edad:

a) No podrá contener un contenido violento, pornográfico o de explotación en las relaciones personales, salvo que sus progenitores o representantes legales lo autoricen expresamente.
b) Podrá incitarles directamente a la compra de productos y servicios siempre que sean saludables, aunque para ello exploten su inexperiencia o incredulidad.
c) No podrá generarles expectativas propias del mundo adulto, como son las relacionadas con el éxito económico.
d) Podrá llevarse a cabo de forma indirecta, no diferenciada o encubierta durante la emisión de programas dirigidos a personas menores de edad.



401. De conformidad con la Ley 2/2024 de Infancia y Adolescencia, las personas menores de edad:

a) Tienen derecho a vivir en un medioambiente saludable y al desarrollo sostenible de éste, así como a conocer y disfrutar del medio natural de la Comunidad Autónoma del País Vasco y a tener un contacto continuado con la naturaleza.
b) Tienen derecho a su plena integración social, salvo que su familia no lo considere necesario.
c) Tienen la obligación de conocer su pueblo o ciudad y a conocer su entorno.
d) Tienen la obligación de conocer las normas de convivencia básica aplicables a la ciudadanía, ya que serán personalmente responsables en caso de su incumplimiento.

402. De conformidad con la Ley 2/2024 de Infancia y Adolescencia, las administraciones públicas vascas:

a) Podrán desarrollar acciones dirigidas directamente orientadas a la prevención de la violencia contra la infancia y la adolescencia incluso más allá de sus respectivas competencias cuando lo requieran las circunstancias del caso.
b) Ejercerán una función preventiva indirecta de la violencia contra la infancia y la adolescencia mediante las actuaciones de promoción del bienestar de la infancia y la adolescencia y del ejercicio de sus derechos.
c) Solo realizarán labores de protección sobre las personas menores de edad cuando hayan sido objeto de una actuación delictiva.
d) Deberán proteger a las personas menores de edad cuando los servicios sociales así lo decidan, y siempre que los tribunales de justicia lo hayan considerado pertinente.

403. De conformidad con la Ley 2/2024 de Infancia y Adolescencia, el Observatorio de la Infancia y Adolescencia:

a) Tendrá como misión analizar de forma permanente la realidad de las persones menores de edad en la Comunidad Autónoma del País Vasco y el impacto de las políticas desarrolladas en aplicación de la presente ley.
b) Tendrá como misión inspeccionar los centros de internamiento de personas menores de edad en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
c) Tendrá como misión regular los requisitos materiales, funcionales y de personal exigibles a los centros de acogimiento residencial para personas menores de edad.
d) Tendrá como misión establecer los requisitos que deben reunir las familias acogedoras de personas menores de edad en situación de desamparo.

404. De conformidad con la Ley 2/2024 de Infancia y Adolescencia:

a) El Consejo Vasco del Bienestar Social constituirá la Comisión Permanente Sectorial para la Atención a la Infancia y la Adolescencia como foro específico de participación de las instituciones públicas y los agentes sociales implicados en la atención a la infancia y a la adolescencia.



b) El Consejo Vasco para la Infancia y la Adolescencia se constituye como el máximo órgano de carácter consultivo y foro específico de participación de las administraciones públicas vascas en materia de infancia y adolescencia.
c) El Consejo Vasco para la Infancia y la Adolescencia diseñará y ejecutará las medidas de protección de la infancia y la adolescencia.
d) El Consejo Vasco para la Infancia y la Adolescencia estará formado exclusivamente por el Gobierno Vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos.

405. De conformidad con la Ley 2/2024 de Infancia y Adolescencia:

a) Las entidades colaboradoras de integración familiar serán aquellas que desarrollan actividades en el ámbito de la protección dirigidas a personas menores en situación de de vulnerabilidad, o en situación de desamparo, así como a personas menores víctimas de violencia, cuando hayan sido homologadas expresamente al efecto.
b) Las entidades colaboradoras de integración familiar están habilitadas para realizar servicios de mediación que tengan como finalidad la adopción de personas menores de edad por una familia.
c) Las entidades colaboradoras de integración familiar no podrán mediar en procesos de acogimiento familiar de personas menores.
d) Las entidades colaboradoras de integración familiar serán homologadas por el Gobierno Vasco.

406. Los órganos judiciales españoles, de conformidad con la Ley de Jurisdicción Voluntaria:

a) Serán competentes para conocer los expedientes de jurisdicción voluntaria suscitados en los casos internacionales cuando concurran los foros de competencia internacional recogidos en los Tratados y otras normas internacionales en vigor para España.
b) Serán competentes para conocer los expedientes de jurisdicción voluntaria suscitados en los casos nacionales e internacionales.
c) Aplicarán a los expedientes y actos de jurisdicción voluntaria siempre la normativa española.
d) Aplicarán a los expedientes y actos de jurisdicción voluntaria siempre la normativa del lugar en el que los actos de jurisdicción voluntaria deban producir sus efectos principales.

407. Presentada la solicitud de iniciación del expediente, de conformidad con la Ley de Jurisdicción Voluntaria:

a) Compete exclusivamente al Letrado de la Administración de Justicia dictar decreto archivando el expediente cuando no resulte admisible, previa audiencia del Ministerio Fiscal.
b) Compete exclusivamente al Juez dictar decreto archivando el expediente cuando no resulte admisible.
c) Compete tanto al Letrado de la Administración de Justicia como al juez dictar decreto archivando el expediente cuando no resulte admisible.
d) Compete al Letrado de la Administración de Justicia dictar decreto archivando el expediente solo cuando a instancia de parte se le haya requerido examinar si cumple las normas en materia de competencia objetiva y territorial.

408. El expediente de jurisdicción voluntaria, de conformidad con la Ley de Jurisdicción Voluntaria:

a) Se resolverá en el plazo de cinco días a contar desde la terminación de la comparecencia o desde la última diligencia practicada, si no se hubiera celebrado comparecencia
b) Se resolverá mediante auto
c) Se resolverá mediante decreto
d) Se resolverá por el Juez y devendrá firme, si bien podrá iniciarse otro sobre idéntico objeto, hayan o no cambiado las circunstancias que dieron lugar al primer expediente.

409. El expediente de jurisdicción voluntaria se tendrá por abandonado, según la Ley de Jurisdicción Voluntaria:

a) Si, pese al impulso de oficio de las actuaciones, no se produce actividad promovida por los interesados en el plazo de seis meses desde la última notificación practicada
b) Si así lo decide el juez competente.
c) Si ha transcurrido un año desde su incoación.
d) Si así lo decide el Letrado de la Administración de Justicia, cuando no ve posibilidades de que prospere, con independencia del tiempo transcurrido desde su incoación.

410. Cuando se necesite el reconocimiento de la filiación no matrimonial para su valida autorización, de conformidad con la Ley de Jurisdicción Voluntaria

a) Se presentará solicitud a la administración competente para el otorgamiento del reconocimiento de la filiación no matrimonial de la persona menor o de la persona con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica.
b) Se presentará solicitud instando autorización judicial para el otorgamiento del reconocimiento de la filiación no matrimonial de la persona menor o de la persona con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica por quien sea hermano o consanguíneo en línea recta del progenitor cuya filiación esté determinada legalmente.
c) Se presentará solicitud instando autorización judicial para el otorgamiento del reconocimiento de la filiación no matrimonial de la persona menor o de la persona con discapacidad para poder inscribir su situación en el Registro Civil.
d) Se solicitará aprobación judicial para la eficacia del reconocimiento de la filiación no matrimonial de un menor con medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica otorgado por quien tenga el consentimiento expreso de su representante legal.



411. Será competente para el conocimiento del expediente de la tutela, según la Ley de la Jurisdicción Voluntaria:

a) El Juzgado de Primera Instancia del domicilio o de la residencia de la persona menor
b) El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del domicilio o de la residencia de la persona menor
c) La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del domicilio o de la residencia de la persona menor
d) La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia del domicilio o de la residencia de la persona menor.

412. La tramitación del expediente de la tutela y la curatela, de conformidad con la Ley de la Jurisdicción Voluntaria:

a) Se iniciará mediante solicitud presentada por el Ministerio Fiscal o por cualquiera de las personas legalmente indicadas para promover la tutela o la curatela
b) Se iniciará mediante solicitud presentada por cualquiera de las personas legalmente indicadas para promover la tutela o la curatela pero no podrá hacerlo el Ministerio Fiscal.
c) Deberá ir a acompañada de la documentación pertinente sin que en la comparecencia pueda intervenir el promotor de la solicitud.
d) No podrá conllevar la actuación de oficio del Juez o del Ministerio Fiscal.

413. El tutor o curador, según la Ley de la Jurisdicción Voluntaria:

a) Podrá recibir la correspondiente retribución siempre que lo solicitare.
b) No podrá recibir ningún tipo de retribución
c) Podrá recibir retribución si el juez la acordase fijando su importe, tomando en consideración la complejidad y extensión de las funciones encomendadas
d) Deberá recibir retribución en todo caso por el ejercicio de su cargo.

414. De acuerdo con la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, el órgano o institución encargado de formular las políticas públicas en relación con la violencia de género a desarrollar por el Gobierno es:

a) La Conferencia Sectorial de Igualdad.
b) El Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer.
c) La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
d) El Ministerio de Igualdad.

415. De acuerdo con la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, la organización de los servicios sociales para la atención integral de las mujeres víctimas de violencia de género por parte de las comunidades autónomas y corporaciones locales responderá a los principios de (indíquese la respuesta INCORRECTA):

a) Multidisciplinariedad profesional.
b) Especialización de prestaciones.
c) Actuación urgente.
d) Atención eficiente y sostenible.



416. De acuerdo con la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta en relación con la trabajadora víctima de violencia de género:

a) Tendrá derecho a la suspensión de la relación laboral con reserva del puesto de trabajo durante el primer año.
b) La suspensión de la relación laboral y la extinción del contrato de trabajo de la trabajadora víctima de violencia de género da lugar en ambos casos a situación legal de desempleo.
c) El tiempo de suspensión se considerará como período de cotización efectiva a efectos de prestaciones de Seguridad Social y de desempleo.
d) A las trabajadoras por cuenta propia que cesen temporalmente en su actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, se les suspenderá la obligación de cotización durante un período de 6 meses, que les serán considerados como de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de Seguridad Social.

417. De acuerdo con la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer:

a) Elaborará la Macroencuesta de Violencia contra las Mujeres.
b) Formulará las políticas públicas en relación con la violencia de género a desarrollar por el Gobierno.
c) Le corresponderá el asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, elaboración de informes y estudios, y propuestas de actuación en materia de violencia de género.
d) Coordinará e impulsará cuantas acciones se realicen en esta materia, en colaboración y coordinación con las administraciones con competencia en la misma.

418. Teniendo en cuenta lo señalado en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, indíquese la respuesta INCORRECTA en relación con los Juzgados de Violencia sobre la Mujer:

a) Podrán crearse Juzgados de Violencia sobre la Mujer en aquellos partidos judiciales en los que la carga de trabajo así lo aconseje.
b) En aquellos partidos judiciales en los que, en atención al volumen de asuntos, no se considere necesario el desarrollo de la planta judicial, se podrán transformar algunos de los Juzgados de Instrucción y de Primera Instancia e Instrucción en funcionamiento en Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
c) Excepcionalmente podrán establecerse Juzgados de Violencia sobre la Mujer que extiendan su jurisdicción a dos o más partidos dentro de la misma provincia.
d) En cada partido judicial habrá un único Juzgado de Violencia sobre la Mujer como órgano judicial específico para el conocimiento de las materias de violencia sobre la mujer, con jurisdicción en todo su ámbito territorial.

419. Teniendo en cuenta lo señalado en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, indíquese la respuesta INCORRECTA en relación con la asistencia jurídica de las víctimas de violencia de género:

a) El abogado(a) designado para la víctima tendrá también habilitación legal para su representación procesal cuando aquella decida personarse como acusación particular.
b) Las víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia.
c) Las víctimas de violencia de género tienen derecho a la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida.
d) Los Colegios de Abogados adoptarán las medidas necesarias para la designación urgente del abogado(a) de oficio en los procedimientos que se sigan por violencia de género

420. Teniendo en cuenta la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, indíquese la respuesta INCORRECTA en relación con el Plan Estatal de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género:

a) La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género elaborará un informe anual de evaluación de dicho Plan y lo remitirá al Congreso de los Diputados para su aprobación.
b) Estará controlado por una Comisión en la que habrá presencia de las víctimas y su entorno, las instituciones, los profesionales y personas de reconocido prestigio social relacionado con el tratamiento de estos temas.
c) Está dirigido tanto a hombres como a mujeres, desde un trabajo comunitario e intercultural.
d) El Plan contempla un amplio programa de formación complementaria y de reciclaje de los profesionales que intervienen en estas situaciones.

421. Según dispone la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se constituirá una Comisión contra la Violencia de Género, la cual (indíquese la respuesta INCORRECTA):

a) Estará compuesta por representantes de todas las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.
b) Emitirá un informe anual que será remitido al Pleno del Consejo Interterritorial y al Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer.
c) Propondrá las medidas que se estimen precisas para que el sector sanitario contribuya a la erradicación de esta forma de violencia.
d) Remitirá al Gobierno y a las Comunidades Autónomas un informe anual sobre la evolución de la violencia ejercida sobre la mujer, con determinación de los tipos penales que se hayan aplicado y la efectividad de las medidas acordadas para la protección de las víctimas.



422. De acuerdo con la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, indíquese la respuesta INCORRECTA en relación con las distintas formas de acreditación de situaciones de violencia de género:

a) Con carácter general, mediante documentos sanitarios oficiales comunicados a la Fiscalía o al órgano judicial.
b) Mediante informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género.
c) Mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida de la Administración Pública competente destinados a las víctimas de violencia de género.
d) Mediante una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima.

423. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, indíquese la respuesta INCORRECTA en relación con la discriminación directa e indirecta por razón de sexo:

a) Se considera discriminación directa por razón de sexo aquella situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.
b) Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad.
c) La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro se considera discriminación directa por razón de sexo.
d) Se considera discriminatoria toda orden de discriminar, directa o indirectamente, por razón de sexo.

424. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, los actos y cláusulas de los negocios jurídicos que sean discriminatorios por razón de sexo:

a) Son actos anulables y no producen efectos.
b) Son actos nulos, pero producen efectos hasta que se declare formalmente su nulidad.
c) Son actos nulos, pero convalidables si se subsanan.
d) Son actos nulos y sin efectos.

425. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, indíquese la afirmación CORRECTA en relación con la tutela judicial efectiva del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres:

a) Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres mientras dure la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación.
b) La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual o acoso por razón de sexo.
c) La legitimación para intervenir en los procesos civiles, sociales y contencioso-administrativos que versen sobre la defensa de ese derecho corresponde exclusivamente a aquellas personas físicas con interés legítimo.
d) En los litigios sobre acoso sexual o acoso por razón de sexo, además de la persona acosada, estarán legitimadas las personas físicas y jurídicas con interés legítimo.



426. Indíquese cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA en relación con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres:

a) El Gobierno, en las materias que sean de la competencia del Estado, aprobará periódicamente un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que incluirá medidas para alcanzar el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres, el cual se presentará a las Cortes Generales para su aprobación.
b) Los poderes públicos deberán incluir sistemáticamente la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y recogidas de datos que lleven a cabo.
c) Los proyectos de disposiciones de carácter general que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros deberán incorporar un informe sobre su impacto por razón de género.
d) El Gobierno elaborará un informe periódico sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres, del cual se dará cuenta a las Cortes Generales.

427. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, indíquese cuál es la afirmación INCORRECTA en relación con el Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella:

a) El Gobierno aprobará, al inicio de cada legislatura, un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella.
b) El Plan establecerá los objetivos a alcanzar en materia de promoción de la igualdad de trato y oportunidades en el empleo público, así como las estrategias o medidas a adoptar para su consecución.
c) El cumplimiento de ese Plan será evaluado anualmente por el Congreso de los Diputados.
d) Ese Plan será objeto de negociación con la representación legal de los empleados públicos.

428. ¿Qué se entiende por discriminación indirecta por razón de sexo según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres?

a) La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro.
b) Todo trato desfavorable a las mujeres motivado por el embarazo o la maternidad.
c) Una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo cuando, debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante.
d) La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.

429. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, indíquese la respuesta INCORRECTA en relación con los supuestos de acoso sexual y acoso por razón de sexo:

a) Tanto en los supuestos de acoso sexual como de acoso por razón de sexo existe el propósito o se produce el efecto de atentar contra la dignidad de una persona.

b) Para poder hablar de acoso sexual se debe tratar de un comportamiento físico de naturaleza sexual, mientras que en el acoso por razón de sexo el comportamiento realizado en función del sexo de una persona puede ser tanto verbal como físico.
c) Se considera que existe discriminación por razón de sexo cuando un derecho o la expectativa de éste se halle condicionado a la aceptación de una situación de acoso sexual o de acoso por razón de sexo.
d) La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo.

430. ¿Qué establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en relación con las acciones positivas (indíquese la respuesta INCORRECTA)?

a) Serán adoptadas por los Poderes Públicos en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres.
b) Son obligatorias tanto en el ámbito público como privado, y se aplicarán siempre a favor de las mujeres.
c) En el ámbito privado tienen carácter facultativo, si bien la Ley fomenta su adopción para alcanzar la igualdad real.
d) Deberán ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso.

431. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, indíquese la respuesta INCORRECTA en lo que se refiere al principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres:

a) Se garantizará en el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta propia.
b) Es únicamente aplicable en el ámbito del empleo público.
c) Se garantizará en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido.
d) Se garantizará en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales y empresariales.

432. Teniendo en cuenta lo que establece el Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, en relación con la representación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos pluripersonales, indíquese cuál de las siguientes opciones será, con carácter general, CORRECTA si se trata de un órgano compuesto por 10 miembros:

a) Al menos 5 de ellos deberán ser mujeres.
b) Al menos 4 serán mujeres, no pudiendo ser más de 6.
c) Al menos 5 de ellos deberán ser hombres.
d) Como máximo deberá haber 5 hombres.

433. De acuerdo con el Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, indíquese cuál de las siguientes afirmaciones, en relación con los planes para la igualdad de mujeres y hombres, es INCORRECTA:

a) El Gobierno Vasco aprobará un plan general que recoja de forma coordinada y global las líneas de intervención y directrices que deben orientar la actividad de los poderes públicos vascos en materia de igualdad de mujeres y hombres.



b) Los Ayuntamientos aprobarán planes para la igualdad, de acuerdo con las líneas de intervención y directrices establecidas en la planificación general del Gobierno Vasco, y garantizarán la ejecución de las medidas previstas en dichos planes, ya sea de manera individual o a través de las mancomunidades, cuadrillas o agrupaciones de las que formen parte.
c) Los Departamentos del Gobierno Vasco elaborarán sus propios planes de actuación, dotados de los necesarios recursos humanos, económicos y materiales para su efectiva implantación.
d) El plan general aprobado por el Gobierno Vasco deberá recoger, al menos, un diagnóstico de la situación, cauces para la participación de los departamentos o áreas implicadas, un presupuesto, calendario, objetivos, sistemas de implantación, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.

434. De acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, en lo referente a las medidas para promover la igualdad de mujeres y hombres en la normativa y actividad administrativa, indíquese cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA:

a) En el momento de acometer la elaboración de una norma, las administraciones públicas vascas han de evaluar el impacto potencial que la norma proyectada pueda tener en la situación de las mujeres y en la de los hombres.
b) Los proyectos de normas que elaboren las distintas administraciones públicas vascas deberán ser informados por Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, a efectos de verificar la correcta aplicación de lo dispuesto en este Decreto Legislativo y, en su caso, realizar propuestas de mejora en tal sentido.
c) En función de la evaluación de impacto realizada, en el proyecto de norma se han de incluir medidas dirigidas a neutralizar su posible impacto negativo en la situación de las mujeres y hombres, así como a reducir o eliminar las desigualdades detectadas y a promover la igualdad de sexos.
d) Los actos administrativos no estarán sujetos a los trámites previstos para la elaboración de normas, salvo las convocatorias de ofertas públicas de empleo y los concursos de traslados.

435. De acuerdo con el Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, el órgano de coordinación de las actuaciones del Gobierno vasco en materia de igualdad de mujeres y hombres es:

a) Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.
b) Comisión Interinstitucional para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
c) Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
d) Unidad administrativa de Igualdad.

436. De acuerdo con el Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, en relación con las prestaciones económicas a las víctimas de la violencia machista contra las mujeres, indíquese la afirmación INCORRECTA:

a) Las víctimas de la violencia machista contra las mujeres quedan exentas de la aplicación del límite mínimo de edad previsto legalmente para la percepción de la renta de garantía de ingresos.
b) Aquellas víctimas de la violencia machista contra las mujeres que estén acogidas en pisos o centros de acogida temporal tienen derecho a percibir la renta de garantía de ingresos si su manutención básica no queda cubierta por dichos pisos o centros.



c) Quienes tengan que abandonar su domicilio habitual y se integren en el de otras personas como consecuencia de una situación de violencia machista contra las mujeres tienen derecho a percibir la renta de garantía de ingresos, con independencia de si quienes las acogen son familiares o no.
d) Además de las prestaciones económicas de carácter general a las que tengan acceso, las administraciones públicas vascas garantizarán su acceso a ayudas económicas específicas, como el pago único para víctimas que acrediten insuficiencia de recursos económicos y unas especiales dificultades para obtener empleo.

437. De acuerdo con el Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, dentro de las infracciones cometidas en materia de igualdad de mujeres y hombres, se considera infracción muy grave:

a) Dificultar o negarse parcialmente a la acción investigadora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.
b) Obstruir o negarse absolutamente a la acción investigadora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.
c) Reincidir en la comisión de al menos tres infracciones leves.
d) Reincidir en la comisión de al menos dos infracciones graves.

438. De acuerdo con el Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, la autoridad competente para imponer sanciones en el ámbito administrativo por la comisión de infracciones graves cometidas en materia de igualdad de mujeres y hombres es:

a) El Director(a) de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.
b) La Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
c) El Consejo de Gobierno.
d) Unidades Administrativas de Igualdad.

439. Teniendo en cuenta lo que establece el Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, en relación con la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres, indíquese cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta:

a) Se adscribe a Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.
b) Estarán representados a partes iguales Gobierno Vasco, diputaciones forales y ayuntamientos.
c) Sus funciones, composición, organización y régimen de funcionamiento serán las que se determinen reglamentariamente.
d) Es el órgano de coordinación de las actuaciones del Gobierno Vasco en materia de igualdad de mujeres y hombres.

440. De acuerdo con el Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, excepcionalmente y con el informe favorable del órgano u organismo competente en materia de igualdad de mujeres y hombres de la institución pública correspondiente, se podrá justificar la no aplicación del criterio de representación equilibrada en los órganos pluripersonales en los siguientes casos (indíquese la respuesta INCORRECTA):

a) Cuando se demuestre de forma objetiva que no hay personas de un sexo determinado con competencia, capacitación y preparación adecuadas para participar en el órgano en cuestión.
b) Cuando, existiendo una representación de mujeres superior al 60 % en el órgano, esa sobrerrepresentación se considere acorde al objetivo de corregir la histórica situación

de desigualdad que han sufrido las mujeres, derivada de su infrarrepresentación en los ámbitos de toma de decisiones.

c) Cuando la designación de sus integrantes sea realizada por varias instituciones u organizaciones, en cuyo caso el criterio de representación equilibrada se deberá mantener por lo que respecta al grupo de personas designadas por una misma institución.
d) Cuando se demuestre de forma objetiva que la presencia de personas de alguno de los sexos en el ámbito o sector al que concierne el órgano en cuestión no alcanza el 40%, en cuyo caso se deberá garantizar que la presencia en dicho órgano del sexo menos representado no sea en ningún caso inferior al 30%.

441. De acuerdo con el Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, la representación equilibrada de mujeres y hombres que se debe garantizar en los tribunales de selección en el empleo público o en jurados para la concesión de premios promovidos o subvencionados por la Administración, supone:

a) Que el 50% como mínimo lo formarán mujeres.
b) Que basta la presencia de una mujer cuando el tribunal o jurado lo formen cuatro personas.
c) Que el tribunal o jurado formado por cuatro personas estará necesariamente formado por dos mujeres y dos hombres.
d) Que no puede haber más de un 50% de hombres

442. La Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del euskera establece que el mapa de planificación sociolingüística del País Vasco:

a) Será elaborado por el Parlamento Vasco a iniciativa del Gobierno.
b) Será elaborado por el Gobierno, previa información al Parlamento Vasco.
c) Será elaborado por el Gobierno a propuesta del Parlamento Vasco.
d) Será elaborado por el Parlamento Vasco, previa información al Gobierno.

443. Conforme determina la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del euskera, ¿cómo debe realizarse la inscripción de documentos en los registros públicos dependientes de la Comunidad Autónoma del País Vasco:

a) Siempre en euskera, con traducción al castellano si se solicita.
b) En cualquiera de las dos lenguas oficiales, a elección del órgano registral.
c) En la lengua oficial en que estén redactados los documentos.
d) Obligatoriamente en ambas lenguas oficiales de forma simultánea.

444. Conforme determina la ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del euskera, toda disposición normativa o resolución oficial que emane de los poderes públicos sitos en la Comunidad Autónoma del País Vasco, deberá estar redactada en forma bilingüe a efectos de:

a) Conocimiento de la ciudadanía de Euskadi.
b) Publicidad oficial.
c) Registro.
d) Transparencia.



445. En las pruebas selectivas para el acceso a la Administración Pública, ¿cómo se valora el conocimiento del euskera para plazas donde no es preceptivo?

a) Tiene una puntuación fija equivalente al 50% de la nota final.
b) Como uno de los méritos a considerar, cuya ponderación realizará la Administración.
c) No puede considerarse su valoración para no discriminar a las personas no hablantes.
d) Sustituye a la prueba de conocimientos generales en ciertos niveles.

446. Conforme al Decreto 67/2003, de 18 de marzo, de normalización del uso del euskera en Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, la aprobación del Plan de Euskera de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud compete:

a) A la Viceconsejería de Política lingüística.
b) Al Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, debiendo informarse a la Viceconsejería de Política lingüística.
c) A la Viceconsejería de Política lingüística, debiendo someterse previamente a consulta de las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad.
d) Al Consejo de Sanidad de Euskadi. debiendo informarse a la Viceconsejería de Política lingüística.

447. Con relación a los objetivos mínimos del uso del euskera en atención primaria, el Decreto 67/2003, de 18 de marzo, de normalización del uso del euskera en Osakidetza-Servicio Vasco de Salud dispone que los servicios asistenciales y los de las áreas de atención al cliente ofertados serán bilingües cuando los ámbitos o zonas de influencia o de actuación de los centros sanitarios tengan un porcentaje de euskaldunes:

a) Superior al 45 %.
b) Superior al 45 % y hasta el 70 %.
c) Superior al 50 %.
d) Superior al 70 %.

448. Según el Decreto 67/2003, ¿cuál de las siguientes personas puede quedar exenta del cumplimiento del régimen general de preceptividad de los perfiles lingüísticos en Osakidetza si así lo solicita?

a) Una persona fija que tenga 30 años al inicio del Plan.
b) Una persona fija que haya superado los 45 años al inicio del Plan.
c) Una persona eventual con 50 años.
d) Una persona fija con titulación universitaria obligatoria.

449. El Decreto 67/2003, de normalización del uso del euskera en Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, tiene por objeto:

a) Aprobar el Plan de Euskera en Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Aprobar los perfiles lingüísticos de los puestos funcionales.
c) Establecer las bases que han de regular en Plan de Euskera en Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

d) Aprobar los perfiles lingüísticos y las fechas de preceptividad de los puestos funcionales.

450. De acuerdo con el orden de prioridad establecido, ¿cuál es la jerarquía correcta de los ámbitos de aplicación del proceso de normalización?

a) Atención especializada, atención primaria y servicios generales.
b) Atención primaria, atención especializada, y servicios administrativos y generales.
c) Servicios administrativos, atención primaria y atención especializada.
d) Atención infantil, medicina general y atención especializada.

CASOS PRÁCTICOS

451. En un centro hospitalario dependiente de un servicio público de salud se solicita en el momento del ingreso a todos los pacientes indicar si profesan alguna religión. El centro lo justifica diciendo que necesitan ese dato por "razones organizativas". A una usuaria se le deniega la entrada mientras no se retire su niqab, al entender la Dirección del centro que la neutralidad del hospital lo exige. La paciente protesta y alega vulneración de sus derechos constitucionales.

a) La actuación es constitucional, porque el derecho a la protección de la salud permite imponer esas condiciones de acceso al servicio.
b) La actuación es constitucional, porque la aconfesionalidad del Estado impide toda manifestación religiosa en centros públicos.
c) La actuación vulnera la Constitución, porque nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias, y la libertad ideológica y religiosa solo puede limitarse en sus manifestaciones por lo necesario para el mantenimiento del orden público protegido por la ley; además, los poderes públicos deben organizar y tutelar la salud pública.
d) La actuación solo vulnera la Constitución en cuanto a la ideología, pero no respecto de la religión, porque sí puede exigirse no mostrar o portar símbolos religiosos en un centro dependiente de un servicio público de salud.

452. Imagina que eres un/a funcionario/a del Ayuntamiento de Bilbao y debes comprobar, para un procedimiento administrativo de participación política, si determinadas personas tienen la condición política de vasco según el artículo 7.1 de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, del Estatuto de Autonomía para el País Vasco. ¿Cuál de los siguientes grupos de personas la tiene?

a) Las personas nacidas en cualquiera de los municipios integrados en la Comunidad Autónoma.
b) Las personas que tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios integrados en la Comunidad Autónoma.
c) Las personas que acrediten vecindad administrativa en cualquiera de los municipios integrados en la Comunidad Autónoma durante al menos un año.



d) Todas las personas que lo soliciten y se inscriban en los correspondientes registros municipales.

453. En el Parlamento Vasco se tramita un proyecto de ley sobre transición energética. La Mesa acuerda su tramitación en comisión con competencia legislativa plena, conforme al Reglamento, lo que permite que la comisión apruebe definitivamente el texto sin necesidad de pasar por el pleno.

Durante la fase final del procedimiento, tras aprobarse el dictamen en comisión, varios grupos parlamentarios minoritarios consideran que el contenido del proyecto tiene una especial relevancia política y social, y entienden que debería ser debatido y votado por el conjunto de la cámara en sesión plenaria.

Dentro del plazo reglamentario, estos grupos promueven una iniciativa para que el texto sea elevado al pleno.

Una vez aprobado un proyecto de ley en comisión con competencia legislativa plena, ¿en qué supuesto debe someterse necesariamente el texto al pleno de la cámara?

a) Cuando así lo solicite la Mesa del Parlamento por razones de técnica normativa.
b) Cuando lo pida la Junta de Portavoces por acuerdo unánime.
c) Cuando lo soliciten, dentro del plazo reglamentario, una quinta parte de los parlamentarios o dos grupos parlamentarios.
d) Siempre, con independencia del procedimiento seguido en comisión.

454. Un menor, de 16 años, se encuentra internado en un centro de menores gestionado por una empresa privada mediante concesión administrativa de la Diputación Foral. Tras una sanción disciplinaria, el menor presenta queja ante el Ararteko por posible trato discriminatorio y falta de motivación. Sin embargo, su madre ya había recurrido judicialmente esa misma sanción. Cuando el Ararteko solicita el expediente, la empresa concesionaria se niega a remitirlo por ser una entidad privada, y el Director foral ordena no entregar la documentación. ¿Qué margen de actuación tiene el Ararteko en este supuesto?

a) Inadmitir la queja por tratarse de un menor internado.
b) Investigar el funcionamiento general del servicio, sin entrar en el examen individual de la sanción si se encuentra judicializada.
c) Directamente anular la sanción interpuesta.
d) Declararse incompetente por estar el centro gestionado por una empresa privada.

455. El Lehendakari del Gobierno Vasco presenta su dimisión repentina por motivos personales. El Parlamento Vasco no logra investir a un nuevo candidato en primera votación ni en segunda. Se abre un periodo de interinidad presidencial mientras se resuelve la crisis ejecutiva.

Según la Ley 7/1981, de 30 de junio, del Gobierno vasco, señale cuál es el límite máximo de la situación de interinidad en la Presidencia:

a) Cuatro meses.
b) Dos meses.
c) Tres meses.
d) Un mes.

456. El Gobierno aprueba un Real Decreto-ley que introduce limitaciones al ejercicio de determinados derechos reconocidos en el Título I de la Constitución, justificándolo en una situación de extraordinaria y urgente necesidad derivada de una crisis económica. El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley dentro del plazo constitucional.

En relación con la validez de dicha norma, señale la afirmación correcta:

a) El Real Decreto-ley es válido, ya que la convalidación por el Congreso subsana cualquier posible infracción constitucional.
b) El Real Decreto-ley es válido, dado que la situación de urgente necesidad permite regular cualquier materia si es convalidado.
c) El Real Decreto-ley es inválido, ya que no puede afectar a los derechos, deberes y libertades regulados en el Título I de la Constitución.
d) El Real Decreto-ley es válido si no es impugnado ante el Tribunal Constitucional en el plazo de tres meses.

457. Un Ayuntamiento aprueba una ordenanza municipal que introduce una limitación al ejercicio de un derecho reconocido en una ley estatal, estableciendo requisitos adicionales no previstos en dicha ley. Un ciudadano impugna un acto administrativo dictado en aplicación de dicha ordenanza, alegando que la misma es contraria a Derecho.

En relación con este supuesto, señale la afirmación correcta:

a) La ordenanza es válida, ya que los entes locales pueden desarrollar libremente las leyes estatales mediante reglamentos.
b) La ordenanza es válida si no ha sido impugnada directamente dentro del plazo establecido.
c) El ciudadano no puede impugnar indirectamente la ordenanza a través del acto de aplicación.
d) El ciudadano puede impugnar el acto alegando la ilegalidad de la ordenanza, aunque esta no haya sido recurrida directamente.



458. Un Ayuntamiento ordena la clausura de un establecimiento mediante una resolución administrativa previa debidamente notificada al interesado. Posteriormente, la Administración procede a la ejecución material de dicha resolución, limitando derechos del particular.

En relación con este supuesto, señale la afirmación correcta:

a) La Administración no puede ejecutar materialmente sus actos, en ningún caso.
b) La ejecución material solo es posible con autorización judicial previa.
c) La actuación es conforme a Derecho, ya que la Administración puede proceder a la ejecución forzosa de sus actos, previo apercibimiento y conforme a la ley.
d) La ejecución material solo es válida si el interesado presta su consentimiento.

459. Un Ministerio acuerda delegar el ejercicio de una determinada competencia en un órgano administrativo dependiente, publicando el acuerdo en el boletín oficial correspondiente. Posteriormente, el órgano superior jerárquico decide, mediante acuerdo motivado, asumir el conocimiento y resolución de un asunto concreto incluido en el ámbito de la delegación.

En relación con este supuesto, señale la afirmación correcta:

a) La actuación no es conforme a Derecho, porque una vez delegada la competencia el órgano delegante pierde definitivamente su ejercicio.
b) La actuación es conforme a Derecho, ya que el órgano superior jerárquico puede avocar para sí el conocimiento de un asunto concreto mediante acuerdo motivado.
c) La actuación es inválida si no media consentimiento del órgano delegado.
d) La actuación solo sería válida si se hubiera revocado previamente la delegación.

460. Una persona interesada presenta una solicitud ante una Administración pública y, transcurrido el plazo máximo legalmente previsto para resolver y notificar, no recibe resolución expresa. Posteriormente, la Administración dicta una resolución expresa fuera de plazo resolviendo el fondo del asunto.

En relación con este supuesto, señale la afirmación correcta:

a) La Administración pierde la competencia para resolver una vez producido el silencio administrativo.
b) La resolución extemporánea es nula de pleno derecho por haberse dictado fuera de plazo.
c) La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todo caso, sin perjuicio de los efectos producidos por el silencio administrativo.
d) La resolución solo será válida si el interesado consiente expresamente su emisión fuera de plazo.



461. Una Administración Pública licita un contrato mediante procedimiento abierto estableciendo varios criterios de adjudicación. Sin embargo, ni en el pliego de cláusulas administrativas particulares ni en el anuncio de licitación se fija la ponderación de dichos criterios ni su orden de importancia.

En relación con este supuesto, señale la afirmación correcta:

a) La actuación es conforme a Derecho, siempre que la ponderación se establezca antes de la adjudicación.
b) La actuación es conforme a Derecho si la mesa de contratación fija posteriormente la ponderación.
c) La actuación no es conforme a Derecho, porque los criterios de adjudicación y su ponderación deben figurar previamente en los pliegos o en el anuncio de licitación.
d) La actuación solo sería inválida si se acreditara perjuicio efectivo para los licitadores.

462. D.ª Leonor, facultativa especialista con nombramiento fijo desde 2012, tiene reconocido el Grado III de carrera profesional desde 2019. En enero de 2021 solicita reducción de jornada del 50% por guarda legal. Durante este período percibe las retribuciones básicas reducidas proporcionalmente; percibe el complemento específico reducido proporcionalmente; percibe un plus de productividad variable conforme a objetivos individuales, ajustada a su jornada efectiva y continúa prestando servicios efectivos en el hospital.

En marzo de 2022 cumple el tiempo mínimo para acceder al Grado IV de carrera profesional, y solicita la evaluación correspondiente. La evaluación positiva se resuelve en diciembre de 2022, reconociéndosele el Grado IV. La Administración determina que los efectos económicos de ese cambio empiecen desde la fecha de la resolución (diciembre 2022), no desde marzo.

En febrero de 2023, Dña. Leonor es nombrada Subdirectora General de Salud Pública, pasando a servicios especiales. Durante 18 meses percibe exclusivamente las retribuciones de alto cargo, no percibe complemento específico sanitario, no percibe productividad variable y tampoco realiza actividad asistencial.

En septiembre de 2024 cesa y reingresa al servicio activo. Dña. Leonor solicita lo siguiente:

1. **Que durante el período de servicios especiales se le abone el complemento de carrera en su cuantía íntegra.**
2. **Que se le abone productividad media del servicio al que pertenecía.**
3. **Que el complemento específico le sea reconocido íntegramente desde el reingreso, sin necesidad de nueva adscripción funcional.**
4. **Que los efectos económicos del Grado IV se retrotraigan a marzo de 2022 (momento en que cumplió el tiempo mínimo).**

Por su parte, la Administración reconoce que el tiempo en servicios especiales computa a efectos administrativos, le deniega la productividad durante el tiempo de los servicios especiales, le deniega los efectos retroactivos del grado, y le reconoce el complemento específico desde el reingreso efectivo.

Al no estar de acuerdo con la resolución administrativa, D.ª Leonor interpone recurso contencioso-administrativo.

De conformidad con el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, ¿cuál es la solución jurídicamente correcta?

a) Procede estimar íntegramente el recurso, pues la carrera profesional y sus efectos económicos derivan automáticamente del tiempo de servicios y los complementos retributivos forman parte del estatuto personal consolidado.
b) Procede reconocer efectos retroactivos del Grado IV desde marzo de 2022 y abonar por la productividad media durante los servicios especiales por mantenimiento del vínculo estatutario.
c) No procede reconocer ningún efecto económico ni durante la reducción de jornada ni durante los servicios especiales, al no existir prestación asistencial a jornada completa.
d) Procede estimar parcialmente el recurso: el tiempo en servicios especiales computa a efectos de carrera, pero la productividad exige prestación efectiva; el complemento específico se vincula al puesto efectivamente desempeñado; y el complemento de carrera solo produce efectos económicos desde su reconocimiento formal.

463. Una médica residente de cuarto año que realiza su formación en una unidad docente acreditada comunica a la Administración sanitaria que se ve obligada a abandonar definitivamente su puesto de trabajo tras haber sido reconocida como víctima de violencia de género, ya que su situación personal le impide continuar prestando servicios en ese centro. Tras la extinción de su contrato por esta causa, la residente solicita información sobre la posibilidad de continuar su formación especializada en otro centro sanitario, alegando que ya ha superado con evaluación positiva varios periodos del programa formativo.

Según lo establecido en el Real Decreto 1146/2006, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:

a) La extinción del contrato por decisión de la trabajadora víctima de violencia de género supone la finalización definitiva del programa formativo, por lo que la residente deberá iniciar nuevamente la especialidad si desea continuar su formación.
b) En este supuesto, la Administración sanitaria podrá ofrecer a la residente la posibilidad de continuar su formación en otra unidad docente, pero los periodos formativos ya realizados deberán ser evaluados nuevamente antes de ser reconocidos.
c) La residente tendrá derecho automático a reincorporarse al mismo programa formativo en otra unidad docente designada por su tutor, manteniendo todas las evaluaciones obtenidas.
d) Cuando la extinción del contrato se produce por decisión de la trabajadora que abandona definitivamente su puesto por ser víctima de violencia de género, la Administración sanitaria ofertará la posibilidad de continuar la formación en otras unidades docentes mediante nuevos contratos, reconociéndose como válidos los periodos de formación ya realizados y evaluados positivamente.

464. El Ayuntamiento de San Donato ha aprobado una reorganización interna que afecta a distintos tipos de personal. En el mismo departamento trabajan cuatro empleados con diferente relación jurídica con la Administración:

- **Koldo, funcionario de carrera, ocupa un puesto con especial dificultad técnica y elevada responsabilidad, además de haber realizado servicios extraordinarios fuera de su jornada normal durante varios meses.**
- **Berta, funcionaria interina nombrada para cubrir una plaza vacante del mismo cuerpo, percibe el sueldo correspondiente al subgrupo, las pagas extraordinarias y determinados complementos vinculados al puesto.**
- **Mikel, funcionario en prácticas que ha superado la fase de oposición y está realizando el curso selectivo previo a su ingreso definitivo.**
- **Ane, personal laboral fijo del Ayuntamiento, cuyas retribuciones se regulan por el convenio colectivo del personal laboral municipal.**

Durante una reunión, el responsable de recursos humanos plantea cómo deben determinarse las retribuciones de cada uno de ellos conforme al Estatuto Básico del Empleado Público , Real Decreto Legislativo 5/2015. Surgen dudas sobre qué factores pueden determinar las retribuciones complementarias de los funcionarios, qué complementos pueden percibir los funcionarios interinos, qué retribuciones corresponden a los funcionarios en prácticas y cómo se determinan las retribuciones del personal laboral.

De conformidad con el Estatuto Básico del Empleado Público, Real Decreto Legislativo 5/2015, cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la situación descrita:

a) Las personas funcionarias interinas perciben únicamente las retribuciones básicas correspondientes al subgrupo de adscripción, sin poder percibir retribuciones complementarias vinculadas al puesto o al rendimiento.
b) Las retribuciones complementarias de Las personas funcionarias pueden atender, entre otros factores, a la progresión en la carrera administrativa, la especial dificultad técnica o responsabilidad del puesto, el rendimiento o resultados obtenidos y los servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada normal.
c) Las personas funcionarias en prácticas deben percibir necesariamente las mismas retribuciones totales que los funcionarios de carrera del cuerpo al que aspiren a ingresar.
d) Las retribuciones del personal laboral se determinan exclusivamente por las leyes de función pública de cada Administración Pública.



465. El Departamento de Servicios Sociales de una administración pública vasca detecta un aumento significativo y temporal de expedientes vinculados a un nuevo programa de atención ciudadana financiado con fondos europeos y con una duración prevista de tres años. Para hacer frente a esta situación, decide crear varios puestos destinados a ejecutar dicho programa.

Durante la ejecución del programa, la administración comprueba que uno de los puestos inicialmente creados requiere asumir funciones adicionales de coordinación y mayor nivel de responsabilidad respecto al diseño de actuaciones y supervisión del equipo técnico. Además, uno de los empleados públicos asignados a estos puestos presenta una discapacidad sobrevenida que exige la adaptación de determinadas condiciones de su puesto de trabajo para poder seguir desempeñando sus funciones.

A la vista de lo dispuesto la Ley del Empleo Público Vasco (2022), ¿cuál de las siguientes actuaciones se ajusta correctamente al régimen jurídico de esta ley?:

a) La administración puede crear puestos de trabajo de naturaleza temporal para la ejecución de programas de duración limitada; sin embargo, la modificación sustancial de las funciones de un puesto ya existente solo puede realizarse mediante negociación colectiva y sin necesidad de amortizar el puesto anterior.
b) La administración puede crear puestos de trabajo coyunturales para atender cargas extraordinarias de trabajo, pero cualquier modificación sustancial de funciones o responsabilidades deberá mantenerse dentro del mismo puesto, sin que proceda su amortización ni la creación de uno nuevo.
c) La administración puede crear puestos de trabajo temporales para programas específicos, modificar libremente sus funciones y niveles de responsabilidad sin necesidad de amortización, y adaptar el puesto de trabajo únicamente cuando se trate de personal funcionario de carrera.
d) La administración puede crear puestos de trabajo de naturaleza coyuntural para ejecutar programas temporales; si se produce una modificación sustancial de las características esenciales del puesto deberá amortizar el anterior y crear uno nuevo o integrarlo en otro existente, debiendo además adaptar el puesto cuando sea necesario para garantizar la accesibilidad de una persona empleada pública con discapacidad.

466. Juan fallece en 2025. Estuvo casado con Ana durante 20 años y se divorciaron en 2015. Tras el divorcio, Ana percibía una pensión compensatoria que se extinguía con el fallecimiento de Juan. Posteriormente, Juan contrajo matrimonio con María, con quien convivió durante 10 años hasta su fallecimiento. Ambas solicitan la pensión de viudedad.

De conformidad con la Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, Ley General de la Seguridad Social, ¿quién tiene derecho a la pensión de viudedad y cómo se distribuirá?

a) Solo tendrá derecho María por ser el cónyuge en el momento del fallecimiento.
b) Tendrán derecho ambas y la pensión se repartirá proporcionalmente al tiempo de convivencia con el causante, garantizándose al menos el 40 % a favor del cónyuge superviviente.
c) Solo tendrá derecho Ana por haber sido acreedora de una pensión compensatoria.
d) Tendrán derecho ambas y la pensión se repartirá a partes iguales entre ellas.



467. Una Comunidad Autónoma, en el ejercicio de sus competencias en materia sanitaria, decide suprimir las Áreas de Salud como estructuras de organización territorial del sistema sanitario, sustituyéndolas por unidades funcionales sin base territorial definida.

En relación con este supuesto, señale la afirmación correcta

a) La actuación es conforme a Derecho, ya que las Comunidades Autónomas pueden organizar libremente su sistema sanitario.
b) La actuación es conforme a Derecho siempre que se garantice la eficiencia del sistema sanitario.
c) La actuación no es conforme a Derecho, porque las Áreas de Salud constituyen las estructuras fundamentales del sistema sanitario según la ley.
d) La actuación solo sería contraria a Derecho si se acreditara una reducción en la calidad asistencial.

468. Un médico que presta servicios en un hospital público se niega a atender a un paciente alegando discrepancia con el tratamiento solicitado. La dirección del centro le requiere para que continúe con la atención, advirtiéndole de posibles responsabilidades.

En relación con este supuesto, señale la afirmación correcta:

a) La actuación del médico es conforme a Derecho, ya que puede renunciar libremente a la atención sanitaria en cualquier caso.
b) La actuación del médico es conforme a Derecho siempre que su negativa se base en criterios clínicos.
c) La actuación del médico no es conforme a Derecho, porque el derecho de renuncia está condicionado a que no se produzca desatención del paciente.
d) La actuación del médico solo sería contraria a Derecho si se acreditara daño efectivo al paciente.

469. En el seno del Sistema Nacional de Salud se plantea la aprobación de un plan integral de salud orientado al abordaje de una patología concreta, incluyendo actuaciones coordinadas en prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en todo el territorio.

En relación con este supuesto, señale la afirmación correcta:

a) La actuación no es conforme a Derecho, ya que la Ley no prevé instrumentos específicos para abordar patologías concretas de forma integral.
b) La actuación es conforme a Derecho, ya que la Ley prevé la elaboración de planes integrales de salud para patologías concretas.
c) La actuación es conforme a Derecho solo si dichos planes tienen carácter exclusivamente autonómico.
d) La actuación solo sería conforme a Derecho si se limita a actuaciones asistenciales.



470. Un paciente sufre una patología grave y acude directamente a un centro privado sin posibilidad de acceso inmediato a los servicios del Sistema Nacional de Salud. Posteriormente solicita el reintegro de los gastos alegando la urgencia del tratamiento recibido.

En relación con este supuesto, señale la afirmación correcta:

a) El reintegro procede en todo caso, siempre que el tratamiento haya sido adecuado.
b) El reintegro procede únicamente si el paciente acredita capacidad económica insuficiente.
c) El reintegro solo procederá si se acredita la existencia de urgencia vital y la imposibilidad de utilización de los servicios públicos.
d) El reintegro procede automáticamente en las prestaciones incluidas en la cartera común

471. En un centro sanitario, el responsable del archivo clínico detecta una acumulación significativa de historias clínicas en soporte papel correspondientes a pacientes cuyos procesos asistenciales finalizaron hace tres años. Con el objetivo de optimizar el espacio y reducir costes de almacenamiento, la dirección del centro plantea proceder a la destrucción de dichas historias clínicas, al considerar que ya no resultan útiles para la actividad asistencial actual y que ha transcurrido un tiempo suficiente desde el alta médica.

Conforme a la Ley 41/2002, ¿es correcta la decisión de destruir estas historias clínicas?

a) Sí, porque una vez finalizada la asistencia sanitaria y transcurrido un tiempo razonable, puede eliminarse la documentación clínica.
b) Sí, siempre que no exista reclamación o procedimiento judicial en curso.
c) No, porque la documentación clínica debe conservarse en condiciones adecuadas durante el tiempo legalmente establecido, con un mínimo desde la fecha de alta de cada proceso asistencial.
d) No, pero únicamente si el o la paciente ha solicitado expresamente la conservación de su historia clínica.

472. Un paciente fallece en un hospital del sistema sanitario vasco. Durante su proceso asistencial, dejó constancia escrita en su historia clínica de su oposición expresa a que determinados episodios clínicos (relacionados con su salud mental) fueran comunicados a terceros tras su muerte.

Semanas después, su hija mayor solicita al centro sanitario copia íntegra de la historia clínica, alegando interés legítimo para conocer las circunstancias del fallecimiento. En la documentación constan: informes clínicos completos (diagnóstico, evolución y tratamiento); anotaciones subjetivas de profesionales, y episodios especialmente sensibles respecto de los cuales el paciente manifestó oposición expresa a su divulgación. El centro debe decidir cómo proceder conforme a la normativa aplicable.

Según el Decreto 38/2012, ¿cuál es la actuación jurídicamente correcta?

a) Facilitar acceso parcial, excluyendo tanto las anotaciones subjetivas como los episodios respecto de los que el paciente manifestó oposición expresa.
b) Denegar totalmente el acceso por existir oposición expresa del paciente.



c) Facilitar copia íntegra de la historia clínica por tratarse de familiar directo con interés legítimo.
d) Exigir autorización judicial previa para cualquier forma de acceso

473. El Departamento competente en materia de sanidad formaliza una relación con una entidad privada para la provisión de servicios sanitarios sin que conste homologación previa. La Administración sostiene que esa homologación no resulta necesaria si el concierto sanitario garantiza derechos y obligaciones recíprocas entre las partes y respeta los derechos de las personas usuarias.

En relación con este supuesto, señale la afirmación correcta:

a) La actuación es conforme a Derecho, porque basta con que el concierto sanitario garantice derechos y obligaciones recíprocas entre las partes.
b) La actuación es conforme a Derecho, siempre que se asegure el respeto a los derechos de las personas usuarias.
c) La actuación no es conforme a Derecho, porque las relaciones entre el Departamento competente en materia de sanidad y cualquier entidad privada para la provisión de servicios sanitarios deben instrumentarse previa homologación.
d) La actuación solo sería contraria a Derecho si no se hubiera tenido en cuenta la utilización óptima de los recursos públicos.

474. Un paciente presenta una reclamación de responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de un servicio sanitario dependiente del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud. El procedimiento se tramita y finaliza mediante resolución administrativa expresa que pone fin al mismo.

En relación con este supuesto, señale la afirmación correcta:

a) La resolución corresponde al Director General del Ente Público por razones de eficacia administrativa.
b) La resolución corresponde al Director-Gerente de la organización de servicios sanitarios en la que se produjo el daño.
c) La resolución corresponde al Consejo de Administración del Ente Público.
d) La resolución corresponde al Consejero competente en materia de sanidad.

475- La Viceconsejería de Administración y Financiación Sanitarias dicta una resolución por la que autoriza un gasto del Departamento de Salud por importe de 650.000 euros. En el expediente no consta acuerdo del Consejero o Consejera ni intervención del Consejo de Gobierno.

En relación con este supuesto, señale la afirmación correcta:

a) La actuación es conforme a Derecho, porque la Viceconsejería tiene atribuida con carácter general la gestión económica y presupuestaria del Departamento.
b) La actuación es conforme a Derecho siempre que exista crédito presupuestario suficiente.



c) La actuación no es conforme a Derecho, porque la autorización de gastos del Departamento de cuantía superior a 500.000 euros corresponde al Consejero o Consejera de Salud, sin perjuicio de las competencias del Consejo de Gobierno.
d) La actuación solo sería contraria a Derecho si el gasto no guardara relación con las funciones propias de la Viceconsejería.

476. Pablo, de 45 años, acude a un Hospital de Osakidetza para valorar el tratamiento a sus dolores en la espalda. La facultativo especialista que le atiende le explica que existen dos opciones clínicas: tratamiento conservador o cirugía. Pablo, muy ansioso, manifiesta expresamente que no quiere recibir más información técnica sobre riesgos y detalles del procedimiento, pero añade que quiere saber quién es la o el profesional responsable de su proceso y llevarse copia del informe clínico y de los datos de salud que constan en su historia clínica. Finalmente, opta por no operarse de momento, pese a que se le advierte de que esa decisión puede empeorar su estado. Pablo se niega a firmar documento alguno porque sostiene que su negativa verbal es suficiente en todo caso. De acuerdo con el tenor del Decreto 147/2015 por el que se aprueba la Declaración de Derechos y Deberes de las personas en el sistema sanitario de Euskadi, indique la opción correcta:

a) Al haber renunciado a recibir información, también pierde su derecho a decidir entre las opciones clínicas disponibles.
b) Pablo puede negarse a recibir información, pero no puede elegir la opción de no hacer nada ante las alternativas clínicas propuestas.
c) Pablo tiene derecho a que se respete su decisión de no recibir más información, a conocer quién es la profesional responsable y a obtener copia de sus datos e informes clínicos; además, si rechaza el tratamiento, debe asumir su decisión y dejarla por escrito cuando sea legalmente exigible o recomendable.
d) Pablo puede rechazar la cirugía, pero solo si esa negativa no puede perjudicar su salud ni conducirle a la muerte.

477. Paciente A, en fase terminal de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ingresado en hospital vasco, se encuentra en situación de incapacidad según opinión del médico responsable. Tiene cónyuge conviviente y dos hijos adultos, y no hay documento de voluntades anticipadas.

Según la Ley 11/2016, de 8 de julio, ¿quién será la persona responsable tanto de recibir la información relacionada con el paciente como de dar o revocar el consentimiento basado en la información?:

a) En todo caso, quien decidan las autoridades judiciales.
b) El representante legal si lo hubiera.
c) A falta de representación legal, los familiares de grado más cercano y, dentro del mismo grado, el de mayor edad.
d) Los hijos.



478. La Organización de Servicios Integrados (OSI) de Bilbao-Basurto de Osakidetza, se convoca un proceso interno para la provisión de un puesto funcional de Técnico/a Superior de Gestión Económica. En la convocatoria se establece como requisito estar en posesión del título de Licenciatura o Grado en Derecho, Economía o Administración y Dirección de Empresas, conforme a la definición del puesto funcional prevista en el Decreto 186/2005, de 19 de julio, regulador de los puestos funcionales del Ente Público.

Una trabajadora con nombramiento como Administrativa (Grupo C1), que posee el título de Grado en Derecho, solicita participar en el proceso alegando que su titulación cumple el requisito exigido y que lleva más de 10 años desempeñando funciones de gestión económica. La Dirección de Recursos Humanos inadmite su solicitud argumentando que, conforme al Decreto 186/2005, los puestos funcionales se definen no solo por la titulación, sino también por su encuadramiento en el grupo profesional correspondiente, y que el acceso requiere pertenecer al grupo de clasificación exigido para el puesto convocado.

De acuerdo con el Decreto 186/2005 sobre puestos funcionales de Osakidetza, el acceso a un puesto funcional viene determinado:

a) Exclusivamente por la titulación académica exigida en la convocatoria.
b) Por la antigüedad en la organización, siempre que se acrediten funciones similares.
c) Por la definición reglamentaria del puesto funcional, que incluye grupo profesional, titulación y funciones.
d) Únicamente por decisión discrecional de la Dirección de la Organización de Servicios.

479. Una persona trabajadora de Osakidetza ha solicitado una ayuda económica por tratamientos médicos, indicando que está recibiendo atención por parte de la Seguridad Social. Sin embargo, en la revisión de su solicitud, se observa que los tratamientos que está recibiendo están cubiertos por el sistema público de la Seguridad Social, que se considera un sistema de previsión pública.

¿Cuál de las siguientes opciones es la más adecuada respecto a la solicitud de ayuda de la persona trabajadora, en atención al Decreto 235/2007 (Acuerdo regulador de condiciones de trabajo en Osakidetza-Servicio Vasco de Salud 2007, 2008 y 2009)?

a) La persona trabajadora tiene derecho a la ayuda económica, ya que la solicitud fue presentada correctamente y el tratamiento no ha sido especificado como excluido.
b) La persona trabajadora no tiene derecho a la ayuda económica, porque los tratamientos que está recibiendo ya están cubiertos por la Seguridad Social y por otro sistema público de previsión.
c) La persona trabajadora tiene derecho a la ayuda económica, ya que la Seguridad Social no cubre todos los tratamientos médicos.
d) La persona trabajadora tiene derecho a la ayuda económica, pero solo si el tratamiento se realiza fuera de la Seguridad Social o de otro sistema público de previsión.



480. El Ayuntamiento de Hiriberde está llevando a cabo trabajos de renovación de parques y jardines. Durante una inspección realizada por una Inspectora de Trabajo y Seguridad Social, se detecta que, en una de las áreas de trabajo, los operarios que usan maquinaria pesada y herramientas eléctricas no están utilizando los equipos de protección adecuados, y las condiciones de trabajo presentan un riesgo grave e inminente para la seguridad de los/las trabajadores/as, específicamente por la falta de señalización adecuada en las áreas de maquinaria y el mal estado de las herramientas.
La Inspectora de Trabajo determina que, si no se toman medidas inmediatas, podría producirse un accidente grave.
La Inspectora de Trabajo y Seguridad Social ordena la paralización inmediata **de los trabajos en esa zona hasta que el Ayuntamiento subsane las deficiencias de seguridad.**

¿Qué debe hacer el Ayuntamiento de Hiriberde, una vez que se ha ordenado la paralización de los trabajos según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales?

a) El Ayuntamiento debe seguir trabajando, ya que no puede paralizar un proyecto público sin la aprobación del Concejo Municipal, pero informará del problema a los interesados y posibles afectados, así como pondrá a disposición de la Inspección todos los medios de que dispone para la solución de las deficiencias.
b) El Ayuntamiento debe notificar la paralización solamente a los responsables de la obra y continuar trabajando sin informar a los/las trabajadores/as.
c) El Ayuntamiento debe notificar inmediatamente la paralización a los/las trabajadores/as afectados, al Comité de Seguridad y Salud y a los representantes del personal, y dar cuenta del cumplimiento a la Inspectora de Trabajo.
d) El Ayuntamiento debe notificar inmediatamente, o en el plazo máximo de 12 horas, la paralización a los/las trabajadores/as afectados y al Comité de Seguridad y Salud, y dar cuenta del cumplimiento a la Inspectora de Trabajo

481. El Ayuntamiento de Hiriberri se enfrenta a un desafío en su departamento de obras públicas. El equipo de mantenimiento municipal está trabajando en la renovación de las aceras en diversas zonas de la ciudad. El encargado de seguridad laboral ha recibido quejas del personal sobre algunos peligros asociados a las condiciones de trabajo, como el uso de maquinaria pesada y la exposición a ciertos productos químicos durante las tareas de pintura.

Se ha observado que algunas personas trabajadoras pueden estar expuestos a vibraciones debido al uso de maquinaria pesada. También se han utilizado pinturas con compuestos químicos que podrían afectar la salud de los empleados. El departamento de seguridad está encargado de realizar una evaluación de los riesgos.

Tareas a realizar:

- Determinar los elementos peligrosos asociados al trabajo (maquinaria, productos químicos, etc.).

- Identificar a las personas trabajadoras que están expuestas a estos riesgos.

- Evaluar el riesgo en función de los criterios establecidos, considerando las opiniones de las personas trabajadoras y los conocimientos técnicos disponibles.

Según el procedimiento de evaluación de riesgos mencionado en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, ¿cuál

sería el procedimiento adecuado para el Ayuntamiento al realizar la evaluación de riesgos en este caso?

a) El Ayuntamiento debe basar su evaluación únicamente en la información técnica disponible, sin consultar a los trabajadores, dado que la maquinaria utilizada es compleja y especializada.
b) El Ayuntamiento debe realizar una evaluación que incluya la identificación de los riesgos y la exposición de los trabajadores, siguiendo las guías de instituciones competentes y tomando en cuenta las normativas específicas aplicables, además de las mediciones necesarias.
c) La evaluación se debe centrar exclusivamente en las condiciones de trabajo sin realizar ninguna medición o análisis, basándose únicamente en la observación del encargado de seguridad.
d) El procedimiento debe excluir la consulta con los trabajadores, ya que su intervención no es necesaria para la evaluación de los riesgos técnicos derivados del uso de maquinaria y productos químicos.

482. Un ciudadano interpone recurso contencioso-administrativo contra una resolución administrativa firme fuera del plazo legalmente establecido. La Administración alega esta circunstancia en el proceso.

En relación con este supuesto, señale la afirmación correcta:

a) El recurso debe admitirse si el acto es ilegal.
b) El recurso puede admitirse si existe interés público.
c) El recurso debe inadmitirse por haberse presentado fuera de plazo.
d) El recurso debe tramitarse y resolverse en cuanto al fondo.

483. Lierni, una trabajadora con relación laboral, es despedida pocos días después de presentar una reclamación interna por discriminación. Ella considera que el despido vulnera su derecho fundamental a la igualdad y quiere impugnarlo judicialmente, solicitando además la nulidad del despido por lesión de derechos fundamentales.

¿Qué vía procesal debería seguir de conformidad con la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social?:

a) Debe presentar únicamente un proceso de tutela de derechos fundamentales, sin poder acumular ninguna pretensión relativa al despido.
b) Puede elegir libremente entre el proceso de tutela de derechos fundamentales o la modalidad procesal de despido.
c) Debe tramitar necesariamente la demanda por la modalidad procesal de despido, acumulando en ella la pretensión de tutela de derechos fundamentales, que tendrá carácter preferente.
d) Debe presentar dos demandas separadas: una por despido y otra por vulneración de derechos fundamentales.

484. Un ciudadano norteamericano, residente en Casablanca, viaja a Gazteiz-Vitoria para someterse a una intervención quirúrgica en una clínica privada. La operación, el alta y el seguimiento inmediato tienen lugar en España. Sin embargo, días después, ya en Marruecos, sufre graves complicaciones y decide plantear en España una demanda civil de responsabilidad extracontractual contra esa clínica así como contra el facultativo que le operó, sin que exista pacto de sumisión expresa o tácita. La demanda se presenta el 1 de Agosto e interesa además, con carácter urgente, la conservación de la grabación quirúrgica y de determinados registros clínicos digitales. El demandante solicita prestar declaración por videoconferencia desde Marruecos. Un enfermero propuesto como testigo y una perito del hospital anuncian que declararán y presentarán su informe en euskera. La parte demandada sostiene que: 1) los tribunales españoles no son competentes porque el demandante vive fuera de España y el resultado lesivo se manifestó en Marruecos; 2) en agosto no puede practicarse ninguna actuación civil; y 3) las declaraciones y documentos en euskera carecen de validez si no van acompañados desde el inicio de traducción al castellano. En relación con la competencia judicial internacional de los tribunales españoles:

a) Los tribunales españoles no serían competentes porque el demandante reside fuera de España.
b) Los tribunales españoles solo serían competentes si existiera sumisión expresa a favor de España.
c) Los tribunales españoles son competentes porque, en materia de obligaciones extracontractuales, basta con que el hecho dañoso se haya producido en territorio español.
d) Los tribunales españoles no son competentes porque las secuelas aparecieron en Marruecos.

485. El Instituto de Investigación Sanitaria Biogipuzkoa quiere usar para un proyecto de investigación una serie de muestras biológicas obtenidas años atrás con finalidad asistencial. Como las muestras están codificadas y no es posible localizar a varios pacientes, el correspondiente Comité de Ética emite un informe favorable. De acuerdo con la Ley 14/2017, de investigación biomédica, señale la opción correcta:

a) Puede perfectamente usar esas muestras porque están codificadas.
b) Únicamente podría usarlas si cuenta con el permiso de todos los y las pacientes.
c) Puede usarlas excepcionalmente sin nuevo consentimiento, si obtenerlo no es posible o supone un esfuerzo no razonable y concurren los requisitos legales.
d) Solo puede usarlas si están en un biobanco nacional.

486. MEDVOICE S.L. es una empresa privada contratada por un Hospital público de Osakidetza que se encarga de la gestión de una plataforma de dictado y transcripción de los informes e historias clínicas. A través de ese servicio se tratan voces de profesionales, datos identificativos de pacientes y datos de salud contenidos en informes de urgencias y alta. Un paciente detecta que en un informe transcrito aparece erróneamente un antecedente psiquiátrico que no le corresponde y presenta ante MEDVOICE S.L. una solicitud de acceso y supresión. Transcurre un mes sin respuesta. La empresa finalmente le indica que no puede reclamar todavía ante la Autoridad Vasca de Protección de Datos (AEPD) porque como es una mercantil privada, la competente en todo caso sería la Agencia Española de Protección de Datos; y porque es obligatorio que se dirija con carácter previo al Delegado de Protección de Datos de MEDVOICE S.L.

a) La reclamación debe dirigirse necesariamente a la AEPD, porque una empresa privada nunca puede quedar bajo la competencia de la Autoridad Vasca de Protección de Datos, aunque trate datos para un hospital público.
b) El paciente debía acudir primero, de forma obligatoria, al Delegado de Protección de Datos; solo si éste no respondiera en dos meses podía reclamar ante la Autoridad Vasca de Protección de Datos.
c) La Autoridad Vasca de Protección de Datos puede ser competente, porque la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales atribuye competencia a las autoridades autonómicas respecto de tratamientos del sector público autonómico o local y de quienes presten servicios mediante gestión directa o indirecta, y la Ley 16/2023 de la Autoridad Vasca de Protección de Datos extiende su ámbito a entidades privadas que presten servicios públicos y a quienes actúen como encargados del tratamiento; además, acudir previamente al delegado de protección de datos es potestativo
d) La Autoridad Vasca de Protección de Datos solo sería competente si la reclamación se hubiera presentado directamente contra el Hospital, pero no cuando la solicitud de derechos se dirigió contra la empresa contratista.

487. Un ciudadano solicita acceso a información que se encuentra en proceso de elaboración por parte de la Administración.

En relación con este supuesto, señale la afirmación correcta:

a) La Administración debe conceder el acceso en todo caso.
b) La Administración puede inadmitir la solicitud por tratarse de información en curso de elaboración.
c) La Administración debe suspender el procedimiento hasta que finalice la elaboración.
d) La Administración debe conceder acceso parcial automáticamente.



488. Miren de 68 años padece un deterioro cognitivo progresivo. Vive con su hijo Xabier, quien desde hace años se encarga de acompañarla al médico, gestionar sus gastos ordinarios y ayudarla en su vida cotidiana. María no otorgó previamente poderes preventivos ni dispuso ninguna medida voluntaria de apoyo. Recientemente ha surgido la necesidad de vender una vivienda propiedad de María para financiar su residencia y cuidados futuros.

Según el Código Civil, ¿qué medida de apoyo debe considerarse con carácter preferente cuando resulta suficiente para atender las necesidades de la persona sin necesidad de adoptar medidas judiciales?

a) La tutela.
b) La curatela representativa.
c) La guarda de hecho.
d) La patria potestad prorrogada

489. Kepa y Ane fallecen en un accidente de tráfico dejando una hija de 14 años, Laura. Ninguno de los abuelos puede hacerse cargo de ella. En testamento, los padres habían designado como tutor a su hermano Carlos, quien acepta el cargo. Al no existir controversia entre los familiares, se inicia un expediente de jurisdicción voluntaria para la constitución de la tutela de Laura.

¿Qué órgano es competente para tramitar el expediente de constitución de la tutela en jurisdicción voluntaria?

a) El Registro Civil de domicilio de la tutelada.
b) El Juzgado de Primera Instancia del domicilio de la tutelada.
c) El Ayuntamiento donde resida la tutelada
d) El Ministerio Fiscal

490. El Gobierno Vasco, en el marco de sus competencias en materia de servicios sociales, decide implantar una nueva prestación económica dirigida a personas en situación de vulnerabilidad. Para ello, inicia el procedimiento de regulación de dicha prestación como parte de su acción directa, sin haber recabado informe previo del órgano consultivo correspondiente en materia de servicios sociales.

Una asociación del sector impugna la medida alegando que no se ha seguido el procedimiento legalmente establecido para su declaración como prestación del sistema.

En el contexto descrito, conforme al artículo 39.4 de la Ley 12/2008, de Servicios Sociales, ¿qué requisito es necesario para que una prestación sea declarada como parte de la acción directa del Gobierno Vasco?

a) Debe ser declarada por decreto previo informe favorable del Consejo Vasco de Servicios Sociales.
b) Debe contar con la aprobación unánime de las tres Diputaciones Forales.
c) Solo puede aplicarse a prestaciones de carácter económico.
d) Debe afectar al menos al 10% de la población total de la comunidad



491. Karmele, de 82 años, vive sola. Debido a una enfermedad degenerativa, necesita ayuda diaria para asearse, vestirse y preparar sus comidas. Su hija Ane la atiende habitualmente, aunque compagina estos cuidados con su trabajo. Tras iniciar el procedimiento correspondiente, la administración competente valora la situación de Carmen y le reconoce un Grado II de dependencia (dependencia severa). Si la administración competente considera adecuado que Ane siga cuidando a su madre en el domicilio familiar, se le podría reconocer:

a) Una prestación económica para cuidados en el entorno familiar.
b) Una beca de estudios.
c) Una pensión contributiva automática.
d) Una prestación por desempleo.

492. Lucía, de 16 años, y su hermano Diego, de 11, se han quedado huérfanos tras el fallecimiento de sus padres en un accidente. En testamento, los padres designaron como tutor a su amigo Luis, una persona de confianza que mantiene una excelente relación con ambos menores. Sin embargo, la abuela materna considera que debe ser ella quien asuma el cuidado de los niños. Mientras se resuelve la constitución de la tutela, los menores permanecen viviendo con la abuela, quien atiende sus necesidades diarias.

La designación de Luis como tutor por los padres:

a) Carece de eficacia jurídica.
b) Deberá ser tenida especialmente en consideración por la autoridad judicial.
c) Lo convierte automáticamente en tutor.
d) Solo es válida si la ratifica la abuela.

493. Sara tiene 8 años. Los servicios sociales detectan una situación de grave desatención por parte de sus progenitores: absentismo escolar reiterado, falta de cuidados básicos y problemas de consumo de sustancias en el domicilio. La entidad pública competente declara la situación de desamparo y asume la tutela de Sara. Tras valorar varias alternativas, decide que la menor conviva temporalmente con un matrimonio formado por Ana y Javier, quienes han sido previamente valorados como familia acogedora. Durante el acogimiento, Sara mantiene contactos periódicos con sus padres biológicos y expresa su deseo de seguir viviendo con Ana y Javier porque se siente segura y bien atendida. El caso es revisado periódicamente por la entidad pública constituyendo el interés del menor el principio rector de toda actuación de protección. Si desaparecen las causas que motivaron el desamparo y la reunificación es beneficiosa para Sara:

a) Nunca podrá regresar con su familia de origen.
b) Deberá valorarse el retorno familiar en interés de la menor.
c) El acogimiento se convierte obligatoriamente en adopción por lo que no podrá regresar con sus padres biológicos..
d) La decisión corresponde exclusivamente a los acogedores.

494. Ane tiene 14 años y vive en Donostia-San Sebastián. En su centro educativo sufre comentarios discriminatorios en redes sociales por su origen familiar. Ane solicita participar en las reuniones donde se debatirán las medidas para neutralizar dichos cometarios porque considera que su opinión debe ser escuchada. De igual forma sus padres solicitan la intervención del centro educativo y de los servicios competentes. Paralelamente, el ayuntamiento pone en marcha un programa para diseñar espacios de ocio juvenil y consulta a los adolescentes del municipio. En esta situación, qué papel le corresponde al centro teniendo en cuenta el interés superior de la menor y sus derechos a la participación, igualdad y protección.

a) Elaborar un plan de convivencia que establezca la programación de actividades dirigidas a la comunidad educativa en su conjunto con el fin de adquirir habilidades para la resolución pacífica de conflictos.
b) Diseñar programas de participación infantil.
c) Excluir sistemáticamente a Ane y a los menores de cualquier proceso de consulta pública que les afecte.
d) Adoptar medidas de carácter judicial contra la discriminación sufrida por Ane.

495. Gorka y Arantxa están divorciados y tienen un hijo de 13 años llamado Jon. Ambos ejercen la patria potestad. Jon ha sido admitido en un centro educativo internacional situado en el extranjero. Arantxa considera que el traslado es muy beneficioso para su formación académica, mientras que Gorka se opone por considerar que perjudicará la relación familiar. Al no alcanzar un acuerdo sobre una decisión de especial relevancia para el menor, Arantxa presenta un expediente de jurisdicción voluntaria para que se atribuya la facultad de decidir sobre esta cuestión. Durante la tramitación, Jon manifiesta su deseo de cursar sus estudios en el extranjero. Al tener 13 años:

a) No podrá ser escuchado, ni atendidas sus opiniones por carecer de capacidad jurídica.
b) Deberá ser oído atendiendo a su madurez, y, si fuera necesario, contar con el auxilio de especialistas, para que pueda expresar adecuadamente sus opiniones.
c) Solo puede intervenir mediante abogado.
d) Su opinión es vinculante para la tramitación del expediente.

496. Una compañía aseguradora ofrece un seguro médico privado. Durante la contratación, informa a una clienta de que necesita saber si está embarazada y que, en caso afirmativo, la prima del seguro será más elevada debido a los costes asociados al embarazo.

De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿cuál de las siguientes actuaciones es INCORRECTA?

a) Ofrecer el seguro médico sin diferenciar primas por razón de sexo.
b) Aplicar las mismas primas y prestaciones con independencia del embarazo.
c) Solicitar información sobre el embarazo por razones de protección de la salud de la persona asegurada.
d) Incrementar la prima del seguro por encontrarse la solicitante en situación de embarazo.



497. María es una víctima de violencia de género que cumple con los requisitos de rentas bajas y especiales dificultades para obtener un empleo. Se encuentra en proceso de solicitar la ayuda social de pago único prevista en la Ley Orgánica 1/2004. María tiene a su cargo a un hijo menor de edad y a su madre, que convive con ella y tiene reconocida una discapacidad del 45%.

En relación con el importe de la ayuda que María podría percibir según el artículo 27 de la LO 1/2004, señale la afirmación INCORRECTA:

a) Si María no tuviera responsabilidades familiares ni discapacidad, el importe general de la ayuda sería el equivalente a seis meses de subsidio por desempleo.
b) En el caso de que María no tuviera cargas familiares, pero ella misma tuviera reconocida una discapacidad del 33%, la ayuda ascendería a doce meses de subsidio.
c) Dado que María tiene responsabilidades familiares (hijo y madre a su cargo), el importe de su ayuda será necesariamente de dieciséis meses de subsidio por desempleo.
d) Debido a que María tiene responsabilidades familiares y, además, una de las personas con las que convive tiene una discapacidad superior al 33%, el importe podría alcanzar los veinticuatro meses de subsidio.

498. En un proceso de selección para cubrir una plaza de monitor/a de un albergue de montaña, la entidad exige que la persona candidata pueda realizar rescates en zonas escarpadas cargando 25 kg de material. Una de las personas aspirantes denuncia que esta exigencia constituye discriminación por razón de sexo.

Según la Ley Orgánica 3/2007, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente esta situación?

a) La diferencia de trato sería lícita si la característica exigida (la capacidad física concreta) constituye un requisito profesional esencial y determinante para el puesto.
b) La igualdad de trato solo es obligatoria en el empleo público, por lo que la empresa privada puede fijar libremente requisitos distintos por sexo.
c) Cualquier diferencia de trato entre personas de distinto sexo está prohibida en todos los casos.
d) Basta con que se hayan respetado formalmente los criterios de mérito y capacidad para descartar la existencia de discriminación.

499. Carolina, residente en Vitoria-Gasteiz, trabajó en una empresa de mensajería donde sufrió un trato discriminatorio por parte de su supervisor debido a su embarazo. Tras una baja por estrés, Carolina decide abandonar la empresa el 15 de febrero de 2025, fecha en la que cesa definitivamente la conducta discriminatoria. Hoy, 10 de marzo de 2026, Carolina acude a una asociación de defensa de los derechos de la mujer para que presenten una queja formal ante Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer en su nombre.

Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, para que la queja de Carolina sea admitida a trámite por Emakunde:

a) Carolina deberá acreditar que ha agotado previamente la vía administrativa o judicial correspondiente contra la empresa.
b) No podrá interponer la queja porque esa posibilidad está limitada exclusivamente a ciudadanas con vecindad civil vasca en el momento de los hechos.
c) La asociación podrá iniciar el procedimiento en nombre de Carolina por sí misma, aunque no cuente con la autorización de ella.



d) La queja de Carolina será inadmitida porque ha transcurrido más de un año desde que cesó la conducta susceptible de motivar esa queja.

500. Una ciudadana presenta una solicitud en euskera ante un ayuntamiento del País Vasco para la obtención de una subvención municipal. La Administración tramita el expediente y le notifica la resolución exclusivamente en castellano, sin ofrecer versión en euskera ni constar elección lingüística distinta por parte de la interesada.

La ciudadana impugna la actuación administrativa por vulneración de sus derechos lingüísticos.

Conforme a la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del euskera, ¿qué derecho ha sido vulnerado en el supuesto planteado?

a) El derecho a que todos los actos administrativos sean redactados en euskera.
b) El derecho a utilizar cualquiera de las lenguas oficiales en sus relaciones con la Administración y a ser atendido en la lengua elegida.
c) El derecho a que la Administración utilice exclusivamente el euskera en sus actuaciones.
d) El derecho a no usar el castellano en ningún caso.